

152
2Ej



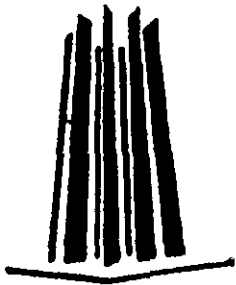
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES "CAMPUS ARAGON"

"EL DESEQUILIBRIO POLITICO DEL ESTADO MEXICANO A LA LUZ DE LA PROBLEMÁTICA PARTIDISTA Y EL PODER EJECUTIVO, QUE EN 1996 EXISTE"

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA:
MA. GUADALUPE HERRERA PEREZ



MEXICO

1999

1999

COPIA

TESIS CON FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

CÓN CARINO Y AGRADECIMIENTO A MI PADRE

SR. NORBERTO HERRERA RODRIGUEZ

Porque con sus consejos y ejemplo, motivó
en mí el deseo de superación.

IN MEMORIAM

A MI MADRE SRA. ANA MARIA PEREZ MORA

y

A MI TIA BALBINITA HERRERA

Quienes ya no están presentes en
vida, pero que recuerdo con cariño

A MIS HERMANOS:

JUANA HORTENCIA HERRERA PEREZ Y
JUVENTINO HERRERA PEREZ

*Porque juntos hemos compartido momentos
tristes y alegres de nuestras vidas.*

A MI ASESOR:

LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ NAVA
*Por su apoyo y dedicación para
lograr este objetivo.*

A MI QUERIDA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES "ARAGON"
(U. N. A. M.)

G R A C I A S

I N D I C E

PAGINA

INTRODUCCION	I
------------------------	---

CAPITULO PRIMERO

LAS DIRECTRICES DE LA CRISIS DEL ESTADO MEXICANO	1
--	---

A. LOS GRUPOS POLITICOS EN MEXICO	2
B. LAS ALTERNATIVAS PARTIDISTAS	13
C. LOS CAMBIOS JURIDICOS Y POLITICOS	19
D. PERSPECTIVA DE LA CRISIS DE NUESTRO ESTADO . . .	31

CAPITULO SEGUNDO

LA INFLUENCIA POLITICA DEL PRESIDENCIALISMO	35
---	----

A. LAS PROPUESTAS EJECUTIVAS	36
B. LAS ASAMBLEAS DEL PARTIDO OFICIAL Y EL PODER EJECUTIVO	42
C. LA CRISIS DE PARTIDO Y LAS ALTERNATIVAS <u>EJE</u> CUTIVAS	69

CAPITULO TERCERO

LA PRESENCIA PARTIDISTA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL EJERCICIO DEL PODER DE MEXICO	75
---	----

A. EL LIBERALISMO SOCIAL	76
------------------------------------	----

	PAGINA
B. SU CONTENIDO DE ASAMBLEA	82
C. LAS PROPUESTAS DE CONTENIDO	92

CAPITULO CUARTO

LA PROBLEMATICA PARTIDISTA DENTRO DEL ESTADO MEXICANO	110
--	-----

A. SU INICIO	111
B. SU CONTENIDO	121
C. SUS METODOS DE ESTRUCTURACION	129
D. LA PROBLEMATICA ESTATAL DEL ASPECTO POLITICO DE MEXICO	139
E. EL CAMBIO POLITICO ENTRE EL PARTIDO OFICIAL Y EL PODER EJECUTIVO EN LA ACTUALIDAD	168

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

El desarrollo de la *democracia en el Estado Mexicano* siempre ha ocupado un espacio de estudio por parte de la Teoría - General del Estado y del Derecho Constitucional; de tal manera, que el entendimiento estatal de lo que es la democracia, va íntimamente ligada con el Derecho Constitucional que en su sentido, de esta la define de la siguiente manera: *Democracia es el mejoramiento político, económico, social y cultural de un Estado. Esto, nos demuestra que el entendimiento democrático de un Estado es el desarrollo total de éste con todo y sus elementos que son territorio, pueblo y poder soberano. Por lo tanto, el desarrollo democrático y la transformación política de un Estado se mide por el equilibrio político del partido oficial en el poder y el poder ejecutivo que ejerce el poder. Además, los partidos oficiales en el poder y el poder ejecutivo, son los binomios que determinan la decisión política de un Estado.*

Las anteriores afirmaciones, nos conducen que en el Estado Mexicano y sobre todo a partir del 6 de julio de 1988 que se efectuaron las elecciones federales en que Carlos Salinas de Gortari, salió triunfante, pero que dejó entrever una ruptura entre su partido oficial en el poder PRI; y el poder ejecutivo que el comandaría en ese sexenio, lo cual trajo como consecuencia un desequilibrio político en nuestro Estado, con

La muerte de Luis Donald Colosio Murrieta el levantamiento - del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, la muerte del Cardenal Adolfo Posadas Ocampo, la muerte de Mario Ruíz Masieu y la llegada al poder en la gobernatura del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Estos parámetros que siguen de actualidad, nos demuestran un desequilibrio político del Estado Mexicano a la luz de la problemática partidista y el poder ejecutivo que en la actualidad comanda el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León.

Por tal motivo nuestro trabajo de tesis estudia esta temática bajo cuatro aspectos; el primero de ellos plantea las directrices de las crisis del Estado Mexicano; el segundo aspecto plantea la influencia política del presidencialismo en México; el tercer aspecto plasma la presencia partidista del Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio del poder político en México y, el cuarto aspecto estudia la problemática partidista dentro del Estado Mexicano. Estas tendencias simplemente, tratan de ilustrar el gran desequilibrio de poderes que existen en la actualidad en el Estado Mexicano.

CAPITULO PRIMERO

LAS DIRECTRICES DE LA CRISIS DEL ESTADO MEXICANO

- A. LOS GRUPOS POLITICOS EN MEXICO
- B. LAS ALTERNATIVAS PARTIDISTAS
- C. LOS CAMBIOS JURIDICOS Y POLITICOS
- D. PERSPECTIVA DE LA CRISIS DE NUESTRO ESTADO

A. LOS GRUPOS POLITICOS EN MEXICO

El 6 de julio de 1988 el sistema político se cimbró en las urnas. El candidato presidencial priísta Carlos Salinas de Gortari obtuvo 9.6 millones de votos, casi la misma cifra que 24 años atrás Gustavo Díaz Ordaz obtuvo en la contienda presidencial, sólo que entre ambos existían diferencias sustanciales: Carlos Salinas de Gortari alcanzó esta cantidad teniendo un padrón electoral tres veces más grande que en 1964. Su porcentaje de votación se refugió en un sospechoso e impugnado 50.2 por ciento de la votación nacional, el índice más bajo en toda la historia de la maquinaria electoral priísta, acostumbrada a legitimarse con el 70 por ciento de la tajada de la votación.

Las frías cifras sacaron a la luz una crisis inédita en la historia del Partido Revolucionario Institucional. Una crisis que cuestionaba su esencia misma como partido hegemónico - que no estuvo nunca acostumbrado a competir por el poder sino a mantenerlo. Una crisis que arrastraba consigo a otro de los pilares del sistema político mexicano: el presidencialismo.

Si bien fue evidente que la crisis tuvo una manifestación electoral, ésta no tenía sus orígenes en las urnas sino en los entretelones del poder político.

"La propia disidencia interna surgida en agosto de 1986 fue una muestra del desgaste de los mecanismos tradicionales de coop

tación priísta para evitar la crítica pública y frontal y para neutralizar el descontento de un amplio sector de militantes - que detectaban con claridad las razones de la crisis interna".¹⁾

Tras la debacle de las urnas estaba la crisis de cohesión del partido. El Partido Revolucionario Institucional había en frentado una de las deserciones más fuertes de su historia, de mostrando el fracaso de los métodos tradicionales de cooptación y arreglo político que le dio fama como partido de la estabili-
dad.

Tres aspectos confluyeron en esta crisis:

1. El desplazamiento de grupos y camarillas al interior de la clase política priísta frente al ascenso de una nueva - élite tecnocrática que en su paso alteró las reglas del juego tradicionales, aunque sus métodos fueron en esencia igual de autoritarios que la vieja clase desplazada.

2. El desgaste acelerado del modelo corporativo de parti-
do que ya no ajustaba con las necesidades de legitimación del grupo gobernante ni con el perfil de una sociedad que demanda-
ba cada vez con mayor fuerza una expresión política abierta, - libre de coacciones y de tutelajes clientelares.

3. la implantación de un proyecto económico que se con-

1) PAOLI BOLIO, Francisco. Legislación Electoral y Proceso Po-
lítico en México. 10a. ed., Edit. Anuario de la UAM. México
D. F., 1993. Pág. 20.

traponía a las propias raíces ideológicas y programáticas del priísmo. La aplicación de un modelo neoliberal comenzaba a arrasar en los hechos en cuanto mito priísta existiera, desde el nacionalismo revolucionario hasta la justicia social. Era, en síntesis, una crisis de identidas del Revolucionario - Institucional.

De esta forma, el desplazamiento de la tradicional clase política priísta, la decadencia orgánica del partido y su crisis de identidad programática constituyeron las tres vertientes que desembocaron en la crisis electoral de 1988.

En el centro del problema estaba el reclamo democrático - de decenas de militantes que organizaron la disidencia interna, la misma que posteriormente derivaría en una de las decisiones más importantes de la historia del partido oficial.

La historia del ascenso de la nueva élite se comenzó a escribir precisamente con el fin del período diazordacista. El otrora precandidato presidencial desplazado por Echeverría, Antonio Ortíz Mena, se lo dejó en claro la mañana del 4 de octubre de 1987 a su sobrino Carlos Salinas de Gortari. Con una sonrisa el ex secretario de Hacienda le recordó al joven economista: Tardamos veinte años, pero llegamos. Era el glorioso día del destape priísta. Menos lucido de lo que hubieran querido los salinistas debido al desliz de su otrora contrincante Alfredo del Mazo.

La frase del otrora estratega del desarrollo estabilizador

y reconocido como el patriarca de los tecnócratas mexicanos demostraba el indudable beneplácito de un sector político ante la nominación de Salinas de Gortari como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. El propio Ortiz Mena fue aspirante dos sexenios consecutivos a la primera magistratura, aunque su perfil de técnico, con escasa carrera de partido, fue un obstáculo permanente en sus aspiraciones.

Si bien Carlos Salinas de Gortari no era el primer aspirante con un perfil similar, sí destacaba como el representante más eminente de un nuevo grupo político que desplazaba a pasos agigantados a la tradicional clase política, enarbolando un proyecto económico de clara afiliación neoliberal.

El ascenso de la tecnocracia se observaba desde varias décadas atrás y especialistas en el estudio de las élites mexicanas como Roderic Ai Camp advirtieron que este fenómeno amenazaba con destruir el delicado equilibrio construido entre técnicos, políticos y militares y, con ello, los incentivos para que los otros socios permanezcan en la coalición gobernante.

"Contra esta tesis, otro politólogo de las aulas de Harvard, Juan D. Lindau, trata de demostrar en una obra reciente - que el ascenso de la tecnocracia no es la causa del debilitamiento del partido oficial y que, a final de cuentas, entre tecnócratas y políticos no hay muchas diferencias de comportamiento. Estas existen en torno a temas específicos y, en varias ocasio-

nes, los tecnócratas actúan con más habilidad que los propios políticos".²⁾

Sin embargo, Lindau no rechaza uno de los argumentos centrales del debate: a) el desplazamiento de la tradicional clase política frente a los llamados tecnócratas, y b) la alteración que esto ha representado en la tradicional coalición gobernante aglutinada en el PRI.

Ciertamente, entre los llamados tecnócratas y los políticos de la clase política tradicional no existe una diferencia sustancial en su percepción del partido oficial: ambos lo consideran como un organismo subordinado al poder político y, por tanto, susceptible a adaptarse y condicionarse a las necesidades del grupo gobernante. En este sentido, en un sector como el otro predomina una percepción digna de ser catalogada, en los propios términos priistas, como dinosauria.

Lo significativo es que, en su ascenso, esta camarilla no renueva los métodos para allegarse el control en el PRI. Aún así, logra encumbrarse a costa de excluir a representantes de otros socios de la coalición tecnocrática (el propio Alfredo del Zo o el ex secretario de Hacienda de la madridista Jesús Silva Herzog fueron cabezas de dos camarillas rivales al salinismo).

RUIZ MASSIEU, José. Nuevo Derecho Constitucional Mexicano. 16a. ed., Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1994, Pág. 89.

La fórmula de ascenso del grupo salinista se concentró en el control del aparato administrativo de planeación y presupuestación públicas.

La Secretaría de Programación y Presupuesto fue el eje administrativo mediante el cual, el equipo de Carlos Salinas de Gortari se articuló y expandió su influencia en el aparato de partido. En el seno de esta secretaría se mantuvo desde su origen una pugna entre dos corrientes ideológicas prácticamente irreconciliables que buscaban, por un lado, reducir el aparato estatal y hacer más eficiente el gasto público y, por otro, expandir el gasto social a la usanza del modelo estructuralista.

La tensión se hizo evidente durante los tres primeros años del gobierno de José López Portillo. Las renunciaciones simultáneas de Carlos Tello, primer secretario de Programación, y de Rodolfo Moctezuma Cid, titular de Hacienda, el 17 de noviembre de 1977 permitieron el ascenso de un grupo de jóvenes egresados de universidades privadas del extranjero y con un amplio ascendiente en el circuito financiero internacional. Menos de dos años después de las renunciaciones, Miguel de la Madrid substituyó a Ricardo García Sáinz el 21 de mayo de 1979. En esa misma fecha, el joven economista Carlos Salinas de Gortari fue designado secretario de gabinete económico en substitución de Antonio Ugarte.

Desde entonces, la mancuerna De la Madrid-Salinas de Gortari se hizo cargo de los dos grandes proyectos económicos nacionales: el Plan Global de Desarrollo (1980-1982) y el Plan Nacio

nal de Desarrollo (1982-1988). En ambos, los doctores en economía plasmaron sus principales banderas doctrinales, propias de la corriente fondomonetarista: control estricto de los precios para frenar la inflación; reducción del gasto público; liberalización del mercado interno y externo.

El destape priísta de Miguel de la Madrid el 3 de noviembre de 1981, permitió, a su vez, el ascenso de su brazo derecho: Carlos Salinas de Gortari. Este gris funcionario abandonó el puesto de secretario técnico del gabinete económico para entrar de lleno a la estructura priísta, como director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES), el organismo encargado de la ideología priísta.

Desde IEPES Carlos Salinas de Gortari se preparó para ocupar una secretaría de Estado en el próximo sexenio y relevar a su propio padrino político en la presidencia.

Las alianzas y compromisos que articuló Carlos Salinas de Gortari en el instituto ideológico del partido oficial fueron definitivas para consolidar a la nueva generación que desplazaría a la vieja clase política. En el IEPES, Carlos Salinas de Gortari enroló a su causa a antiguos compañeros de estudios, como Manuel Camacho y Emilio Lozoya; a Luis Donald Colosio e Ignacio Picardo Pagaza, quienes serían sus contactos con el Congreso durante el sexenio delamadridista; a Andrés Ruíz Massieu, María de los Angeles Moreno, Sócrates Rizzo y F. del Herrera. Desde el IEPES, Carlos Salinas de Gortari contactó a dos inves-

tigadores que tenían amplias cartas de recomendación en los círculos financieros privados: Jaime Serra Puche y Pedro Aspe. Politólogos surgidos del entorno reyesheroliano como Otto Granados Roldán, Patricio Chirinos y José Luis Lamadrid, también se adhieren al grupo salinista. El entonces presidente del Consejo Consultivo priista, Enrique González Pedrero, y José Carreño Carlón, se alían a Carlos Salinas de Gortari.

"Desde el IEPES, Carlos Salinas de Gortari compactó una camarilla propia dentro de la misma matriz del madridista. El grupo actuó como un bloque sólido durante todo el sexenio de 1982 a 1988 y fue copando los puestos claves de decisión política dentro del propio aparato partidista".³⁾

Además, expandió su influencia al incorporar a su seno a gobernadores priistas de estados claves quienes se la juegan con la apuesta salinista. Entre esos mandatarios destacaron Fernando Gutiérrez Barrios, de Veracruz, Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, y Enrique Álvarez del Castillo, de Jalisco.

Carlos Salinas de Gortari se alió con cabezas de poderosas camarillas políticas a través de hombres como Carlos Hank González, la cabeza visible del Grupo Atlacomulco. El apoyo de Hank fue vital no sólo en términos de expansión política del grupo,

3) VALADEZ, Diego. La Transformación del Estado Mexicano. 14a. ed., Edit. Diana. México, D. F., 1995. Pág. 59.

sino de creación de alianzas económicas. Otro caso ejemplar fue la alianza de Carlos Salinas de Gortari con la familia de los Lugo, la camarilla más fuerte en el estado de Hidalgo.

La élite salinista es el más fiel ejemplo de una tendencia presente en la clase política mexicana desde el sexenio de Luis Echeverría: escalar en puestos de poder administrativo, sin experiencia en la llamada carrera de partido y, una vez en los mandos burocrático-administrativo, controlar y subordinar a la estructura partidista.

Ciertamente, la carrera de partido ha jugado un papel marginal desde muchos años atrás en la conformación del gobierno. Peter H. Smith planteó en su estudio que abarcó de 1900 a 1971 que no más del 14 por ciento (de los miembros) de los sucesivos gabinetes habían sido anteriormente miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Para el autor este dato es una prueba de que es el gobierno el que domina la partido y no viceversa.

Si ya antes de que la tecnocracia se convirtiera en la corriente hegemónica dentro del gobierno, la carrera de partido era un dato marginal, con la élite salinista se convierte más bien en una rareza.

"Del grupo formado en torno al entonces secretario de Programación y Presupuesto, sólo él, Manuel Camacho y Luis Donald Colosio registraron un paso por demás simbólico en las filas del partido. Ni Carlos Salinas de Gortari ni Manuel Camacho ocupa

ron cargos de elección en el Partido Revolucionario Institucional. Sólo Colosio, quien fue diputado federal de 1985 a 1988 y después senador. De ellos, sólo Camacho tuvo una carrera temprana en el partido. En 1965, a los 19 años, fue subsecretario de Prensa y Propaganda del Partido Revolucionario Institucional. De 1981 a 1982, fecha en que Carlos Salinas de Gortari fue director del IEPES, él se desempeñó como secretario de la Comisión Nacional de Ideología del CEN".⁴⁾

Los demás miembros del grupo salinista fueron ajenos a la llamada carrera de partido. Pedro Aspe ingresó al Partido Revolucionario Institucional en 1982 y su única misión partidista - fue ser asesor de Carlos Salinas de Gortari cuando éste fungió como director del IEPES. Jaime Serra Puche se afilió un año más tarde y jamás desempeñó tarea partidista alguna. Ernesto Zedillo Ponce tenía en 1988, 16 años de militancia priísta, pero sólo se desempeñó en diversas comisiones del IEPES, según reza en su ficha biográfica.

Pese a este virtual desapego por la vida partidista, el dato relevante es que las prácticas y métodos de la vieja clase política fueron perfectamente asimilado por el grupo compacto - salinista.

En la temprana carrera política de esta camarilla el único

4) VILLARROEL, Hipólito. Enfermedades Políticas de México. 4a. ed., Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1994. Pág. 119.

dato significativo que habla de un intento por desarrollar un vínculo con el Partido Revolucionario Institucional fue la creación de la Organización Política y Profesión Revolucionaria A. C. en 1971, dirigida por el propio Carlos Salinas de Gortari a sugerencia de su padre Raúl Salinas Lozano. El oficial mayor de esa agrupación fue Manuel Camacho y Emilio Lozoya figuró como secretario. Con este organismo pretendieron aglutinar a un grupo interdisciplinario para ganar reconocimiento de los funcionarios del Partido Revolucionario Institucional, pero nunca tuvieron éxito.

En realidad, su gran salto se da a través de los organismos del sector financiero. Las instancias claves fueron, en un primer momento, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, y después la SPP.

"Tanto los tecnócratas como los políticos tradicionales del Partido Revolucionario Institucional coinciden en un punto fundamental en su currícula: la inexperiencia y muchos casos el desprecio hacia la contienda electoral dentro y fuera del partido".⁵⁾

5) BASAÑEZ, Miguel. La Lucha por la Hegemonía en México. 6a. ed., Edit. Siglo XXI, México, D. F., 1992, Pág. 34.

B. LAS ALTERNATIVAS PARTIDISTAS

Chihuahua se convirtió en la década de los ochenta en el caso emblemático de la crisis orgánica del priísmo. En los comicios municipales, legislativos y estatales que se realizaron en 1980, 1982, 1983, 1985 y, el más polémico de todos, 1986, - se observó un fenómeno muy claro: la maquinaria corporativa del Partido Revolucionario Institucional ya no servía para ganar votos ni para representar a las organizaciones sociales.

En Chihuahua, el Partido Revolucionario Institucional perdió durante la década pasada todos sus espacios de representación: por el lado del sector obrero, la muerte del dirigente de la CTM estatal, Mar de la Rosa, desarmó al movimiento obrero que no pudo amarrar a sus tradicionales clientelas políticas. La CNC era prácticamente inexistente en una entidad conformada, sobre todo, por pequeños propietarios agrícolas. Por el lado del sector popular, el único espacio que tenía el partido bien afianzado era el del sindicato magisterial, el cual fue utilizado *como* maquinaria electoral, sobre todo en 1986, para que - el Partido Revolucionario Institucional no perdiera la gobernatura frente la avance vertiginoso del PAN y su candidato Francisco Barrio.

Chihuahua, en realidad, era sólo el caso más extremo de - un fenómeno que se registraba en todo el país: la desarticulación corporativa del Partido Revolucionario Institucional.

Como la trinidad católica, el triángulo formado por la CTM-CNC-CNOP constituyó desde 1946 el alma y el cuerpo del aparato priísta. A la eficacia y expansión de estas tres grandes corporaciones le debió el Partido Revolucionario Institucional su arraigo social, su legitimidad política y, sobre todo, su permanencia en el poder.

De acuerdo con el politólogo Arnaldo Córdova, desde 1938 el entonces PRM contaba ya con todos los elementos para que el proyecto cardenista tuviera éxito: Las organizaciones básicas, hegemónicas en cada sector social, un espíritu corporativo que informaba toda la política mexicana y cierto lastre popular del partido habrían de garantizar la definitiva institucionalización del régimen de la Revolución. La política individualista pasó a segundo plano, precisamente como elemento de la política corporativa. Los sectores devenían en los verdaderos sujetos - del juego político; los individuos que lo representaban y las instituciones y los órganos del Estado, de golpe, se convertían en criaturas de los sectores mismos.

¿Cuáles fueron los orígenes del deterioro del modelo corporativo priísta? La respuesta es compleja y abarca varias vertientes. En términos descriptivos, el principal problema radica en el cambio que operó en la propia configuración de la sociedad mexicana. Aquellas estructuras pensadas para un país que apenas despegaba en su proceso de industrialización quedaron rebasadas.

La cifras hablan por sí mismas. En la década de los cuarenta, cuando se funda el PRM, el 60 por ciento de la población estaba ubicada en el sector agrario. Por esta razón, la mitad de las famosas cuotas de poder del sistema, es decir, la distribución de candidaturas de acuerdo al peso específico de los sectores, fueron absorbidas entre 1946 y 1964 por la CNC.

A su vez, cuando quedó formado el sector obrero a través de la CTM éste agrupaba el 25 por ciento de la población y mostraba posibilidades de expandir sus espacios. La CNOP, que agrupaba a la burocracia, los maestros y otros grupos urbanos no clasistas, entre los que destacan las organizaciones de servicios, comerciantes, transportistas y otros, representaba el 12 por ciento de la población.

En menos de 25 años este perfil se transformó sustancialmente. El país se urbanizó a pasos agigantados, el sector laboral se diversificó y las clases medias adquirieron un mayor protagonismo. Los tres pilares corporativos que le daban presencia social al partido no sólo resultaban ya insuficientes sino ineficaces en términos de control y representatividad políticas.

A esta situación se sumó el segundo grave problema del modelo corporativo priísta: su carácter informal o indirecto dentro de la estructura de dirección partidista.

Teóricamente, el Partido Revolucionario Institucional siempre fue un partido de ciudadanos y sectores y su mando real se

ubicaba en la estructura vertical y no en la corporativa. No obstante, en términos reales el partido funcionaba más bien como un complejo aparato guiado a tres velocidades por cada una de las corporaciones.

El papel de esta estructura fue el control político de los agremiados y el mantenimiento de la estabilidad política del régimen, pues se esperaba que todos los conflictos sociales pudieran ser canalizados por medio de ella.

Sin embargo, el conflicto gremial y social generado por el movimiento de médicos en 1965, junto con la repunte de la participación de las clases medias no corporativizadas desde 1968 reveló desde entonces que el triángulo corporativo priista se agotaba aceleradamente.

De este fenómeno tuvo meridiana claridad el entonces dirigente reformista del partido Carlos Madrazo, quien en su discurso de toma de posesión destacó la necesidad de renovar el partido. Propuso privilegiar la estructura territorial del partido sobre la estructura corporativa y mandó a las delegaciones partidistas a hacer un análisis real de la situación del partido en cada entidad, partiendo de los comités seccionales, pasando por los municipales, hasta llegar a los directivos estatales; en orientar el funcionamiento de éstos e integrar de inmediato a los que no lo estuvieran.

Madrazo llegó a proponer que los comités seccionales se -

eligieran con un alto espíritu democrático, pues son la célula electoral del partido. De este modo, lanzó una convocatoria para renovar 20,549 comités seccionales y 1,608 municipales por libre y espontánea voluntad.

"El intento madracista neufragó frente al veto político de las dirigencias corporativas. Desde entonces, quedó muy claro que las centrales se habían convertido en una especie de Frankenstein para el Partido Revolucionario Institucional. Ellas se convirtieron en el principal obstáculo para la transformación del aparato priísta en un auténtico partido político.

La osificación de las corporaciones priístas se operó desde el propio gobierno. Pensadas y creadas para un modelo de desarrollo, estas tres centrales comenzaron a quedar desfasadas - desde la década de los setenta, justo cuando tiene lugar un cambio cualitativo en la conformación de la clase política con la incorporación de cuadros nuevos y el intento echeverrista de articular un nuevo modelo de desarrollo".⁶⁾

Para finales de los setentas, se crearon organizaciones sociales que comenzaron a restarle clientelas y representatividad a las tres corporaciones. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), surgida para agrupar a la mayoría de

6) CORDOVA, Arnaldo. Sociedad y Estado en el Mundo Moderno. - 3a. ed., Edit. UNAM. México, D. F., 1997. Pág. 119.

las organizaciones campesinas independientes, penetró en los territorios antes monopolizados por la Confederación Nacional Campesina. A nivel sindical, esa misma década fue el auge de los sindicatos independientes que pronto se confrontaron con la línea cetemista. En el seno del principal sindicato priísta, el SNTE, surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con agrupaciones impugnadoras de la antidemocracia del sindicato oficial.

En los ochenta, el desplazamiento de las corporaciones priístas como interlocutoras políticas de la sociedad frente al gobierno se agudizó y operó con mayor magnitud en el seno de las clases populares y medias urbanas. En 1980, se crea la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), la cual, tres años después, contaba con influencia en 20 entidades del país.

El sismo de 1985 en la capital de la República fue no sólo un quiebre de estructuras telúricas sino políticas. De este evento emergieron como nunca antes había sucedido en la capital del país decenas de organizaciones populares y urbanas que rebasaron a las estructuras del partido. La Asamblea de Barrios - creada para esa época fue la muestra más fiel de una nueva forma de organización e interlocución de la sociedad frente a las autoridades públicas que dejó muy atrás a los organismos clientelares priístas.

Para 1987 el triángulo corporativo del Partido Revolucionario

rio Institucional estaba en pleno proceso de desgaste, por no decir de derrumbe. Sin credibilidad, anquilosadas, víctimas de sus propios vicios autoritarios y clientelares y frente al embate de una nueva élite gobernante que reproducían sus métodos, - pero las minimizaban como interlocutores, las corporaciones priístas estaban en su momento más crítico. Los comicios de 1988 revelaron la gravedad de esta crisis.

C. LOS CAMBIOS JURIDICOS Y POLITICOS

Sin embargo, el ascenso de la élite tecnocrática y el derrumbe orgánico del PRI no se explican sin la virtual revolución teórica y programática que operó en el seno del *poder político* durante el sexenio delamadridista.

El proyecto ostentado por este grupo político contradecía el modelo de *nación* que ideológicamente había sustentado el Partido Revolucionario Institucional. El mundo de las recetas monetaristas, la oleada privatizadora y la liberalización de fronteras poco o nada tenía que ver con un partido que respaldaba - su permanencia en la retórica nacionalista heredada del cardenismo, que se había cobijado al amparo del modelo de Estado benefactor y bajo esa sombra crecía su legitimidad política.

Una de las expresiones más claras del viraje ideológico que operó en el seno de la nueva élite que ascendió al poder fue el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, elaborado precisamente - por Carlos Salinas de Gortari, entonces secretario de Programación y Presupuesto, y su equipo de colaboradores.

En el PND delamadridista se subrayó con toda claridad la - necesidad de cambiar las bases del desarrollo económico sobre - las cuales el país se sustentó en las décadas pasadas.

En la más ortodoxa postura monetarista, se ubicó a la inflación y al abultado déficit público como los dos principales problemas a resolver por el próximo gobierno. La vía para solucionarlos fue la reordinación del gasto público, tarea principal de la SPP y viejo mecanismo a través del cual gobierno y partido entrelazaban la dependencia.

De acuerdo con el Plan, la nueva política del gasto público sería: a) la reducción de la participación relativa en el servicio de la deuda; b) la disminución del déficit público; c) la contención del crecimiento del gasto corriente; d) el reforzamiento de la dimensión social del gasto; e) la reestructuración de subsidios, y f) la reorientación de la inversión pública que *deberá crecer a una tasa entre 8 y 10 por ciento.*

En contraparte, la Declaración de Principios del Partido - Revolucionario Institucional defendía otras tesis. Por ejemplo el artículo 13 señala que debe aplicarse correctamente el artí-

culo 28 constitucional para lograr la organización económica del país y orientar la producción hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población, siempre bajo la supervisión estricta del Estado a fin de evitar abusos e intromisiones de los económicamente más fuertes.

Incluso, llega a afirmar en el artículo 17 que el partido luchará con toda energía por la liberación económica del país - hasta que desaparezca totalmente su fisonomía semicolonial. Procurará que el artículo 27 de la Constitución y las demás normas jurídicas que tienden a defender las fuentes de riqueza nacional, se apliquen en todo su alcance, y pondrá especial empeño - en el desarrollo de la producción, particularmente de las industrias de mexicanos, a fin de liberar al país de la influencia económica del exterior.

Frente a estas palabras, la realidad era contundente: el gobierno priísta desmontaba el Estado, reformaba el artículo 27 constitucional y abría la economía al exterior.

El modelo de partido del Estado benefactor era radicalmente distinto al país pensado por el Estado mínimo neoliberal.

Estos factores ya habían sido detectados por un puñado de cuadros priístas desde 1981, en el momento más álgido de la crisis económica del sexenio lopezportillista.

Sin embargo, no fue hasta mediados de 1985, entre los meses de junio y julio, que el descontento comenzó a tomar cuerpo

en forma de una corriente al interior del partido. Varios encuentros entre cuadros críticos priistas fue conformando el perfil de lo que posteriormente sería bautizada como la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional.

El primero ejer de este grupo fue el veterano político sinaloense Rodolfo González Guevara, quien contaba en su haber con una amplia carrera dentro de la estructura del partido (presidente del Partido Revolucionario Institucional capitalino entre 1958-1964) y varios puestos de elección popular y dentro del gobierno.

En su libro reciente, *La Ruptura*, Luis Javier Garrido narra cómo la primera muestra pública del descontento de González Guevara con el partido tuvo ocasión en un acto insólito: en una reunión efectuada en el departamento privado del Palacio de la Moneda español, frente al presidente Felipe González, al secretario de Comercio mexicano, Héctor Hernández, y con González Guevara como embajador mexicano en España. En aquella ocasión, el mandatario hispano comparó al PSOE con el Partido Revolucionario Institucional, haciendo una apología de este último. González Guevara contradujo al mandatario e hizo una crítica profunda del Partido Revolucionario Institucional y explicó múltiples detalles que todos desconocían, aprovechando obviamente la ocasión para hablar de su idea de organizar una corriente crítica al interior del anquilosado Partido Revolucionario Institucional.

Posteriormente, González Guevara convino con el ex embaja-

dor de México ante la ONU y ex dirigente del partido. Porfirio Muñoz Ledo, en la necesidad de organizar un movimiento al interior del Partido Revolucionario Institucional. A este dúo inicial se sumaría posteriormente, a mediados de 1986, el gobernador michoacano Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas y, por muchas razones, un cuadro con bastante ascendente simbólico entre numerosos militantes del partido. Otras figuras que se acercaron al núcleo crítico inicial fueron Gonzalo Martínez Corbalá, Ifigenia Martínez, César Buenrostro, Silvia Hernández, Vicente Fuentes Díaz, Horacio Flores de la Peña, Augusto Gómez Villanueva y Eduardo Andrade. Todos ellos cuadros ajenos al núcleo de la tenocracia, varios de ellos ligados políticamente al sexenio de Echeverría. Los seis últimos se alejarían prontamente del núcleo y posteriormente Martínez Corbalá, ex embajador mexicano en Cuba, haría lo propio.

El grupo como tal se da a conocer a la luz pública a través de una nota publicada el 14 de agosto de 1986 por el periódico Uno más Uno. La dirigencia visible de la Corriente Democrática estaba conformada por el trío inicial: Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, y Rodolfo González Guevara.

Como destaca Garrido en su obra, estas personalidades inconformes con la política del gobierno delamadridista no cuestionaron en un principio el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional fuera una organización de Estado, sino el papel que se le había venido asignado en los primeros cuatro años an-

teriores como un organismo carente de vida propia, reducido a - legitimar las nuevas políticas gubernamentales. El Partido Revolucionario Institucional, a su juicio, sufría una desviación de lo que había sido su proyecto histórico heredero del PRM -y del PNR-, ya que desde la década de los cincuenta se había iniciado un proceso de reducción de sus funciones reales hasta llegar a convertirse en un simple aparato electoral del Estado.

Otra investigadora, María Xelhuantzi, plantea que la Corriente Democrática dentro del Partido Revolucionario Institucional, primero fue un movimiento ideológico de reivindicación política; en el contexto nacional una conciencia crítica de reinvidicación social e histórica: había que rescatar a la sociedad y restituir el consenso interno. De aquí la proyección e importancia que cobró desde el primer momento de su aparición pública.

Bajo esas condiciones, la Corriente Democrática adquirió - las siguientes características:

a) Representante de la ortodoxia doctrinal y estatutaria del partido frente a los vaivenes ideológicos de la dirigencia encabazada por Adolfo Lugo Verduzco.

b) Movimiento amplio de cuadros medios dentro del partido con cierta influencia en los sectores del Frente Juvenil Revolucionario, grupos campesinos y el movimiento urbano-popular de las filas priistas.

c) Grupo crítico hacia la política económica aplicada durant

te el sexenio de Miguel de la Madrid, y sobre todo, de sus efectos sobre el sector laboral y las clases medias.

d) Corriente que planteaba, además del rescate original del ideario priísta, su democratización real en los niveles de representación y métodos de selección de sus candidatos.

e) Organismo ajeno al núcleo más selecto del gobierno de la madridista y, en particular, de la élite salinista, que para entonces llevaba la delantera en la pugna por la sucesión presidencial. De aquí el carácter de electorera que algunos críticos le indilgaron a la Corriente Democrática.

Estas características la perfilaron como el grupo disidente interno más importante en la historia reciente del Partido Revolucionario Institucional. Para marzo de 1987, en vísperas de la XIII Asamblea Nacional priísta, la Corriente ya era el enemigo número uno para la dirigencia priísta y uno de los retos políticos más difíciles de solucionar para el gobierno de Miguel de la Madrid que entraba en la dura fase de las negociaciones interpriístas por la sucesión presidencial.

En todo este proceso, la dirigencia de la Corriente Democrática enfrentó las acusaciones de indisciplina y radicales por parte del sector duro del Partido Revolucionario Institucional. Ellos aclararon una y otra vez que no se saldrían del partido, que su interés no era la división de éste sino su fortalecimiento por medio de vías democráticas, que su imisión era recuperar

el proyecto histórico del Partido Revolucionario Institucional con reglas democráticas.

Esto queda claro en los siguientes párrafos del Documento de Trabajo Número Dos de la Corriente, emitido en Chihuahua el 6 de mayo de 1987:

Nuestra lucha es por la vigencia de los principios de la Revolución mexicana contenidos en los artículos fundamentales de la Constitución de 1917. Es por la cabal realización de los objetivos y programas que sustentan los documentos básicos de nuestro partido. Es por la recuperación del derecho de los mexicanos, de todos los mexicanos, a decidir su destino.

Nuestra lucha es por el rescate de la plena condición ciudadana, de la equidad social, la economía productiva, los recursos naturales, la identidad cultural y la alta jerarquía moral de la nación. Nuestra lucha es por el fortalecimiento del partido y la recuperación de su papel de vanguardia política. Es por la defensa de las instituciones revolucionarias y la capacidad del pueblo para autodeterminarse. Es para evitar que siga acentuándose la subordinación del país a intereses ajenos.

La corriente participó activamente en los preparativos de la XIII Asamblea Nacional celebrada los primeros días de marzo de 1987. Las participaciones de sus miembros en las mesas se desarrollaron como las de los demás militantes, excepto en la mesa 1, con la ponencia de Oscar Pintado, y en la mesa 5, con la intervención de Cuauhtémoc Cárdenas.

Las dos participaciones rompieron con el esquema y las directrices que la dirigencia priísta quiso imponer a la Asamblea. Cárdenas propuso la celebración de foros en todo el país, donde se manifestaran los miembros del partido, tanto en el marco de los sectores y la organizaciones, como en el de los comités estatales, municipales y seccionales para conformar la plataforma electoral de la campaña presidencial de 1988. También planteó que la Asamblea, como órgano supremo del partido, determinara la fecha y modalidades con que debía celebrarse el Consejo Nacional que, de acuerdo a los Estatutos, debía celebrar la convención a fin de postular a los candidatos a la presidencia de la República.

En otras palabras, llamaba a romper con el privilegio tradicional del presidente en turno para destapar a su sucesor sin mayor participación del partido.

La dirigencia y los sectores más furios en contra de la Corriente, vieron en la propuesta de Cárdenas un intento por bloquear las aspiraciones presidenciales de varios precandidatos y estigmatizaron a la Corriente como un grupo electorero que quería ganar espacios en la lucha por la sucesión.

El entonces presidente del partido, Jorge de la Vega, en la clausura del evento y avalado por la presencia de los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, lanzó duros ataques contra la disidencia. Según Xelhuantizi, la intervención de éste (De la Vega) fue, en su concepción de partido, de la -

disciplina y de la unidad, una exageración de la tendencia histórica del partido burocrático y una aproximación conceptual teórica deigna del partido fascista en sus versiones más representativas.

Desde ese evento, la brecha entre la Corriente, la dirección priísta y el gobierno se abrió para nunca volver a cerrarse. La actuación de aquella en la XIII Asamblea sentó un precedente que en la siguiente se profundizaría: la objeción abierta a la intención de dirigir el rumbo del partido en forma autoritaria.

Si bien la Corriente no llevó en ese momento sus propuestas hasta su consecuencia lógica: la eliminación del régimen de partido de Estado, fue claro que sus propuestas tendían a abrir este debate y estaban estrechamente relacionadas con las tres vertientes de su estructura y su desfase ideológico de cara al proyecto neoliberal.

El 8 de marzo de 1987, cuatro días después de la clausura de la asamblea, Cárdenas dirigió una carta a todos los priístas del país indicando que la posición de la dirigencia del partido anuncia para éste una etapa de autoritarismo antidemocrático, - de intolerancias y, por lo tanto, de retrocesos, contrarios al espíritu y letra de la Delcaración de Principios del propio partido y, sobre todo, contrarios al espíritu, tradición y conducta de los hombres comoprometidos verdaderamente con las ideas y las obras de la Revolución mexicana.

La carta de Cárdenas constituyó una virtual declaración de guerra entre la disidencia y la dirigencia del partido. La misiva concluía de esta forma:

Los excesos antidemocráticos y la intransigencia, normas - de conducta de la más alta dirigencia, impiden toda colaboración digna y respetuosa con ella.

Ceder en los principios, caer en el oportunismo, tolerar - indignidades, sería traicionar el compromiso revolucionario. Las amenazas no arredran, no las respalda autoridad moral.

Los campos están definidos. Las bases del partido, como - las grandes mayorías del pueblo mexicano, han sido, son y se- guirán siendo democráticas y revolucionarias, a pesar de la cerrazón y desviación de dirigentes pasajeros.

Continuaremos en la lucha con la fuerza que dan convicción y razón.

Definidas ya las posiciones, lo único que quedaba era la ruptura definitiva de la Corriente Democrática con el Partido - Revolucionario Institucional. La XIII Asamblea comprobó que no había posibilidades de cambio en el partido y el futuro de los militantes de este grupo era la construcción de una opción dife- rente fuera del Partido Revolucionario Institucional. La coyuntura estaba dada: la sucesión presidencial. El clima era propi- cio: un creciente descontento social generado por la crisis eco- nómica de 1987 y los saldos del proyecto librecambista del go- bierno.

Cárdenas anuncia su precandidatura presidencial por la Corriente Democrática. Obviamente, la dirigencia rechaza registrarla en la lista encabezada por Carlos Salinas de Gortari, Manuel Bartlett y Alfredo del Mazo. La salida de la Corriente se consuma el 12 de octubre de 1987 cuando Cárdenas acepta la nominación del PARM. Tres días después, el CEN declara que Cárdenas violó el artículo 211 de los Estatutos y, por tanto, queda expulsado del Partido Revolucionario Institucional.

"La salida de Cárdenas y sus seguidores detonó una crisis inédita en las filas priístas. Si bien las anteriores escisiones dentro del partido se produjeron en una coyuntura de sucesión presidencial, nunca antes una ruptura como la protagonizada había desestabilizado tanto al régimen y, por supuesto, había potencializado las tres vertientes anteriores de la crisis del partido oficial.

En sí misma, la escisión de los democratizadores, como se les llamaba, constituyó una cuarta vertiente de la crisis del Partido Revolucionario Institucional: la incapacidad del aparato para neutralizar la inconformidad dentro de sus filas".⁷⁾

7) COSIO VILLEGAS, Daniel. El Estilo Personal de Gobernar. 34a. ed., Edit. Colegio de México, México, D. F., 1995, Pág. 86.

D. PERSPECTIVA DE LA CRISIS DE NUESTRO ESTADO

La campaña de 1983 se desarrolló en medio de condiciones - nunca antes previstas. Por un lado, la candidatura de Cárdenas comenzó a aglutinar a un vasto sector de la izquierda nacionalista y de los sectores de clase media, en momentos que el partido que se ostentaba como el máximo heredero de esta corriente, el Partido Mexicano Socialista (PMS), realizaba su estreno electoral con la candidatura de Heberto Castillo. El PAN, por su lado, lanzó a un personaje sin carrera de partido, ex dirigente de la cúpula empresarial, y con un gran carisma entre capas de clase media de la población: el sinaloense Manuel J. Clouthier.

Frente a estos dos contendientes y con una virtual desbandada en sus filas, el Partido Revolucionario Institucional postuló al candidato menos carismático de su historia, al cual se le achacaba gran parte de la responsabilidad de los efectos socioeconómicos de la crisis, el secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.

En otras palabras, el Partido Revolucionario Institucional contendía en las condiciones más desfavorables. Los masivos mítines que encabezó Cárdenas en La Laguna, Michoacán y en el Distrito Federal demostraron que el neocardenismo era algo más que un mito. Por otro lado, había una clase media movilizada en torno a la candidatura de Clouthier y descontenta por los precedenu

tes de desaseo y fraude electorales registrados en entidades como Chihuahua.

Bajo la batuta de Jorge de la Vega Domínguez, el Partido Revolucionario Institucional refrendó su papel como mera agencia electoral del gobierno. Ni en la elaboración de la plataforma de gobierno de su candidato, ni en la designación de su equipo más cercano que comenzaba a perfilarse para el próximo sexenio, ni en la logística de la campaña, el partido jugó un papel fundamental.

La famosa cargada durante la campaña salinista funcionó al mejor estilo del partido oficial: acarrees inocultables de simpatizantes para llenar las plazas, rigidez de su candidato que no convencía ni a las propias filas que lo apoyaban, gasto excesivo de recursos provenientes del erario público para opacar a la competencia opositora, funcionamiento de las filas corporativas como contingentes inermes para darle escenografía al candidato.

En su toma de protesta, el 8 de noviembre de 1987, y frente a un ambiente político que se polarizaba a pasos agigantados, Carlos Salinas de Gortari habló de cuatro grandes retos: a) la defensa y promoción, en el nacionalismo democrático, de la independencia y de las libertades; b) el realismo con sentido social como criterio para el desarrollo económico; c) la participación y la responsabilidad como palanca del bienestar individual y colectivo; d) la conformación gradual de una nueva cul-

tura política que conjugue mejor nuestra tradición con las innovaciones democráticas que reclama la demanda actual de la sociedad.

Como estas vaguedades, muchas otras que intentaban dar la imagen de un candidato priista acorde a la tradición del nacionalismo revolucionario, fueron expresadas. Nada se dijo claramente sobre la crisis al interior del partido. Nada sobre el claro debilitamiento de la cohesión interna. La ruptura cardenista era una sombra que, ignorándola, se pretendía conjurar.

En otros mítines, como el de Chalco, un municipio mexicano se caracterizado por los asentamientos urbanos irregulares, Carlos Salinas de Gortari comenzó a dar las líneas de su política de combate a la pobreza y lo que posteriormente derivaría en el discurso del solidarismo.

Del otro lado, la candidatura cardenista concitaba cada vez más apoyos. El momento culminante fue la dimisión de Heberto Castillo como candidato del PMS y la inclusión de éste dentro del Frente Democrático Nacional, la organización que aglutinaba a todos los organismos y partidos que apoyaban al candidato de la Corriente Democrática y el PARM.

Bajo estas condiciones, pocos dentro del núcleo salinista previeron las dimensiones de la diserción electoral priista. El 6 de julio de 1988 sucedió lo que algunos auguraron y pocos creyeron. La maquinaria electoral del Estado había fallado y las

cifras del triunfo claro y contundente del candidato priísta no se tuvieron el mismo día de la elección. El sistema evidentemente se había cimbrado.

Un enorme operativo de alteración de cifras electorales se realizó en los días inmediatos a la elección (7, 8 y 9 de julio). En tanto, Cárdenas convocaba a un mitin de dimensiones masivas en el centro de la capital del país y, posteriormente, se unirían Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra, candidata del PRT, para señalar que las elecciones del 6 de julio constituyeron el fraude más grande en la historia del país y que quien surgiera de la contienda tendría como sello de origen la ilegitimidad y la ilegalidad.

CAPITULO SEGUNDO

LA INFLUENCIA POLITICA DEL PRESIDENCIALISMO

- A. LAS PROPUESTAS EJECUTIVAS
- B. LAS ASAMBLEAS DEL PARTIDO OFICIAL Y EL PODER EJECUTIVO
- C. LA CRISIS DE PARTIDO Y LAS ALTERNATIVAS EJECUTIVAS

A. LAS PROPUESTAS EJECUTIVAS

Con los antecedentes de la crisis electoral, el gobierno - de Carlos Salinas de Gortari tenía frente a sí dos grandes retos inmediatos para poder gobernar:

a) Ganar la presidencia desde el ejercicio mismo del poder teniendo como precedente el desgaste acumulado más importante - de la propia institución presidencial.

b) Empezar una magna tarea de acercamiento-reforma hacia el partido oficial para convertirlo de nuevo en una maquinaria eficiente de legitimación y control políticos.

"El proyecto político salinista fue trabajando a dos bandos: por un lado, legitimar la institución presidencial a través de un ejercicio particular del poder, al tiempo que impulsaba una reforma al interior del partido que a la vez serviría lo mismo para resanar las viejas heridas y recuperar el control, - que para incorporar a las bases partidistas al proyecto gubernamental y renacer la maquinaria electoral partidista".³⁾

Carlos Salinas de Gortari decidió desde su asunción al poder que había terminado la era del partido prácticamente único

3) CARRILLO PRIETO, Ignacio. Reformas Electorales y Reformas Políticas. 9a. ed., Edit. UNAM, México, D. F., 1995. Pág. - 210.

y era necesario emprender la democratización del Partido Revolucionario Institucional. El nuevo dirigente del partido oficial, Luis Donaldo Colosio, un fiel compañero de viaje en la aventura por la toma del poder, fue el encargado de emprender la tarea - de disección-renovación del partido.

La primera labor consistía en consolidar el control del - propio grupo salinista sobre la maquinaria del partido, ajena y hasta confrontada a la nueva élite gobernante.

Colosio actuó como correa de transmisión y colocó a gente cercana al entorno salinista como sus colaboradores más inmediatos: Socorro Díaz, Abraham Talavera, Dulce María Sauri, José - Luis Lamadrid, Silvia Hernández, Hugo Andrés Araujo y Julio Hernández López fueron en un primer momento las piezas claves del equipo colosista tanto en la estructura de dirección como en la sectorial del partido.

Las resistencias se concentraron en la vieja guardia corporativa del Partido Revolucionario Institucional, básicamente la CTM, el núcleo duro de la clase política priísta. La confederación actuó entonces como un dique a los planes de desaparición de la estructura sectorial, planteada originalmente en el proyecto de reforma.

Del otro lado, se formó una corriente reformista institucional, al gusto de la nueva dirigencia. El Movimiento para el Cambio Democrático, dirigido por Hernández López, se convirtió

en el ala más reformista y propositiva de la nueva dirigencia. El MCD intentó restarle presencia interna a la heredera de la Corriente Democrática, la Corriente Crítica, y por otro lado, - actuó como una especie de termómetro ante las propuestas más radicales de transformación.

Colocadas desde un principio las piezas, el grupo salinista prometió emprender una magna movilización para consultar a las bases del partido, con el objetivo de que éstas decidieron la transformación. Se proclamaron líneas de reforma y hasta se llegó a comparar la realización de la XIV Asamblea Nacional con las asambleas que crearon al PNR en 1929 y al PRM en 1936.

No obstante, desde el principio la reforma parecía estar claramente acotada por las siguientes razones:

1. El presidencialismo como punto de partida y de llegada. La reforma del Partido Revolucionario Institucional se concibió como una operación política surgida desde la cúpula del poder presidencial. De él partía y hacia él se conducía. La dirigencia permitió cierto juego democrático al interior del partido, pero cuidó muy bien los amarres de decisión para que los intereses de la élite en el poder no fueran desbordados por las bases.

El discurso a favor de la disciplina partidista se convirtió en una especie de conjuro contra las sombras de una nueva escisión interna. Todo dentro de la disciplina, nada fuera de ella.

Los límites al despertar democrático del Partido Revolucionario Institucional fueron establecidos de inmediato por el propio presidente. En su discurso del 4 de marzo de 1989, aniversario de la fundación del partido, el presidente Carlos Salinas de Gortari afirmó que el Partido Revolucionario Institucional - va a cambiar por voluntad interna y sin sacrificar su unidad; - en forma gradual y sin golpes precipitados de timón; con los - tiempos más convenientes y con la agenda que determinen los propios priístas.

Posteriormente, el mismo Carlos Salinas de Gortari dictó - la línea en cuanto al contenido y alcance de la reforma. Un año después, el 4 de marzo de 1990, seis meses antes de la realización de la XIV Asamblea, Carlos Salinas de Gortari expuso seis propuestas básicas que se convirtieron en guión puntual de la reforma. Fueron los claros acotamientos que las bases asumieron:

- a) Consulta directa a las bases para elegir a los candidatos de elección popular.
- b) Respeto a las corrientes internas dentro del partido.
- c) Manejo transparente de los recursos económicos del partido.
- d) Diferenciación y complementación entre el campo de acción del Partido Revolucionario Institucional y del gobierno.
- e) Creación de una nueva estructura de cuadros.

f) Creación de un órgano colegiado que decida la elección de los candidatos del partido en todo el país.

2. Tres niveles irreconciliables. La línea presidencial no surgió de la nada. Era producto de un debate interno realizado a tres niveles, claramente diferenciados, que nunca confluyeron porque sus intereses y puntos de partida eran distintos. El Partido Revolucionario Institucional tuvo tres monólogos y una sola línea de mando.

Esquemáticamente, los niveles, protagonistas, causas y temas del debate interno se pueden ubicar de la siguiente manera:

La Cúpula:

Protagonistas: El grupo compacto salinistas.

Los jefes de otras camarillas políticas.

Las dirigencias corporativas.

Propósitos: Adecuar el partido al proyecto en el ejercicio del poder.

Analizar y sopesar los niveles de riesgo y de conflicto para mantener la cohesión interna.

Temas: Modelo de partido: de sectores o de ciudadanos

Prácticas: excluyentes o democráticas.

Cuotas de poder.

Las Fuerzas Internas:

Protagonistas: Intelectuales orgánicos del partido.

Burocracia partidista.

Cuadros políticos.

Propósitos: Articulación de un nuevo modelo de partido.
Conceptualizar y direccionar la reforma.

Temas: Redefinición ideológica del partido.
Reestructuración orgánica a fondo.
Implantación de nuevas prácticas.

Las Bases:

Protagonistas: Organizaciones populares.

Militancia activa.

Corrientes internas.

Propósitos: Inmediatos y desarticulados.

Búsqueda de respaldo clientelar.

Reafirmación frente a la dirigencia.

Temas: Crítica al centralismo del partido.

Exigencia de nuevos métodos de selección de candidatos.

La coincidencia entre los tres niveles de debate nunca se dió. La XIV Asamblea tuvo la cualidad de sacar a luz en forma abierta este fenómeno. Permitted el desahogo de las fuerzas internas articuladas. También dejó que las desarticuladas bases - priístas reclamaran y hasta se les concedió el derecho a la rebeldía declarativa. La cúpula observó, calibró, negoció y deci dió.

"El dato más significativo es que quizá por primera vez en la historia del partido oficial, se dió un debate abierto y público entre los protagonistas internos, se llegaron a plantear reformas que profundizaban e iban más allá del guión presidencial y se desarrolló esta discusión en medio de un clima de profundos reacomodos políticos a nivel nacional. De hecho, el salinismo emprendió en el periodo anterior a la XIV Asamblea un proceso de desmontaje, en los hechos, de las tradicionales reglas del juego priísta".⁹⁾

Sin embargo, el aterrizaje de cada una de las reformas constató que pudo más la fuerza del sempiterno autoritarismo presidencial sobre el partido que la pretendida aspiración democratizadora de sus bases.

La historia que acompañó a la XIV Asamblea Nacional, calificada por algunos como la cuarta reforma histórica del partido, revela que frente a la aspiración se refrendó la subordinación.

B. LAS ASAMBLEAS DEL PARTIDO OFICIAL Y EL PODER EJECUTIVO

La maquinaria partidista comenzó a trabajar en la realiza-

9) CORDERA, Rolando. La Disputa por la Nación. Edit. Siglo XXI México, D. F., 1996. Pág. 45.

ción de la asamblea y la articulación de nuevas fuerzas desde los primeros días de 1989. En el transcurso de ese año se registró una vasta operación de movilización y consulta internas, pero también se generaron los primeros conflictos graves entre las fuerzas internas del Partido Revolucionario Institucional y la nueva élite dirigentes que marcaron el ambiente de la asamblea.

La primera sacudida de los aires salinistas dentro del partido se dió con la derrota del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones para gobernador en Baja California el 4 de julio de 1989, un año después de la célebre caída del sistema.

Por primera vez en la historia de la hegemonía priísta y ante la contundencia de los resultados, el Partido Revolucionario Institucional perdía su primera gubernatura frente a Ernesto Ruffo Appel, alcalde de Ensenada y aguerrido candidato del PAN.

La noche del 4 de julio y al amparo de la fotografía del presidente Carlos Salinas de Gortari, Luis Donald Colosio anunció que los resultados en la gubernatura (de Baja California) favorecen al candidato del Partido Acción Nacional. Con esta declaración Colosio pasaba a la historia como el primer dirigente priísta que reconocía una derrota mediante las urnas y detonaba un profundo descontento interno en las filas priístas de Baja California.

Acostumbrados a arrasarse electoralmente, los miembros del tricolor en Baja California le gritaron ¡traidor! a su dirigente nacional y llegaron incluso a llamar a levantarse en armas para defender el supuesto triunfo de su candidata Margarita Ortega.

En un arrebato de indisciplina y de defensa de la soberanía, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Martínez Palomera rechazó que su partido hubiera aceptado la derrota y llamaba a la insubordinación civil.

Ese primer gesto democrático de la dirigencia priísta constituyó un plan con maña. El 4 de julio comenzó a operar la nueva doctrina selectiva de triunfos de la oposición: mientras en Baja California se aceptaba la derrota frente al PAN, en Michoacán, bastión neocardenista, se refrendaba el triunfo contundente ante al naciente Partido de la Revolución Democrática. Ni la documentación del fraude ni las protestas y tomas de palacios municipales revirtieron la operación fraudulenta encabezada por un destacado alquimista priísta, el delegado del partido en la entidad Jesús Guadarrama.

Iniciaba con Baja California el período de la concertación que tenía como objetivo principal resolver el primer reto del presidente entrante: ganar legitimidad con la aprobación de una oposición funcional a su proyecto.

Para los priístas bajacalifornianos y los que estuvieran -

en condiciones similares, el mensaje era claro.

El síndrome bajacaliforniano acompañó durante todo el año la discusión de la próxima reforma del partido. La dirigencia partidista decidió encarar el problema: para que no se repitiese el fenómeno de Baja California era urgente superar los vicios internos y emprender la reforma.

Meses antes del 4 de julio, en marzo de 1989 se realizaron los primeros trabajos de consulta previa a la XIV Asamblea Nacional. Tres mesas de debate dirigidas por Silvia Hernández, - líder de la CNOP, Abraham Talvera, encargado del IEPES, y la senadora Dulce María Sauri, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, resaltaron las primeras opiniones de - cerca de 200 participantes.

El texto final del Consejo Nacional Revolucionario del Partido Revolucionario Institucional recogió las principales demandas. En el texto de la tribuna Emiliano Zapata, coordinada por Hernández, los participantes subrayaron: el Partido Revolucionario Institucional ha cumplido históricamente con el gobierno, - que ahora el gobierno cumpla con el Partido Revolucionario Institucional. No toleremos ni caciquismos ni ineptitudes ni indolencias en la militancia o en la dirigencia. Tampoco la falta de solidaridad partidista de los servidores públicos.

En el mismo tono crítico, la relatoría de la tribuna Plu-tarco Elías Calles, coordinada por Talavera, recogió la incon-

formidad de la militancia juvenil con la persistencia de actitudes paternalistas y llamó a formar una nueva cultura política - en la que lo que destaque sea la honestidad.

Otras intervenciones pedían reformular la relación con el gobierno sobre la base de señalar la independencia del partido y su libertad de crítica; exigir más responsabilidad con la sociedad y el partido a funcionarios públicos; modernizar el partido a partir de su democratización y el fortalecimiento y respeto a la verdadera militancia.

Después de la sacudida bajacaliforniana, el 25 de noviembre de 1989, el Partido Revolucionario Institucional celebró - otras reuniones de consulta regionales en Tlaxcala, Zacatecas, La Paz, Saltillo y Villahermosa.

De esta consulta surgió el primer diagnóstico previo a la asamblea. En el Plan de Acción para el Debate Nacional sobre la reforma del partido, Colosio resumió lo que él mismo denominó los cuatro grandes retos:

- a) La posición política del partido.
- b) La representación política.
- c) La derrota de la inercia.
- d) El fortalecimiento de la imagen del partido.

A su vez, estableció tres criterios para el cambio: 1) modernización; 2) democracia; y 3) solidaridad.

Evidentemente, los tres criterios surgían del entorno discursivo del gobierno salinista. Llamaba poderosamente la atención que la solidaridad sustituyera como criterio general al viejo paradigma de la justicia social, y la modernización ocupara el lugar del nacionalismo revolucionario, divisa tradicional de la ideología priísta.

Por otro lado, Colosio también trazó las líneas estratégicas del plan: a) reorganización democrática interna, incluidos los sectores; b) recuperar iniciativa en las reivindicaciones sociales y políticas; c) defensa de la soberanía y acción internacional partidista; d) nueva comunicación para la cultura política; e) nueva organización para la lucha electoral; f) planeación para la cultura política.

Un punto medular de la relación PRI-gobierno se dejó al aire: el financiamiento del partido, a pesar de que fue expresado en las seis propuestas fundamentales de Carlos Salinas de Gortari. Fue hasta el momento de la asamblea que algunas corrientes internas plantearon la necesidad de establecer nuevas formas para obtener recursos que no implicaran subordinación al gobierno.

La burocracia priísta desplegó sus recursos durante seis meses para cumplir con el expediente de una amplia consulta política interna. Durante este lapso, salieron a relucir los verdaderos puntos medulares de la pugna interpriísta:

I. La desaparición de los sectores. A nivel de la élite salinista el consenso era común: la vieja maquinaria corporativa ya no servía y era necesario buscar otros mecanismos de cooptación funcionales al modelo y a la nueva clase dirigente.

En un documento titulado La Reforma del Partido. Hacia la XIV Asamblea Nacional, Colosio señalaba que la imagen del Partido Revolucionario Institucional está deteriorada y culpaba de ello a las corporaciones obrera, campesina y popular, y no a la estructura territorial del partido.

Según Colosio, es en los sectores donde en los últimos años se ha deteriorado más la presencia del partido, y querámoslo o no en gran medida se ha configurado un descontento político. El dirigente no decía cuáles eran las causas específicas del deterioro producido por la estructura sectorial y cómo se podría transformar al partido para democratizarlo. Era más bien un mensaje político dada la coyuntura electoral y las álgidas negociaciones en materia salarial que mantenían los dirigentes cetemistas y el gobierno.

Ante las palabras colosistas, obviamente Fidel Velázquez tronó y en su particular estilo llegó a amenazar con que la CTM abandonaría el partido.

La disputa culminó en el memorable abrazo de Mérida del 22 de julio de 1990, cuando Colosio reivindicó el papel histórico del viejo dirigente y, en un acto de contricción, señaló: Quie-

del sector campesino (CNC, CCI, UGOCEM, CAME, Antorcha Campesina y el Movimiento de los 400 Pueblos) un pacto político en el que se comprometen a establecer un trato entre iguales dentro de los espacios de la vida política del partido.

II. Desarticulación organizativa. El Partido Revolucionario Institucional, en su intento de hacer una gran movilización partidista, descubrió su primera y delicada carencia: la inexistencia casi total de órganos seccionales.

A esto se agregó la negativa o la obstaculización de los gobernadores y de los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional en los estados y en el Distrito Federal a organizar estos órganos y a propiciar la movilización implícita en los procedimientos de integración de las asambleas.

Entre jaloneos e intentos de concertación con los jefes políticos, se fueron venciendo los plazos fijados en la convocatoria para realizar las asambleas seccionales. Al final, estos eventos, en los estados y en los municipios, tuvieron que organizarse al vapor y de acuerdo con lo establecido, no en la convocatoria, sino en los más puros cánones de la tradición priísta.

Este hecho reveló la enorme dificultad para darle vida y consistencia propia a las bases priístas. El partido oficial se encontró frente a la faceta más ruda de su realidad: a pesar de la ineficacia probada de los sectores y de los gobernadores para competir y ganar legítimamente el poder, dentro del Parti-

do Revolucionario Institucional seguían siendo las únicas fuerzas organizadas existentes.

III. Acercamiento y distanciamiento de las corrientes críticas. El temor a una nueva escisión masiva de militantes, terminó la formación de corrientes internas dentro del Partido Revolucionario Institucional que enriquecieran el debate más allá de los puntos propuestos por la dirigencia.

Las dos grandes corrientes a nivel nacional que se reivindicaban como transformadoras eran sumamente limitadas: por un lado, la Corriente Crítica liderada por Rodolfo González Guevara tenía escaso ascendiente entre las llamadas fuerzas vivas del Partido Revolucionario Institucional, o en otras palabras, dentro de la clientela corporativa del partido oficial. Fue un grupo de cuadros, buena parte de ellos surgido de las filas juveniles y de la vieja guardia partidista que reivindicaban muchos de los puntos planteados por la Corriente Democratizadora en 1987. El estigma de ser la heredera directa de la corriente escisionista encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, le ganó desde el principio al grupo de González Guevara la antipatía de la dirigencia.

Por otro lado, se fundó el Movimiento para el Cambio Democrático, dirigido por el asesor colosista Julio Hernández López. Gracias al apoyo recibido desde la dirección, el grupo de Hernández López pudo ampliar su cobertura en toda la República.

Días antes de la XIV Asamblea, los dirigentes de la CC y el MCD acordaron crear un Frente Nacional Democrático para defender propuestas conjuntas para un cambio real y de fondo en el partido.

Según el documento, las dos corrientes demandarían que en los textos de Estatutos y la Declaración de Principios, no se sustituyera el concepto de justicia social por el de solidaridad, no así en el Programa de Acción en virtud de que este documento tiene propósitos y alcances de corto y mediano plazos.

En esa ocasión, González Guevara consideró que la actitud de tolerancia actual de la dirigencia hacia las dos corrientes es sólo para evitar que se repita la escisión de la XIII Asamblea. No es tanto la comprensión hacia el cambio democrático, no nos engañemos. Sostengo esto porque no creo que vayamos hacia el cambio democrático cuando no hemos trabajado realmente en la base de ese cambio, es decir, la organización del partido.

A última hora, el 30 de agosto en una reunión realizada en Aguascalientes, la Corriente Crítica decidió no participar en la Asamblea Nacional argumentando que estaría amañada e impediría la discusión, la réplica y el derecho de voto. En el mismo sentido, el Movimiento para el Cambio Democrático (MCD) consideró antidemocrático el reglamento de la Asamblea porque no permitiría un auténtico debate. Pese a ello, el MCD decide participar y lamentó la autoexclusión de la Corriente Crítica.

"Cien días antes de la Asamblea Nacional se instalaron las

cuatro mesas de trabajo en donde se aglutinaría el trabajo de cerca de 2 mil delegados priístas de todo el país: la Comisión Nacional de Declaración de Principios, presidida por Socorro Díaz; la Tribuna Nacional del Programa de Acción, dirigida por José Carreño Carlón; la Comisión Nacional de Estatutos, a cargo de Jesús Salazar Toledano; y la Comisión Nacional de Modernización, presidida por Abraham Talavera".¹⁰⁾

Cada una de las cuatro mesas se subdividió en varias tribunas de debate y realizó sus reuniones en las siguientes ciudades: en Querétaro, se discutió la Declaración de Principios; en Morelos, el Programa de Acción; en Puebla, los Estatutos y en Tlaxcala, la Modernización. La plenaria, llevada a cabo el 3 de septiembre de 1990, tuvo lugar en la Ciudad de México.

El esquema de control de todos los trabajos de la Asamblea fue sorprendente. Desde la dirigencia se estableció de antemano un equipo dirigido por Roberto Madrazo Pintado para evitar una revuelta interna. Un documento confidencial titulado Estrategias de Concertación Política para la XIV Asamblea Nacional plantea toda la logística del evento. En ese documento destacan los llamados agentes del cambio, voces del cambio y promotores que en el ardid priísta representaban a los agentes internos de la dirigencia.

10) FERNANDEZ DOBLADO, Luis. La Tutela del Sufragio. 5a. ed., Edit. UNAM. México, D. F., 1994. Pág. 15.

Según el documento, por cada una de las tribunas de debate participarían: 1 coordinador de grupos de apoyo, 4 voces del cambio, 15 agentes del cambio y 4 promotores. En otras palabras la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional decidió articular una estrategia de orejas y paleros para sacar adelante sus propuestas de reforma y neutralizar aquellas que implicarían cambios radicales.

La Mesa de Estatutos. Desde antes del evento, se pronosticó que una de las mesas claves sería la que sesionaría en Puebla y estaría a cargo de Jesús Salazar Toledo y Héctor Hugo Olivares Ventura: la de Estatutos.

No era para menos. En esta mesa se resolvería uno de los dilemas históricos del Partido Revolucionario Institucional: partido de sectores o de ciudadanos; se definiría un punto clave: requisitos y métodos para elegir a los candidatos priístas, desde alcaldes hasta presidente de la República, y se aprobaría un nuevo órgano colegiado de dirección, el Consejo Político Nacional.

Las corrientes radicales reclamaron que el Partido Revolucionario Institucional olvidara la fórmula mixta (sectores y ciudadanos), declarara que toda afiliación sería voluntaria y que el método para elegir a los candidatos a gobernadores, diputados, senadores y presidente de la República fuera el de consulta directa a la base. Asimismo, se defendió que entre los requisitos para ser candidato a presidente estuviera el antecedente de tener algún cargo de elección popular. Las corrientes conservadoras -

estaban en contra de desarticular la estructura sectorial y eludían el debate del método y los requisitos para ser candidatos.

Como describe Jesús Salazar Toledano en su ensayo Sobre los Trabajos de la Comisión Nacional de Estatutos, los delegados parecían querer ajustar un buen número de cuentas: ésta no será una asamblea más, de ir al auditorio y levantar la mano.

La mesa se dividió en 3 tribunas de debate. La más concurrida fue la tribuna 3, presidida por la lideresa magisterial - Elba Esther Gordillo, que discutió uno de los puntos cruciales de la cuarta reforma histórica: la elección de dirigentes y candidatos del Partido Revolucionario Institucional.

Los delegados de esta mesa se adelantaron casi imperceptiblemente a la sucesión presidencial. Con sus propuestas pusieron a temblar a más de un precandidato del gabinete salinista - que no llenaba con uno de los requisitos: contar con cargos de elección popular previos.

Hasta antes de discutir la reforma 25 todo parecía estar en calma. Sólo uno que otro delegado denunció que las campañas electorales priístas degeneran en vil mercadotecnia y que, en muchas ocasiones, los dirigentes designan por dedazo, a sus compinches y compadres. La mayoría de los participantes reclamó que se tomara en cuenta a la militancia y que la labor de proselitismo se hiciera con las bases del partido.

Cuando se abrió el registro para discutir la reforma 27, -

decenas de brazos se levantaron. Era el momento de aprobar el punto relacionado con el perfeccionamiento y depuración de nuestro proceso electoral interno.

Para este tema se sugirieron tres modalidades: consulta a la base, a través de delegados, o el sistema de usos y costumbres. En el caso del registro para el precandidato a la Presidencia se establecía el siguiente mecanismo: aprobación de la mayoría de los integrantes del nuevo Consejo Político Nacional.

Un delegado guanajuatense abrió el fuego. Criticó la propuesta por considerar que ponía candados y culminó con una pregunta que incendió la tribuna: ¿A quién de los presentes se le ha consultado alguna vez para elegir al candidato a presidente? ¡A nadie!, respondió la mayoría.

La representante de la CNOP del Distrito Federal, destacó que la base priísta no quiere que los tecnócratas venidos de universidades extranjeras nos digan cómo se hace la política. El presidente municipal de Comalcalco, Tabasco, al intervenir señaló: queremos democracia y no una miseria de ella y apoyó la propuesta de que el único método de selección fuera la consulta directa a la base porque es más fácil comprar a 500 delegados que a 40 mil votantes.

En ese mismo tenor participaron delegados de Quintana Roo, Morelos, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Distrito Federal y Baja California. A los oradores que alababan la propues-

ta original los abucheaban. Un delegado advirtió: No nos metamos a la carrera presidencial antes de tiempo.

Para retornar al control, el gobernador de Veracruz Dante Delgado subió a la tribuna y les reclamó a los delegados que habían estado más radicales: en ocasiones, no apreciamos lo que tenemos, paz y estabilidad. Con su intervención cerró la ronda de oradores.

La mesa directiva adoptó una solución salomónica para decidir cuál propuesta de las cerca de 10 que se hicieron quedaría: nombraron una comisión de 40 delegados que durante cinco horas, en medio del hermetismo absoluto, discutieron las propuestas. La resolución final estableció la elección de candidatos hasta gobernadores y diputados federales mediante el procedimiento de consulta directa a las bases. Implícitamente se dejaba al margen de este ordenamiento a los precandidatos presidenciales.

Me he extendido en la crónica de esta propuesta porque considero que fue el ejemplo más claro de cómo estuvo el ambiente en las mesas conflictivas y cómo la dirigencia detonó cualquier asunto que pusiera en peligro la estabilidad del partido y del gobierno. Fue, además, el mejor ejemplo de cómo las bases discutieron, pero no decidieron.

Esa misma mesa decidió, entre otros puntos, los siguientes:

- a) Mantener la doble estructura del partido.
- b) Crear el Consejo Político Nacional, como nuevo órgano -

de dirección política. Entre las facultades de este nuevo órgano se encuentran: dictar resoluciones para el desarrollo y aplicación de los documentos básicos del partido que se estimen necesarias; formular los planes, estrategias, tácticas y orientación de índole general para conducir la lucha política dentro de los cauces legales, fomentar la *unidad interna* y la organización del trabajo partidario. Corresponde a este nuevo Consejo elegir al secretario del Comité Ejecutivo Nacional, autorizar los planes y programas cuya ejecución corresponda al CEN, aprobar la creación de secretarías adjuntas y evaluar el informe sobre el origen, aplicación y destino de los recursos financieros del partido.

c) Crear la Fundación Cambio XXI para realizar las tareas encomendadas a los órganos de divulgación ideológica y formación de cuadros. El Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional (IEPES) quedaría subordinado a la nueva Fundación.

d) Para las elecciones estatales, distritales y municipales, los candidatos priístas serán designados con consulta directa a las bases.

e) Para el caso del candidato a presidente de la República con la mayoría simple de los integrantes del Consejo Político Nacional.

f) En materia de financiamiento se abogó por fortalecer la

autonomía económica del partido frente al poder público. Se propuso la creación de un Programa Nacional de Financiamiento y un Sistema Nacional de Cuotas.

La Mesa de Declaración de Principios. En la mesa que sesionó en Querétaro se discutió el eje ideológico del Partido Revolucionario Institucional: nacionalismo revolucionario o neoliberalismo. Otros puntos a debate serían: la definición del partido (*¿de sectores o de ciudadanos?*), *íntimamente relacionada con la* discusión en la mesa de Estatutos; el papel de la Constitución y la posición del partido frente a los empresarios, las iglesias y Estados Unidos.

La mesa estuvo a cargo de Socorro Díaz y tuvo cuatro tribunas de debate: una, sobre Definición del Partido; la otra, sobre los valores del partido, en donde se trataron temas tan amplios y complejos como la libertad, la democracia, la justicia social y la soberanía nacional; la tercera tribuna discutió el tema de la Constitución y el partido; la última, descrita por Díaz como la que *postuló el camino para alcanzar la sociedad que queremos.*

Según Díaz, la posición mayoritaria favorecía la adopción - de una Declaración de Principios que fuera un documento no para *un círculo de enterados o para un círculo ilustrado únicamente;* sino que sea un documento que ayude a orientar el debate cotidiano de los priistas en las circunstancias en que les toque actuar, y así participar de manera eficaz en la lucha política.

En materia ideológica se tomó otro acuerdo vago: los valores del Partido Revolucionario Institucional son los que emanan de la Revolución Mexicana que se condensan y tienen como única fuente de inspiración fundamental a la Constitución de 1917. Se adoptó entonces que el partido fuera en materia doctrinaria el Partido de la Constitución.

La discusión de los delegados acentuó el hecho de que no se eludiera incluir entre los objetivos del partido la búsqueda de la justicia social y que sus principios no variaran conforme a los vaivenes sexenales. Posición que fue tomada como una crítica implícita al intento de ajustar los principios del partido a la doctrina salinista.

A la hora de adoptar la definición del partido resurgió la pregunta: ¿partido de ciudadanos o de sectores? Entre los sectores más radicales del Partido Revolucionario Institucional na die se preguntó, antes que nada si el Partido Revolucionario - Institucional constituía realmente un partido político.

Este tema, después de una amplia discusión, se agotó cuando se adoptó finalmente el criterio inicial del documento: el partido debía definirse como partido de ciudadanos, de organiza ciones sociales y de sectores. Algunos discutieron que el término organizaciones sociales incluía a los sectores. Reciente estaba todavía la guerra declarativa entre Fidel Velázquez y Co losio, por tanto, se señaló desde la directiva de la mesa que se conservara la figura de los sectores por razones más que or-

ganizativas, fundamentalmente ideológicas.

"El nacionalismo y el papel del Estado fueron otros dos - puntos discutidos. Se llegó a la conclusión, según Socorro Díaz de que no podíamos confundir los procesos de regionalización o de transnacionalización económica, que son estrategias frente a las cuales el gobierno de México y el propio partido tienen que definir estrategias específicas... con cuestiones esenciales, - como es el derecho del pueblo de México a definir libremente su destino, a reclamar su derecho a la autodeterminación, y a proyectar en el ámbito internacional los intereses legítimos de la Nación Mexicana. El punto de la relación Estado-mercado provocó una larga discusión a raíz de que un delegado señaló que no se debían sustituir las irracionalidades derivadas de la regulación excesiva del burocratismo, con las irregularidades derivadas de los abusos del mercado. Otros señalaron que no se debía hablar de irracionalidades sino de distorsiones. Esta precisión, finalmente se aceptó".¹¹⁾

La sensación general en varios delegados fue que, como en la mesa de Estatutos, en ésta se cedió al tema de los sectores y la dirigencia concedió mantener la ortodoxia doctrinaria del partido en temas como el nacionalismo.

11) GONZALEZ ARZAD, Luis. Los Delitos Electorales. Edit. Facultad de Derecho, UNAM. México, D. F., 1997, pág. 26.

La Mesa del Programa de Acción. Presidida por José Carreño Carlón, esta mesa fue la que contó con más tribunas de discusión (nueve). Un documento de la dirigencia del partido revelaba que el 32 por ciento de las propuestas para la elaboración del Programa de Acción establecen que debe configurarse una nueva cultura política de mayor democracia dentro del partido; y 22 por ciento abogaron porque el Partido Revolucionario Institucional recobre su presencia y capacidad de gestión para mejorar la situación económica, el empleo, la productividad y los servicios en favor de la sociedad.

La discusión giró en torno a la definición del tipo de régimen que buscaría sustentar el partido, se revelaron críticas contra el Programa Nacional de Solidaridad y el papel del Partido Revolucionario Institucional en el impulso a la democratización.

De acuerdo con Carreño Carlón, las intervenciones de los delegados eran inevitablemente reiterativas, necesariamente venementes: el fortalecimiento del partido debe emprenderse desde sus comités seccionales; la solidaridad ha de ser una forma permanente de convivencia entre los priistas y no sólo una moneda sexenal, los documentos básicos son para cumplirse.

Una vez más, el partido se enfrentaba ante sus propias carencias como organización política sin vida interna democrática. En realidad, los puntos adoptados por las nueve tribunas de debate fueron más bien líneas generales que, como se constató pos

teriormente, no cuajaron en propuestas concretas y novedosas.

Entre los compromisos adoptados se encontraban:

a) Transformar el Programa de Acción en un verdadero Programa Político Nacional.

b) Trazar un compromiso directo de los priístas con el fortalecimiento de la democracia. Dividieron este punto en dos rubros: *democracia representativa* y *democracia participativa*. Para el primer tipo, los priístas acordaron impulsar la democratización en la integración de los órganos del Estado, así como - continuar promoviendo leyes y prácticas electorales que den legalidad y transparencia a los procesos comiciales. En materia de *democracia participativa* se resolvió profundizar en fórmulas de participación y negociación social que aseguren que el diseño de políticas públicas sean producto de la concertación sectorial.

c) Reafirmar el régimen presidencial democrático prescrito en la Constitución y, a la vez, avanzar en nuevos equilibrios - de poderes entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

d) Dar transparencia y operatividad a la rectoría económica del Estado sin abandonar el combate a la pobreza y la búsqueda de la justicia social.

e) Profundizar los métodos democráticos en los procesos de adopción de decisiones internas, a través de órganos colegiados y de estructuras territoriales fincadas en la vida partidista - municipal.

f) Actualizar y confirmar en todos sus rasgos el carácter competitivo del Partido Revolucionario Institucional, como un partido entre partidos.

g) Establecer una nueva relación con el gobierno, tendiente a recobrar la iniciativa ideológica propia del partido.

h) Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales y del derecho internacional.

La Mesa de Modernización Nacional. En la ciudad de Tlaxca la se realizó una de las virtuales rebeliones de los delegados priistas a la XIV Asamblea contra la propuesta original de la dirección para incluir la agenda de los puntos del programa salinista dentro de los objetivos del partido. De ahí el ambiguo término de modernización nacional.

La declaración original fue prácticamente rebasada por más de 500 delegados que intervinieron en la discusión y reclamaron, entre otras cosas, que se incorporaran al documento las demandas y modificaciones que no fueron tomadas en cuenta y que exigen una profunda reforma del Estado en la que la justicia social, democracia efectiva y recuperación del bienestar y salario de los trabajadores constituyeran el eje de las transformaciones nacionales.

La mesa, presidida por Abraham Talavera, uno de los intelectuales del salinismo, proponía cosas tan vagas como estas fra

ses: la modernidad es un concepto de nuestra nueva cultura política, el impulso modernizador es parte de la vocación histórica del país y seguirá jugando un papel vital en nuestro proyecto nacional; el eje de la nueva cultura política es la democracia. Hoy, ser priísta significa que de la simple expectación pasemos a la acción. En otras partes era un evidente discurso legitimador del sistema: la sociedad mexicana, tiende a conciliar las exigencias de igualdad con la defensa de la libertad. Por ello, en el México de 1920 a la fecha, no ha habido dictaduras, ni tiranías, ni gobiernos militares. En algunas líneas se pretendía adaptar la estructura del partido a los intereses del actual régimen: el Partido Revolucionario Institucional sostiene que para garantizar el éxito de la estrategia de modernización económica es necesario fortalecer la actividad empresarial del país.

En fin, como estos puntos muchos otros pretendieron crear una especie de Declaración de Principios paralela a la discutida en Querétaro, mezclada con algunas propuestas que deberían estar en la discusión del Programa de Acción.

Con todo, las corrientes más radicales que asistieron a los debates lograron incluir algunos puntos interesantes que valen la pena rescatar. Por ejemplo:

1. El Partido Revolucionario Institucional manifiesta su oposición a la militancia obligatoria a cualquier partido político de funcionarios públicos, pues considera que ésta debe ser por convicción.

2. El partido opina que debe iniciarse juicio político a los funcionarios públicos que cometan fraude.

3. La concentración excesiva del poder ha agotado sus posibilidades. El centralismo de facultades se ha convertido en tendencia que inhibe el desarrollo político del país. En el proceso democrático debe suprimirse la práctica de palomear a los candidatos de elección popular de cualquier nivel: los delegados de esta tribuna afirman que este reclamo debe escucharse en los Estado y en los Municipios.

4. Los representantes proponemos que la elección de todos los candidatos y de los dirigentes sin excepción sea democrática y con base en la voluntad de la militancia evitando con ello cacicazgos, dedazos e imposiciones.

Obviamente, a cambio de estos puntos se incluyeron declaraciones como éstas:

Los delegados ratificamos como pautas para el Partido Revolucionario Institucional los tres acuerdos propuestos por el Presidente de la República a la Nación, luego de recoger las inquietudes ciudadanas durante su campaña electoral, a saber: para la ampliación de la vida democrática; para la recuperación de la vida económica; y para el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población, en las que se implica una Reforma del Estado, así como de sus relaciones con la sociedad y con el ciudadano.

La discusión y los acuerdos tomados en cada mesa de debate.

revelaron que algunos grupos priístas pretendieron ir más allá de las propuestas originales de la dirigencia y del propio Carlos Salinas de Gortari.

La lección para el grupo salinista fue que el descontento al interior de las filas del tricolor era múltiple y podría adquirir visos de rebelión interna. Además, fue evidente en muchas tribunas de debate que el control sobre las bases no era total.

Quizá por ello, a última hora, en la sesión de clausura del evento, Carlos Salinas de Gortari modificara su discurso e incluyera algunos párrafos como éstos de clara advertencia a los sectores que no adoptaron la línea:

Frente a la reforma del partido no puede haber equívoco: - los cambios son y se están dando, para fortalecer nuestra organización política, no para destruirla. No son cambios para satisfacer a los adversarios que, como es natural, con sus propuestas buscan debilitarlo; son cambios para fundar una más sólida unidad, porque va al ritmo de la militancia con el sentir de lo que necesita México; son cambios para mantener a la Revolución Mexicana en el gobierno son cambios para la victoria y no para obsequiar el poder.

Poco después, afirmaría:

La disciplina es básica, la concurrencia y la consulta para plasmarla es el cambio, así es la naturaleza de un partido -

político; la organización para acceder democráticamente al poder y conservarlo. Sin disciplina los antagonismos y el faccionalismo se entronizan y eso quisieran los opositores; pero sin la necesaria consulta, sin la razón, sin legalidad interna, hay frustración y abandono y una alta probabilidad de errar en las decisiones.

Asimismo, pondría claramente los límites de el cambio:

Los cambios en la vida política de México no deben poner en riesgo a las instituciones de la República y menos a la soberanía de la nación. Así están los límites del cambio...

En este proceso, bienvenidas todas las opiniones dentro del partido, excepto las que hablando de democracia, promueven en realidad su división.

Fue un discurso de advertencia que confirmaba la preponderancia de la línea presidencial sobre la vida interna del partido; reeditaba el lenguaje de la disciplina como un acatamiento básico a las órdenes que la dirigencia daba; e imponía los límites del cambio. Ninguna alusión a la necesidad de ser consecuentes con el fin de la era del partido prácticamente único.

De hecho, la idea del partido del gobierno fue reforzada por Carlos Salinas de Gortari.

La reforma del Partido Revolucionario Institucional tiene que ser para ayudar y apoyar también el trabajo del gobierno, para la defensa de la soberanía y mantener la integridad de la

República, y apoyar firmemente a las organizaciones que luchan por la justicia social. Por eso buscamos la victoria electoral, por eso trabajamos decididos y comprometidos cuando al fin la alcanzamos.

Aunque Carlos Salinas de Gortari hiciera alusión a la justicia social y al nacionalismo revolucionario, viejas consignas del discurso priísta, no perdió la oportunidad para reincorporar al argot el tema del solidarismo, un concepto ampliamente debatido y criticado por varios delegados que lo consideraron ajeno a la tradición ideológica priísta:

Hoy Solidaridad crea nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, alienta la participación organizada y promueve la creación de nuevas bases sociales.

C. LA CRISIS DE PARTIDO Y LAS ALTERNATIVAS EJECUTIVAS

No pasó mucho tiempo para comprobar que, aunque mínimos, los acuerdos de la XIV Asamblea podrían agudizar la división en el partido. Ante ello, los grupos políticos locales y la propia dirección nacional optaron por eludir el cumplimiento de temas como la consulta directa a la base para elegir a los abanderados priístas en las contiendas electorales.

La idea original de convertir al Partido Revolucionario - Institucional en un partido de ciudadanos, cercano a las demandas de la sociedad, que eliminara aquellas prácticas que obligaban a negociar cuotas de poder con las grandes corporaciones internas, dió lugar a un partido amorfo en el que por un lado se intentó revertir el peso de la CTM y, por otro, utilizarla para legitimar las imposiciones del centro en la designación de can didatos.

"El mandato de realizar consulta directa a las bases fue violado tan pronto como se empezaron a decidir las nominaciones de los estados que elegirían gobernador en 1991. De las siete entidades que tendrían elecciones, sólo en dos se presentó más de un contendiente: Colima y Nuevo León. De ellas, sólo en una la consulta fue real, es decir, se hicieron elecciones internas (Colima). Sin embargo, en esta consulta de antemano se marginaron a otros precandidatos que pusieran en peligro las nominaciones de Socorro Díaz y de Carlos de la Madrid Virgen".¹²⁾

El mismo esquema de repitió en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora y Campeche. En esta última entidad, los sectores locales priistas protestaron por la imposición de Jorge Salomón Azar, un tecnócrata sin arraigo en la entidad. Una acusación similar pesó sobre la candidatura de Ramón Aguirre Ve

12) MORENO, Daniel. Los Partidos Políticos del México Contemporáneo. 39a. ed., Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1997. Pág. 41.

lázquez en Guanajuato, de Fausto Zapata en San Luis Potosí y de Manlio Fabio Beltrones en Sonora.

En marzo de 1991, militantes priístas que estuvieron en la Corriente Crítica de González Guevara y fundaron un grupo nuevo denominado Democracia 2000, declaraban que con la imposición y el dedazo en las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional para los gobiernos de San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, se hicieron pedazos las reformas del partido y si éste quiere ganar, al menos en los dos primeros estados, tendrá que hacer fraude.

En un tono también crítico, el dirigente del Movimiento para el Cambio Democrático (MCD), Julio Hernández López, señaló que la democratización del Partido Revolucionario Institucional enfrentaba serios riesgos, pues se mantiene vigente la antigua cultura de la línea, el dedazo, la cargada, la simulación y la demagogia.

El descontento tuvo un claro tinte de disputa intercorporativa, es decir, la vieja lógica de las cuotas de poder a los sectores se alteraba y en muchos estados sólo se les utilizó como paraguas que legitimaran las decisiones previamente tomadas sin consultar a las bases. En Nuevo León, por ejemplo, los dirigentes estatales de la CNC, de la CROC y de la nueva organización sustituta de la CNOP, la UNE, repudiaron la cargada que sectores priístas agrupados en la CTM iniciaron al apoyar al alcalde de Monterrey, Sócrates Rizzo, un político estrechamente vinculado al grupo salinista.

El fracaso más evidente en cuanto a los nuevos métodos de selección interna se registró en el proceso de elección de 33 candidatos a presidentes municipales en Morelos. Los priistas padecieron en sangre propia la cultura del fraude. Se acusaron de alterar el padrón, de realizar carruseles entre los mismos priistas y hubo conatos de violencia.

La firma en diciembre de 1990 del Acuerdo para la Democracia Territorial demostró que el intento de sustituir la estructura indirecta del partido por otra territorializada no era más que una operación de recorporativización de las filas priistas, e imponerle límites a la posible movilización interna.

La Iglesia se puso en manos de Lutero: los firmantes del acuerdo fueron los dirigentes nacionales de la CNC, la CTM, la nueva UNE, el CIM y el FJR, y los dirigentes del nuevo CEN del Partido Revolucionario Institucional. Ellos se erigieron en un comité organizador de la democracia priista y serían los encargados, de acuerdo con el documento, de construir 32 comités semejantes en cada uno de los estados de la República.

El único punto del acuerdo que abría cierta esperanza de democratizar los procesos internos del partido fue el anuncio de la creación de un padrón priista, inexistente hasta el momento. Por otro lado, también se prometió que el nuevo Consejo Político Nacional se instalaría con base en los datos derivados de dicho padrón.

Los datos nunca se dieron a conocer. La instalación del Consejo Político Nacional y la designación de sus 157 miembros el 4 de marzo de 1991 demostró que el partido oficial estaba - muy lejos de crear una instancia verdaderamente representativa de las corrientes del partido y, mucho menos, con vocación de mocrática.

"El Consejo se integró con los presidentes de los 31 comités directivos estatales y del Distrito Federal, electos sin que mediara un proceso de selección con un padrón confiable de militantes. Junto con ellos estaban los dirigentes de las corporaciones priístas, los líderes de la fracción tricolor en el Congreso, y distinguidos militantes que, en realidad, eran viejas figuras reincorporadas al Partido Revolucionario Institucional salinista".¹³⁾

Entre las figuras del Partido Revolucionario Institucional reformado estaban hombres de tan turbia trayectoria como Humberto Serrano, líder del Congreso Agrarista Mexicano, acusado de - homicida en 1978; Aquiles Córdova, dirigente de la desacreditada Antorcha Campesina; hombres del priísmo más rancio como Fidel Velázquez; lideresas sindicales recorporativizadas como Elba Esther Gordillo, del SNTe; cetemistas acusados de charrismo como Leonardo Rodríguez Alcaine, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Moi-

13) ORTEGA LOMILI, Roberto. El Nuevo Federalismo. 10a. ed., - Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1996. Pág. 17.

sés Calleja, Sebastián Guzmán Cabrera, Arturo Romo o Cuauhtémoc Paleta; intelectuales orgánicos que antes criticaron a estos - mismos personajes, como Enrique González Pedrero; y, por supuesto, gente del salinismo: Rogelio Montemayor Seguy, coordinador del Pronasol en Coahuila, Manuel Cavazos Lerma, coordinador del mismo programa en Tamaulipas, Gustavo Gordillo, subsecretario - de la SARH, etc.

La función principal del Consejo Político Nacional: designar al candidato presidencial priísta para 1994. Obviamente, - sin abrir la consulta directa a las bases.

Con estos resultados, la XIV Asamblea Nacional, anunciada como el primer paso hacia la cuarta modernización histórica del partido fue más una aspiración que una realidad.

Los intentos por abrir la participación interna en los procesos de selección se quedaron a la mitad del camino. Del otro lado, la subordinación del Partido Revolucionario Institucional hacia la presidencia de la República se fue acentuando en la medida que el titular del Poder Ejecutivo tomaba las riendas del sistema político y le daba un impulso definitivo a su proyecto.

El año de 1991 fue un periodo clave de recuperación del - margen de maniobra presidencial frente al retroceso partidista. Un año después, la XV Asamblea se realizaría como un mero trámite para incorporar el proyecto presidencial de recorporativización del partido.

CAPITULO TERCERO

LA PRESENCIA PARTIDISTA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL EJERCICIO DEL PODER DE MEXICO

- A. EL LIBERALISMO SOCIAL
- B. SU CONTENIDO DE ASAMBLEA
- C. LAS PROPUESTAS DE CONTENIDO

A. EL LIBERALISMO SOCIAL

El 9 de abril de 1992, horas después de que se confirmara que él sería el sustituto de Luis Donaldo Colosio el gobernador de Zacatecas, Genaro Borrego puso las cartas sobre la mesa.

Que quede muy claro: la única lealtad que tendré como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional es con el presidente de la República.

Con estas palabras, Borrego daba un viraje de 180 grados - en el tono del discurso y en la imagen formal que pretendió implantarse en el partido a raíz de la XIV Asamblea Nacional.

Si en aquel periodo la dirigencia nacional fue muy ciudadosa de guardar las formas para ocultar cualquier sospecha de línea presidencia y si el acercamiento a las bases y las fuerzas vivas se proclamaba a diestra y siniestra como la nueva filosofía del Partido Revolucionario Institucional, con Borrego se - anunció claramente la llegada de los tiempos de la restitución autoritaria del poder presidencial sobre el partido.

No era para menos. Desde la perspectiva de la nueva élite en el poder y del propio presidente, las condiciones ya estaban dadas para olvidarse de los coqueteos democratizadores y las aspiraciones frustradas de la XIV Asamblea Nacional para entrar - de lleno a la virtual salinización del partido. Algunos eventos políticos marcaban la pauta:

1. A diferencia del clima prevaleciente en 1989 y 1990, - para 1992 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari controlaba - ya plenamente las riendas del poder y estaba en el punto más al to de su presidencia: los comicios federales de 1991 confirmaron la clara recuperación política del sistema garantizando una mayoría cómoda del priismo en las cámaras legislativas para em prender las reformas constitucionales del salinismo.

Del 50.74 por ciento de la votación nacional obtenida en - 1988, el Partido Revolucionario Institucional pasó en 1991 al 61.99 por ciento. Plazas estratégicas como el Distrito Federal, el cual se perdió en 1988 con el 27.25 por ciento, se recupera ron tres años después con el 46.23 por ciento de los sufragios. El caso de recuperación más sintomático fue el del Estado de Mé xico: del 29.79 por ciento de la votación en 1988 pasó al 53.54 por ciento en 1991. Ambos lugares concentran el 23 por ciento de la votación nacional del Partido Revolucionario Institucio nal, casi la cuarta parte.

"Fue tal la confianza en la recuperación electoral del go bierno que en 1991 los rumores sobre una posible reforma legal para permitir la reelección presidencial corrieron como reguero de pólvora en todo el aparato político a raíz de una sospechosa propuesta de una agrupación de comerciantes de La Laguna, una de las zonas emblemáticas de la recuperación política del mandatario".¹⁴⁾

14) SALDIVAR, Américo. Ideología y Política del Estado Mexicano. Edit. Siglo XXI. México, D. F., 1996. Pág. 95.

2. El diálogo de sordos que caracterizó los meses previos a la XIV Asamblea Nacional había cambiado radicalmente por el clásico monólogo tradicional dentro de la cúpula del poder: no había más orden que la proveniente de la presidencia de la República ni mayor proyecto revolucionario que el encabezado por el equipo gobernante.

En los hechos, avanzaba a rajatabla la modernización salinista: se había reprivatizado la banca nacionalizada hacía menos de diez años; se negociaba un tratado de libre comercio con Estados Unidos que rompía con décadas de retórica proteccionista y nacionalista; se iniciaba el desmantelamiento del aparato económico estatal con la venta de las paraestatales más codiciadas, encabezadas por Telmex; se emprendieron las reformas constitucionales más ambiciosas en décadas, como la del artículo 27 constitucional y sus múltiples leyes reglamentarias que virtualmente abrieron las puertas a la inversión privada en el sector primario de la economía; se anunciaba otra amplia reforma constitucional para cambiar el esquema de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica.

3. Se desarticuló un frente común opositor que amenazó con erigirse en el bloque antipriísta y antisalinista del sexenio. Para 1992, el presidente ya había amarrado un trato preferencial con el PAN, el cual contaba en su haber con dos gubernaturas y respaldaba firmemente las reformas más ambiciosas del sexenio: la del agro, las relaciones Iglesia-Estado y el desmantelamiento del modelo de Estado benefactor.

Si bien la llamada concerta-cesión con el blanquiazul afectó más que a nadie a los propios priístas, permitió la creación de un interlocutor opositor funcional para el proyecto y neutralizó la acción del verdadero rival político del salinismo: el neocardenismo, cuya influencia se extendía aún sobre buena parte del priísmo.

4. Desde el exterior, Carlos Salinas de Gortari había recibido el firme palomeo de Washington y se negociaba la incorporación de México a la órbita geoeconómica estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio, un acuerdo que de medio se convirtió en fin del gran operativo de reforma económica sexenal.

El modelo de Estados Unidos, encabezado por George Bush, - prefirió eludir cualquier reclamo sobre la cuestión democrática en México. Ya no eran los tiempos de duda que marcaron el inicio de la gestión salinista. El aval norteamericano se había - convertido en el más poderoso respaldo externo para el nuevo gobierno y no traía consigo ninguna condicionante democrática. - Washington simplemente reclamaba dismantelar el viejo modelo de desarrollo y abrir las fronteras económicas del país.

5. Hacia el interior, las clases políticas locales y las camarillas rivales al grupo compacto salinista habían perdido terreno frente a la vertiginosa recuperación del poder presidencial.

No sin problemas y graves conflictos de ingobernabilidad,

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

la élite salinista había colocado a sus piezas claves dentro de la estructura directa e indirecta del gobierno: los miembros del llamado grupo compacto ostentaban los puestos privilegiados del gabinete, un reducido núcleo de gobernadores participaba de esta expansión del poder salinista y otros se colocaban en el Poder - Legislativo.

En el trayecto de estos reacomodos y posicionamientos se vi vieron las crisis poselectorales de 5 entidades, el denominado - "síndrome de los interinatos", los jaloneos interpriistas que - amenazaron en innumerables veces con fracturas que dejaron su im pronta de descontento. Guanajuato y San Luis Potosí fueron en este período los casos emblemáticos de las crisis poselectorales del salinismo que encontraron una solución a golpes de presidencialazos.

6. Mientras las coporaciones priistas continuaron en pica-da, el gobierno instrumentó en los hechos un nuevo mecanismo pa ra crear clientelas acorde con las necesidades de legitimación y propaganda del modelos salinista.

El Programa Nacional de Solidaridad pasó de ser un mero ins trumento presupuestal de la política social del sexenio a pilar del discurso gubernamental, brazo largo de la presidencia en to dos los estados y en todas las áreas administrativas y mecanismo para entrelazar a la élite salinista con dirigencias sociales de origen distinto al priismo.

Pronasoì llegó a convertirse en una estructura paralela a la del Partido Revolucionario Institucional y, en muchos casos, su plantadora de la maquinaria partidista que tradicionalmente actuó como el soporte político de la presidencia.

A tal grado llegó Solidaridad en su expansión política que dentro del grupo salinista se le concibió como el germen de una nueva estructura partidista, baluarte ideológico del gobierno y pilar administrativo para garantizar la continuidad sexenal.

En 1992 se decidió que Solidaridad ya era una estrategia - madura para institucionalizarla. De esta forma, se creó su pilar administrativo con el nombre de Secretaría de Desarrollo Social, una nueva dependencia surgida con la fusión de SPP y SEDUE. A cargo de la nueva cartera en el gabinete quedó el operador político de Carlos Salinas de Gortari en el Partido Revolucionario Institucional: Luis Donald Colosio. El sonoreense fue, desde entonces, proyectado como el presidenciable más fuerte del -salinismo.

"En el plano ideológico-programático, el salinismo articuló una estrategia para sustituir el nacionalismo revolucionario por el liberalismo social como nuevo eje normativo del PRI e instaurar la refundación estructural del partido. Ambas operaciones surgidas como dos grandes proyecciones del Pronasoì".¹⁵⁾

15) CURIEL, Enrique. A la Búsqueda del Poder 15a. ed., Edit. F. C. E., México, D. F., 1990. Pág. 73.

En otras palabras, de septiembre de 1990 a mayo de 1992, - el operativo para reforzar los poderes presidenciales y el proyecto enarbolado por la compacta élite salinista ganó terreno - frente al desgaste paulatino del partido.

En esas condiciones, se calculó que era hora de aterrizar en la salinización del Partido Revolucionario Institucional sin necesidad de aspavientos democratizadores.

B. SU CONTENIDO DE ASAMBLEA

Entrevista con motivo del 50 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el periodista y analista Francisco Martínez de la Vega señaló que el Partido Revolucionario Institucional desde hace mucho que no tiene ideología: todo depende del rumbo que un día u otro señale le gobernante en turno.

No le faltaba razón al intelectual potosino. Para esa época López Portillo puso de moda la consigna de la revolución dentro de la revolución, el secreto dialéctico del Partido Revolucionario Institucional, según aquel presidente. Un sexenio antes, Luis Echeverría llamó a articular una tercera vía que encabezara el Partido Revolucionario Institucional frente al bipolarismo ideológico de moda en los setentas.

Como ellos, casi todos los presidentes, desde la creación del Partido Revolucionario Institucional, intentaron dejar su huella en la redefinición ideológica del partido. A tal grado ha sido esta pretensión que, con Martínez de la Vega, se puede señalar que la única premisa ideológica válida en el partido es aquella que define el presidente en turno.

"Con Lázaro Cárdenas, el Partido Revolucionario Institucional llegó a hablar en su declaración de principios de lucha de clases y un nuevo orden social. Para 1953, durante la presidencia de Adolfo Ruíz Cortínes, este término desapareció y, en cambio, se habló de un nuevo nacionalismo que intentaba reconciliar la política económica con el emblema de la defensa nacional. - Eran los tiempos de oro del desarrollo estabilizador".¹⁶⁾

Sin embargo, ningún presidente como Carlos Salinas de Gortari intentó dar una especie de salto histórico para ver en el siglo XIX y no en la revolución de 1910 el origen y la definición del ideario priísta.

En Zacatecas, el entonces gobernador Genaro Borrego habló de la necesidad de recuperar el liberalismo social mexicano, un término tomado de las obras ensayísticas de Jesús Reyes Heróles. Unos meses antes, durante el aniversario de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1991, el ex alumno reyesheroliano y

16) CUEVA, Mario de la. La Idra del Estado. 16a. ed., Edit. UNAM, México, D. F., 1980. Pág. 79.

entonces secretario de Desarrollo Urbano, Patricio Chirinos des calificó a los nuevos reaccionarios que defienden el orden esta dista.

De ambos discursos Carlos Salinas de Gortari retomó las ideas centrales y el 4 de marzo de 1992, en una defensa desusa da de su proyecto económico de cara a sus correligionarios prifistas, el presidente redefinió la ideología del partido, no tanto para clarificar posiciones o abrir un debate al interior del mismo sino para marcar una línea clara y señalar quiénes son los enemigos del régimen.

El texto ubicaba a los dos grandes enemigos ideológicos-políticos del México salinista: el estatismo absorbente y el neo liberalismo posesivo. Quienes enarbolaban el primero constitu yen los nuevos reaccionarios. Quienes abogan por el neolibera lismo simplemente no comparten la tradición revolucionaria mexi cana. Citando a Reyes Heróles, Carlos Salinas de Gortari habló de una tercera vía: el liberalismo social, arraigado en el libe ralismo triunfante del siglo pasado.

Según sus propias palabras:

"La filosofía de nuestras prácticas es el liberalismo social, de hondas raíces en nuestra historia y con plena vigencia pra el presente y para el futuro. Establezcamos con claridad - cómo fortalecer los principios del liberalismo social mexicano

y su profunda diferencia con la otras dos propuestas ideológicas". 17)

Utilizando el sistema de la definición por diferenciación, Carlos Salinas de Gortari estableció 10 grandes temas que abarcan el ideario del liberalismo social y lo confrontó con los nuevos reaccionarios y con los neoliberales: soberanía, estado, justicia social, libertades, democracia, educación, campo, indígenas, alimentación, vivienda, salud y calidad de vida, y el nacionalismo.

La pretensión era grande y se quedó a la mitad del camino. Como si fuera un decálogo doctrinal mezclado con texto propagandístico, Carlos Salinas de Gortari estableció en cada uno de estos temas la posición del liberalismo social. Lo mismo utilizó argumentos de filosofía política que razonamientos más parecidos a un programa de gobierno que a un texto ideológico, o adquirió el tono de una declaración de principios y en no pocas líneas fue un compendio de todas las palabras claves del régimen: modernización, solidarismo, reforma de la revolución, etc.

Por ejemplo, al abordar el tema del Estado, Carlos Salinas de Gortari descartó a los neoliberales porque colocan al Estado en un tamaño y responsabilidades mínimas, al margen de la vida nacional, indiferente a las diferencias y a las distancias entre

17) REYES HEROLEZ, Jesús. El Liberalismo Mexicano. 29a. ed., Edit. F.C.E., México, D. F., 1979. Pág. 115.

opulencia y miseria, mientras que los nuevos reaccionarios quisieran ver regresar al Estado excesivamente propietario, expansivo, con una burocracia creciente, erígida en actor casi único de la vida nacional.

En cambio, el liberalismo social promueve un Estado solidario, comprometido con la justicia social, trabajando siempre - dentro del régimen de derecho, conduciendo el cambio en el marco de la ley y manteniendo la estricta vigencia y protección de los derechos humanos.

En el ámbito económico el liberalismo social asume que el mercado sin regulación del Estado fomenta el monopolio, extrema la injusticia y acaba por cancelar el propio crecimiento. El liberalismo social propone un Estado promotor, que aliente la iniciativa pero con la capacidad para regular con firmeza las actividades económicas y evitar así que los pocos abusen de los muchos.

Al abordar el tema de la democracia fue claro el interés - por describir conductas y no ideas de los adversarios. Así, los neoliberales tienen un modelo de democracia que sólo considera al individuo aislado y no en formas de organización, mientras - que para los nuevos reaccionarios, la democracia supuestamente es respeto al voto, pero es creíble sólo cuando ellos ganan.

Repitiendo casi textualmente las palabras constitucionales, Carlos Salinas de Gortari establece que para el liberalismo so

cial la democracia es estructura jurídica y régimen político - que obliga al Estado a respetar el voto es también un sistema - de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo la democracia empieza en lo electoral, pero no se agota ahí.

"Carlos Salinas de Gortari salió al paso de sus críticos y, de paso, reivindicó al Pronasol. Al hablar de la justicia social, el presidente recalcó que para el liberalismo social la - justicia es un objetivo para el que hay que trabajar deliberadamente. Es un compromiso explícito que tiene que promoverse al mismo tiempo que se auspicie el crecimiento y la estabilidad. - Este es el objetivo de Solidaridad y de los programas sociales que han desarrollado los gobiernos de la República".¹⁸⁾

Igualmente, al tratar el tema de la soberanía, Carlos Salinas de Gortari salió al paso de las críticas para justificar el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio. Según el mandatario, sólo la propuesta del liberalismo social fortalece nuestra soberanía. Mayor interrelación económica no incluye, ni permitiremos que incluya, la integración política.

El summum del discurso se alcanzó con otro de los términos recurrentes en el ideario priísta: el nacionalismo.

18) CARPIZO, Jorge. El Presidencialismo Mexicano. 15a. ed., - Edit. Siglo XXI. México, D. F., 1978. Pág. 53.

Nuestro liberalismo social propone un nacionalismo para el fin de este siglo y para el siglo XXI; uno que conserva el sentido histórico, del que carecen los neoliberales, pero no se ata a procedimientos del pasado, compuesto por políticas públicas, hoy inoperantes, como lo hacen los nuevos reaccionarios; - rechaza las versiones que asociaron nacionalismo con estados excluyentes y opresores, tanto como a los que sirvieron hoy de bandera a regionalismos que dividen y desintegran.

Por supuesto, nunca aclaró quiénes eran los neoliberales y quiénes los nuevos reaccionarios y de dónde se deducía que ellos pensarán así. El presidente habló hasta por sus enemigos.

Después del discurso, la cargada intelectual del priismo - se dedicó a recuperar y reelaborar las tesis del liberalismo social.

Así, Sergio Martínez Chavarría consideró sin ambages que el liberalismo social es un llamado a cerrar filas en torno al proyecto salinista que, como se ve, no tiene la intención de concluir con el sexenio. Por su lado, Luis Gil Villegas consideró que a diferencia del nacionalismo revolucionario, el liberalismo social no es excluyente y tiene una extraordinaria sonoridad civilizatoria. Para no quedarse atrás en la lambisconería, Francisco Gil Villegas criticó a quienes consideran que México debe ser una democracia sin adjetivos y dijo que la nuestra tiene adjetivos claros que deben ser fortalecidos: se trata de una democracia liberal y social.

En el elogio desmedido, nunca quedó claro si el discurso - del 4 de marzo definió la ideología priísta o la ideología del salinismo. Para las plumas priístas ambas cosas eran lo mismo, refrendando de esta forma la preeminencia de la línea presidencial.

El nuevo bautizo ideológico adquirió rango de consenso partidista. En el Acuerdo de Querétaro, suscrito por dirigentes y legisladores priístas el 18 y 19 de septiembre de 1992, se nabló del Partido Revolucionario Institucional como el partido del liberalismo social y consideraron que con este bagaje doctrinario que vamos a arraigar y a sistematizar, impulsaremos el cambio de nuestro partido.

De esta forma, la nueva consigna salinista se impuso sin recato y sin cuestionamiento de por medio. Poco importó que - existieran innumerables contradicciones y no pocas violaciones estatutarias:

1. El término de liberalismo social nunca apareció en ninguna de las declaraciones de principios del Partido Revolucionario Institucional. Mucho menos en la que surgió de la XIV Asamblea de 1990. De acuerdo con esa Declaración de Principios, - aprobada por la mayoría de los delegados presentes, el Partido Revolucionario Institucional se autodefine como un partido político de ciudadanos, organizaciones sociales y sectores, el nuestro tiene carácter nacional, popular y democrático. En el punto II sobre Nuestros Valores Fundamentales, el Partido Revolucio

nario Institucional señala que refrenda los valores que han orientado y dan sentido a las luchas históricas de la nación y se define como un partido de nacionalismo revolucionario y democrático, portavoz de un nacionalismo activo sin hostilidades ni exclusivismos.

"Incluso, contra la definición de Estado solidario, el Partido Revolucionario Institucional habla en su declaración de la defensa del Estado Social de Derecho. También le pone un adjetivo al modelo económico: En el marco de una economía mixta - sustentada en la regularización constitucional del derecho de propiedad y en la cual hay iniciativa social, pública y privada, corresponde al Estado en su función rectora orientar el desarrollo económico hacia el reforzamiento de la soberanía nacional, el crecimiento estable y sostenido, y la mejor distribución del ingreso".¹⁹⁾

El discurso presidencial del 4 de marzo no mencionó siquiera el modelo económico a seguir. De hecho, Carlos Salinas de Gortari nunca entró al terreno de la redefinición del modelo económico por el cual aboga su partido.

2. El documento era, ante todo, un texto con motivo del aniversario priísta. Lo mínimo que se esperaba era un revaloración presidencial de sus propias propuestas democratizadoras pa

19) CARRILLO FLORES, Antonio. La Constitución y los Derechos Humanos. 4a. ed., Edit. Porrúa, S. A., México, D. F. 1995 Págs. 94.

ra el partido y, específicamente, de las dos cuestiones señaladas por Carlos Salinas de Gortari en 1990 como fundamentales para la modernización del partido: la democracia interna y la relación del Partido Revolucionario Institucional con el gobierno.

Ambas cuestiones fueron eludidas o, mejor dicho, presentadas como un agenda reformadora superada. Aunque Carlos Salinas de Gortari mencionó que la modernización del partido no está -concluida, en la parte final de su discurso, recalcó que el Partido Revolucionario Institucional es el partido democráticamente en el poder que ha construido verdaderas estructuras para la competencia electoral, que se ha renovado para ganar democráticamente el poder y también para ejercerlo, y, en definitiva, que ha dejado de ser el partido casi único.

La consigna del liberalismo social dió como un hecho que el partido avanzaba exitosamente hacia cuarta reforma histórica y que ya no era un apéndice gubernamental. Para llegar a esta conclusión, al presidente no le importó la obvia contradicción de que el nuevo ideario partidista proviniera justamente del poder ante el cual el Partido Revolucionario Institucional debía marcar su distancia.

3. En las entrelíneas del discurso presidencial se reafirmó la vocación excluyente y totalizadora del régimen mexicano. Aunque Carlos Salinas de Gortari mencionó la existencia de dos corrientes antagónicas a nivel nacional, a ambas las anuló como opciones políticas y afirmó sin ambages que el Partido Revolu-

cionario Institucional es un partido que, sin sectarismos, da cabida a todas las expresiones nacionales.

La vaguedad del discurso no sólo hizo pensar que los destinatarios de las críticas fueran militantes del PAN o del PRD sino los propios priístas. De aquí el carácter admonitorio de las palabras y el llamado claro a cerrar filas en torno al proyecto presidencial.

C. LAS PROPUESTAS DE CONTENIDO

Después del discurso del 4 de marzo de 1992 el aparato oficial se puso en marcha para reafirmar plenamente el control presidencial sobre el partido. De esta forma, se realizó una asamblea de trámite para cambiar la dirigencia y anunciar el operativo más caro del salinismo hacia el Partido Revolucionario Institucional: la refundación estructural.

Sin que mediara convocatoria amplia de por medio y teniendo como objetivo exclusivo el relevo de la dirigencia, el 14 de mayo de 1992 Genaro Borrego asumió la nueva presidencia del CEN ante poco más de 4 mil priístas, entre delegados, acarreados, e invitados especiales que por unanimidad lo eligieron.

En realidad, el evento únicamente culminaba una decisión -

tomada semanas antes desde la presidencia e impuesta sin mayor trámite al partido y anunciaba la llamada refundación estructural del Partido Revolucionario Institucional una operación re- corporativizadora originada en Los Pinos.

La gira proselitista de Borrego días antes de asumir la di- rección del Partido Revolucionario Institucional fue un recorri- do alrededor del elogio desmedido hacia el presidente.

En una gira por Pachuca, el 22 de abril, Borrego arengó an- te sus correligionarios: Vamos a recorrer, con la ideología del liberalismo social, el nuevo tramo de esperanza y de confianza que ha abierto el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien - tiene el sólido respaldo de su pueblo y la comprometida lealtad del partido. En el mismo tono, en Monterrey reconoció el 26 de abril que Carlos Salinas de Gortari emprende la reforma de la - revolución y por eso nosotros vamos a seguir, a profundizar, la reforma del partido. Contribuyamos a la reforma de la revolu- ción que encabeza con dignidad, con firmeza y con visión histó- rica el presidente Carlos Salinas de Gortari.

Como en estos eventos, en otros Borrego no se midió en ala- banzas al presidente. En Tuxtla Gutiérrez, habló del acrisola- do patriotismo de Carlos Salinas de Gortari:; en Cuernavaca ur- gió a los priístas a respaldar la reforma que con patriotismo - encabeza el presidente.

Ni una sola palabra para referirse a los acuerdos de la -

XIV Asamblea Nacional. En menos de dos años se había olvidado a la asamblea histórica del partido, ya no se pedía que hablaran las bases ni que se alentara la participación interna. Simple y llanamente se llamaba a cerrar filas en torno al presidente, como en las mejores épocas de docilidad del Partido Revolucionario Institucional ante el Ejecutivo.

Sin embargo, Borrego tampoco llegaba como un líder fortalecido ni con todas las amarras para poder dirigir el partido.

En principio, el ex gobernador zacatecano no tenía mayor carrera de partido que su paso como mandatario de una entidad a la cual gobernó dejando una buena cantidad de denuncias sobre presuntos desvíos de fondos del erario público.

Con 43 años de edad, Borrego también rompió con el parámetro de dirigentes priístas que se formaron en las instituciones académicas públicas. Como su compañero y amigo Emilio Gamboa - Patrón, Borrego se formó en la Universidad Iberoamericana. Tuvo una carrera más ligada al ámbito tecnocrático que al político y formó parte de la bautizada familia feliz del sexenio de Miguel de la Madrid.

Su nuevo equipo tampoco denotaba fortaleza política. Más bien revelaba ser un cuadro dirigente subordinado a la presidencia. En el lugar de Rafael Rodríguez Barrera, secretario general del partido se nombró a la exgobernadora de Taxcala, Beatriz Paredes con atribuciones más amplias que sus antecesores. A En

rique Jackson Ramírez se le colocó como secretario de Organización, José Murat fue nombrado secretario de Gestión Social, a Miguel Alemán, estrenado como funcionario priísta, le dieron la cartera de Finanzas, Eduardo García Puebla fue el nuevo jefe de Prensa y Propaganda. Todos ellos desligados políticamente de Borrego.

Entre las únicas personas de su entorno que fueron incorporadas a la dirección priísta se encontraban Javier López Moreno; su secretario particular Sergio Martínez Chavarría y Sergio Candelas, quien se hizo cargo de las publicaciones del partido.

Los únicos que repitieron del equipo colosista en los puestos claves del CEN priísta fueron César Augusto Santiago, como secretario de Acción Electoral y Roberta Lajous, ratificada en la Secretaría de Asuntos Internacionales.

Con este equipo heterogéneo Borrego asumió la dirección del partido y, desde su primer discurso anunció lo que a muchos priístas sorprendió y a otros les pareció como una entelequia difícil de asimilar; la refundación estructural.

De acuerdo con su discurso, la refundación no supone autodesmantelamientos orgánicos sino la renovación de la estructura sectorial para ampliar y movilizar nuestra estructura territorial, desechar el burocratismo y acercar a los ciudadanos y las nuevas organizaciones que surgen del dinamismo característico de la actual sociedad civil.

Según Borrego, para encarar los nuevos tiempos y tener claridad ideológica ya se tenía al liberalismo social, el cual desde ese evento sustituyó al slogan del nacionalismo revolucionario. No obstante, para sumar pueblo al partido y emprender la reforma estructural se impulsarían a partir de entonces tres grandes movimientos:

- a) La Consolidación del Pacto Obrero-Campesino.
- b) La Creación del Frente Nacional Ciudadano.
- c) La Fundación del Movimiento Popular Territorial.

De acuerdo con su discurso, el Pacto Obrero-Campesino daría nuevo aliento al partido y provocaría que la renovada alianza política entre ambas fuerzas le diera un mayor contenido popular al partido. El pacto tiene como objetivo defender sus reivindicaciones históricas ante las nuevas circunstancias.

En realidad, se colocaba en un solo plano a la CNC y a la CTM, las dos grandes corporaciones priistas que actuaron como dos de los tres pilares corporativos del partido y que ahora se pretendía unir en uno solo.

Borrego no habló de la desaparición de la CNC o de la CTM, simplemente mencionó que el nuevo movimiento campesino surgido de la reforma al artículo 27 constitucional tenía la oportunidad histórica de vincularse con el movimiento obrero para la organización productiva y la superación social.

Aún más, dijo que esta alianza representará una vía para -

lograr equilibrios ante otras fuerzas productivas así como una mejor situación para el diálogo y el desarrollo social al margen de confrontaciones y antagonismos ya superados.

La novedad fue el Frente Nacional Ciudadano creado para encauzar los reclamos ciudadanos de las clases medias con el objetivo de fortalecer las gestiones sociales de las organizaciones ciudadanas que nacen en la nueva sociedad, crear otras que promuevan reivindicaciones ciudadanas y ofrecerles un amplio apoyo para la realización de sus propósitos específicos, motivando su acercamiento.

Según Borrego, no se trata de buscar una militancia tradicional, sino de generar una fuerte identificación ciudadana con el partido, de manera directa y a través de sus propias organizaciones, que lleve a sus integrantes a depositar su confianza y su voto a favor del Partido Revolucionario Institucional al momento de los comicios.

De este Frente se derivarían otras organizaciones como el Foro Nacional de Profesionales y Técnicos para la Modernización Nacional y la Coalición Nacional de Agrupaciones Productivas y de Servicios.

Este nuevo membrete buscaba la plena ciudadanización del partido, tesis que se manejó desde la XIV Asamblea Nacional y que tenía como objetivo incorporar a aquellos contingentes sociales que conformarían nuevas clientelas políticas para el salij

nismo y que no estuvieran en la lógica corporativa tradicional de la CTM y la CNC.

Dentro de esta reestructuración estaban contemplados también los comités de solidaridad formados por Pronasol en toda la República. Para ellos se creó un nuevo membrete que se ubicaba como el heredero de la antigua CNOP, después transformada en UNE-Ciudadanos en Movimiento: el Movimiento Popular Territorial.

De acuerdo con Borrego, en las áreas suburbanas, en los barrios y colonias populares y medias, los ciudadanos disponen - crecientemente de organizaciones que ahora vamos a sumar en torno al Partido Revolucionario Institucional, para dar vida con - liderazgos nuevos y diversas formas de trabajo, al Movimiento - Popular Territorial. Su objetivo será organizar y encauzar sus múltiples reclamos por construir, con su propia participación - comunicativa, mejores condiciones de vida y más elevados niveles de bienestar.

Utilizando una terminología que más recordaba al movimiento maoísta que al priísmo tradicional y que enlazaba perfectamente con los comités de solidaridad, Borrego señaló que el Movimiento Popular Territorial se convertirá así en el gran brazo político y social de los amplios grupos populares; surgido libremente de las organizaciones existentes, creando las que hagan falta y dando vida al Comité Social de Base, trabajará bajo

los colores del partido, inspirado en los propósitos de justicia del liberalismo social.

Con el anuncio de la creación del Frente Nacional de Organizaciones Ciudadanas (FNOC) y del Movimiento Popular Territorial (MPT) se amplió el proyecto original concebido por UNE y, de esta forma, se fortaleció bajo la lógica de la ciudadanización al sector popular del partido, mientras al campesino y al obrero se le restringió a un solo pacto.

UNE, desde 1990, se fraccionó en cinco grandes movimientos; el gremial, el popular, el sindical popular, el urbano popular y el de profesionales técnicos, intelectuales y ciudadanos.

Estos cinco grupos se integraron cada uno con una dirección específica y con autonomía para dirigir su estrategia, pero unificados bajo el membrete de Ciudadanos en Movimiento.

Al final de su largo discurso, Borrego englobó a todos los organismos de la refundación estructural y sintetizó de esta forma los seis grandes retos del partido:

1. Consolidar orgánicamente en el partido el Pacto Obrero-Campesino, para defender sus reivindicaciones históricas ante las nuevas circunstancias.

2. Crear el Frente Nacional de Ciudadanos, para ampliar la representatividad del partido y abanderar las nuevas demandas de la sociedad urbana.

3. Fundar el Movimiento Territorial, para incorporar la fuerza popular a los fines del partido y abrir espacios a los nuevos liderazgos naturales que surgen en la lucha por la calidad de vida.

4. Ampliar las vías de participación organizada de jóvenes y mujeres, para acrecentar la vitalidad y la capacidad de lucha social del partido.

5. Activar la función deliberativa y de promoción ideológica de la Fundación Cambio XXI, para ganar la batalla de las ideas.

6. Fortalecer los consejos políticos como órganos representativos de la dirigencia colegiada y crear en su seno los comités de trabajo permanentes para exigir respuestas al gobierno y analizar las cuestiones nacionales y locales.

Los delegados a la XV Asamblea Nacional Extraordinaria aplaudieron y apoyaron hasta con matracas el anuncio refundacional de Borrego, pero pocos muy pocos entendieron de qué se trataba esta serie de siglas anunciadas por el nuevo ungido presidencial para dirigir el Partido Revolucionario Institucional.

Así, la refundación anunciada por Borrego Estrada constituía la segunda fase de la operación salinista al interior del partido: reducir el peso de las corporaciones tradicional y aterrizar el modelo de un partido ciudadanizado, estructurado territorialmente y que respondiera mejor, en términos de cobertura

ra político-electoral, a las necesidades del régimen.

La idea se manejó desde 1983. Tras la debacle electoral - priísta se demostró que el nudo gordiano de la crisis interna - se localizaba en el anquilosamiento de las tres grandes corporaciones priístas: CTM, CNC y CNOP. Para revertir este modelo se requería una operación profunda de reestructuración.

El veto cetemista impidió que la idea del partido de ciudadanos aterrizara en la XIV Asamblea. La desarticulación del sector campesino obligó a posponer por unos años más su reestructuración. El único de los tres sectores tradicionales que sirvió como experimento del proyecto ciudadanizador fue la CNOP, convertida desde 1990 en UNE-Ciudadanos en Movimiento.

Para mayo de 1992, Carlos Salinas de Gortari consideraba - que estaban dadas las condiciones para dar un viraje radical al modelo de partido heredado del cardenismo. Sus dos estrategias claves eran: el Movimiento Territorial, el cual comenzó a formar comités sociales en toda la República, y el Frente Nacional de Organizaciones Ciudadanas, que pasaría a sustituir a UNE.

Sin embargo, desde su inicio la refundación estructural - fue una operación condenada al fracaso como operativo político sustituto. Entre el veto de los viejos cuadros priístas, la antidemocracia prevaleciente en el partido y el obvio interés de imponer desde el gobierno el modelo de Pronasol al partido, la refundación se convirtió en una verdadera ensalada de membrètes, entendible sólo para los iniciados.

Las características principales de la refundación estructural, posteriormente llamada refundación integral, hablan por sí mismas de los límites de esta estrategia:

1. La Doble Antidemocracia. La refundación fue resultado de una estrategia antidemocrática para acabar con viejas estructuras antidemocráticas. El resultado: un molotov explosivo de organismos corporativos que reclamaban sus cuotas de poder, con frontadas entre sí y sin ningún mecanismo abierto y plural en la toma de decisiones. Coloquialmente los representantes de una y otra corriente adquirieron sus propios mote: los bebesaurios simbolizaban a los nuevos dirigentes corporativos confrontados con los dinosaurios de la vieja guardia.

2. Ausencia de movilización social. A diferencia del modelo cardenista, las nuevas organizaciones ciudadanas que se pretendían convertir en el nuevo pilar del Partido Revolucionario Institucional no eran resultado de una vasta movilización social sino de un proyecto preconcebido en los espacios cerrados de la burocracia gubernamental y partidista. Aún más, mientras menos movilización existiera en torno a la refundación, mejor.

3. Operativo antiestatutario. Abiertamente, el ensayo refundacional violaba los estatutos del propio partido aprobados en la XIV Asamblea Nacional. En su discurso, Borrego pasó por alto los artículos 33, 34 y 35 en donde se estipula la estructura corporativa del partido y se establece que los sectores agrario, obrero y popular son la base de la integración social del

partido. Estos tres sectores fueron sustituidos por el Pacto - Obrero-Campesino, el Frente Nacional de Organizaciones Ciudadanas (FNOC) y el Movimiento Popular Territorial (MT).

4. La confrontación CTM-MT. Desde que se dió a conocer - el proyecto de ciudadanizar la CTM vetó esta estrategia en boca de su propio dirigente Fidel Velázquez. En las negociaciones - previas a la XV Asamblea, la CTM obligó a que se le pusiera el apellido de popular al MT para restringirlo al ámbito de acción de la CNOP-UNE.

Sin embargo, el MT bajo la batuta de Carlos Sobrino, un se nador yucateco ubicado en el entorno colosista, fue penetrando en todas las estructuras: en el sector agrario creó núcleos so ciales; en el sector popular, se convirtió en contraparte de to dos aquellos organismos que no se integraron al FNOC; en el sec tor popular intentó crear sus propias bases clientelares.

La pugna no se resolvió. Llegó hasta la XVI Asamblea Na- cional en donde se aprobó que la Alianza Obrero-Campesina fuera una simple estrategia (art. 33) y se acordó que el sector obre ro y el MT fueran las dos principales fuerzas que integran el - partido (arts. 24, 32, 33, 34 y 61).

Si se analiza paso por paso, la operación refundacional es tuvo plagada de vetos, ineficacias e incapacidades que volvieron a la estructura del Partido Revolucionario Institucional en un elefante blanco.

La UNE fue la primera en resentir los embates. En reunión extraordinaria el 3 de junio de 1992 se aprobó la transformación de UNE en dos vertientes: el Movimiento Popular Territorial y el Frente Nacional de Organizaciones Ciudadanas.

La dirigente Silvia Hernández justificó la transformación señalando que esta obedecía al cambio demográfico de la población en los últimos 60 años que había alterado la composición social de los mexicanos. Este es un país con una clase media sólida que ocupa la mitad de la población, afirmó.

Más de un mes después, se inauguró formalmente la FNOC como heredera directa de UNE. En los meses siguientes se operó el desmantelamiento del sector popular tradicional. El 21 de enero de 1993 se aprobó la creación del Foro Nacional de Profesionales y Técnicos, encabezado por Miguel Limón Rojas, en la ciudad de Aguascalientes. El 27 de enero del mismo año se fundó en Pachuca el Movimiento Nacional Sindical, integrado por los burócratas de la FTSE y los maestros del SNTE, dirigido por Carlos Jiménez Macías. Tres días después se aprobó en Tlaxcala la Coalición Nacional de Agrupaciones Productivas, dirigida por Juan Salgado Brito.

En otras palabras, se desglosaron en diferentes sectores los antiguos miembros del sector popular, pero nunca quedó claro si cada uno se manejaría por su cuenta o estaban integrados como tales al FNOC o a la UNE.

Las críticas vinieron de los propios miembros de la ex CNOP.

Arturo Oropeza, cinco veces miembro del CEN de la CNOP, declaró que desde 1988 el sector popular demostró su desorganización, y la senadora Silvia Hernández acabó de hundirlo. No tuvo poder de convocatoria ni rumbo político. UNE dejó de representar los intereses gremiales de sus afiliados, porque dejó de defender a los habitantes de las colonias populares, a los pequeños propietarios, a los transportistas, a los profesionistas, a los billetes y a los aseadores de calzado.

En realidad, el sector popular no sólo perdió el perfil de su clientela tradicional sino que intentó crear otro sin consolidar ningún modelo territorial plenamente articulado. En la mayoría de los estados donde se formaron los anteriores organismos, éstos fueron resultado más bien de un reacomodo de las burocracias políticas que de un auténtico esfuerzo de reorganizar las bases partidistas.

La CTM, ante el embate, rechazó desarticularse para dar paso al Pacto Obrero-Campesino. En un documento interno filtrado a la prensa, la CTM pidió que se mantenga un criterio permanente de respeto al sector obrero, puesto que una actitud en contrario puede reflejarse en la unidad sindical, que como es sabido, provocaría dispersión, división y debilitamiento de las fuerzas caracterizadas con los objetivos emancipadores de México.

En ese mismo documento, la CTM reclamó que los procesos de conformación de la FNOC y del MT no afecten la estructura estatutaria del partido, no sobreponga formas de organización sobre

otras ya constituidas, y lo que es más importante, no sean un factor promocional de crear órganos o agrupaciones paralelas que en la disputa de la representatividad, pudieran provocar un efecto contrario a lo que entendemos se busca, que es la suma y la unidad.

En realidad, la refundación cumplió paso por paso las advertencias de la CTM: afectó el modelo de partido al margen de los estatutos, sobrepuso organizaciones sin delimitar un perfil claro y constituyó una especie de partido paralelo conformado por los nuevos movimientos creados al calor de la refundación.

"En otros sectores, como el agrario, la división entre las centrales integrantes del partido se agudizó. La CNC, bajo el mando de Hugo Andrés Araujo, un viejo militante de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Autónomas (UNORCA), operó la salinización del sector campesino y confrontó a la central con otros grupos priistas integrados también dentro del grupo campesino: fueron los casos de la Central Campesina Independiente, el Consejo Agrario Mexicano, la Unión General de Obreros y Campesinos de México y Antorcha Campesina que se quejaron de discriminación en el reparto de cargos y puestos de elección popular. Pese al descontento en la CTM y la línea confusa en el sector agrario, ambas corporaciones tuvieron que cumplir con el mandato salinista: el 23 de junio de 1992 firmaron como alianza

obrero-campesina el acuerdo de productividad impulsado desde el gobierno". 20)

Por su parte, el Movimiento Territorial, con o sin el apellido de popular, desde mayo de 1992 hasta febrero de 1993, se va articulando y formando comités sociales de base, a la usanza del modelo maoísta de partido, para quedar finalmente constituido el 15 de febrero de 1993.

Con el MT se buscaba crear una instancia territorial para crear liderazgos externos a las comunidades que canalizaran la participación promovida por Pronasol al Partido Revolucionario Institucional. Es decir, intentó recuperar los espacios perdidos por el Partido Revolucionario Institucional después de años de cacicazgos que, sostenidos por el partido, dejaron de ser efectivos y fracturaron la interlocución con los diferentes sectores sociales.

Esquemáticamente, se pueden ubicar 5 aspectos básicos que buscaba llenar el MT:

1. Crear liderazgos internos que capitalicen la gestión de obras públicas realizadas a través de Pronasol y que paulatinamente vayan sustituyendo a los viejos caciques corporativos del Partido Revolucionario Institucional.

20) CASSIER, Hernesto. El Mito del Estado. 16a. ed., Edit. - F.C.E., México, D. F., 1991. Pág. 132.

2. Canalizar la participación de estos nuevos liderazgos a través de los comités sociales de base que sustituyan a los viejos comités seccionales.

3. Con estos comités sociales de base reconstruir territorialmente al partido. A través de ellos se pretende incorporar a los grupos sociales que nunca fueron absorbidos al Partido Revolucionario Institucional a través de la idea sectorial.

4. Impulsar nuevas prácticas políticas como el asambleísmo reformado.

5. Con esta nueva estructura territorial se pretende re-corporativizar al partido solucionando el problema de la presencia regional y la representatividad sociales.

Todas estas ideas ya estaban plasmadas desde que Carlos Salinas de Gortari hiciera su tesis Promoción y Participación Política en el Campo, en donde establece que a través de una nueva política que impulse la gestión y autogestión se pueden crear nuevos apoyos políticos al sistema.

El trabajo del MT fue lento y silencioso: había que acercarse a los nuevos líderes, pero sin enfrentarse abiertamente con los dinosaurios del viejo modelo.

De acuerdo con las propias cifras del MT, en febrero de 1993 ya se habían creado 9,693 comités sociales de base en toda la República. El gobierno y la dirigencia de Borrego pensaron

que la estrategia ya estaba madura como para darla a conocer.

En el evento de creación del MT, Borrego se abrió de capa contra el viejo corporativismo indicando: No vamos a seguir con sintiendo a autoridades insensibles, que se refugien atrás de los escritorios o en el aislamiento, desdeñando las legítimas demandas de la gente.

No obstante, el destape del MT fue forzado y se produjo an tes de tiempo, generando una airada reacción de los sectores tradicionales, particularmente de la CTM. La disputa llegaría hasta la XVI Asamblea Nacional.

CAPITULO CUARTO

LA PROBLEMATICA PARTIDISTA DENTRO DEL ESTADO MEXICANO

- A. SU INICIO
- B. SU CONTENIDO
- C. SUS METODOS DE ESTRUCTURACION
- D. LA PROBLEMATICA ESTATAL DEL ASPECTO POLITICO DE MEXICO
- E. EL CAMBIO POLITICO ENTRE EL PARTIDO OFICIAL Y EL PODER EJECUTIVO EN LA ACTUALIDAD.

A. SU INICIO

El año de 1993 marcaba grandes retos para el priísmo salinista: preparar el terreno para la sucesión presidencial, formalizar la refundación estructural del partido para que entrara en acción durante la campaña electoral de 1994 y garantizar la disciplina y cohesión en el seno de las filas del partido oficial.

En cada uno de estos temas, el priísmo se encontraba polarizado. Sin duda, el futurismo en torno a la sucesión presidencial era el detonador principal. Varios movimientos al interior del gabinete indicaban pistas sobre una lucha adelantada por la candidatura priísta. En el escenario, ya se habían perfilado tres precandidatos: el ex dirigente priísta y entonces poderoso secretario de Desarrollo Social, Luis Donald Colosio; el regente capitalino Manuel Camacho Solís; y el titular de Hacienda, Pedro Aspe Armella. Los tres, miembros del cerrado grupo salinista. Los tres, con correas de transmisión dentro del priísmo.

Por el lado de la refundación estructural, la tensión entre los viejos liderazgos y los dirigentes emergentes de las nuevas organizaciones iba creciendo. A la batuta de los llamados dinosaurios se encontraba Fidel Velázquez, quien no perdía oportunidad para criticar a los nuevos organismos priístas.

Por su lado, el Movimiento Territorial hacía sus propias -

cuentas alegres. El 1 de febrero de 1993 anunció que antes de las elecciones federales de 1994 incorporaría a más de dos millones de militantes activos.

Sin contar con una carta de identidad dentro de los estatutos priistas, el MT anunció en aquella ocasión que en vías a la XVI Asamblea Nacional, la estructura básica del partido serían los comités sociales de base que acabarían sustituyendo a los comités seccionales.

Se anunció que existían ya 8,700 comités sociales integrados con 50 personas como mínimo, identificadas territorialmente. Los comités de solidaridad serían uno de los puntos de enlace de los comités sociales, ya que a través de ellos se canalizarían las demandas ciudadanas.

Para la asamblea constitutiva del MT, el 12 de febrero de 1994 se tendría ya plenamente incorporados a los nuevos comités en la estrategia de solidarización del Partido Revolucionario Institucional.

Por su parte, UNE consumió su transformación el 1 de febrero erigiéndose en Frente Nacional de Organizaciones Ciudadanas (FNOC) y se ratificó a Silvia Hernández para seguir al frente. Como conjurando acusaciones, Hernández anunció en esa ocasión - que no se había dado un solo paso que no esté estrictamente apegado a derecho, es decir, a nuestros estatutos.

"Días después, Silvia Hernández fue sustituida al frente -

del nuevo y heterogéneo sector popular priísta por el ex gobernador de Aguascalientes, Miguel Angel Barberena. El relevo fue un indicador de los reacomodos que se sucedieron al interior de la dirigencia sectorial priísta. Algunos miembros se quejaron del paulatino desplazamiento de Manuel Jiménez Guzmán".²¹⁾

En el MT también se registraron cambios que indicaron el arribo de una nueva camada de líderes sectoriales. El dirigente cenopista, José Parceró López, quien contaba con más de 30 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional - fue sustituido por el senador yucateco Carlos Sobrino Sierra.

En este contexto de reacomodos y negociaciones, detonó un escándalo que habría de costarle la dirigencia a Genaro Borrego: la famosa cena secreta de colecta multimillonaria con 25 prominentes hombres de negocios, con la presencia del presidente Carlos Salinas de Gortari.

"Uno de los problemas centrales de la dependencia del Partido Revolucionario Institucional hacia el aparato gubernamental ha sido tradicionalmente la dependencia económica hacia los fondos provenientes de las oficinas públicas".²²⁾

De hecho, desde su nacimiento las finanzas del partido ofi

21) COSIO VILLEGAS, Daniel. Op. Cit. Pág. 61.

22) CORDOVA, Arnaldo. Op. Cit., Pág. 68.

cial han dependido siempre de los recursos del erario. Emilio Portes Gil, 14 meses después de creado el PNR, ordenó una contribución forzosa de la burocracia para sostener el partido. Mediante decreto, Portes Gil estableció el 25 de enero de 1930 - que todo el personal civil de la administración pública dependiente del Poder Ejecutivo Federal contribuya con 7 días de su sueldo durante cada año, correspondiente a los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Es decir, los meses que tuvieran 31 días, de ahí que el dirigente de la CROM, Luis N. Morones, bautizara al PNR como partido del 31.

A la contribución forzosa de la burocracia se agregaron las cooperaciones voluntarias de los caciques regionales. Nunca se informó públicamente a cuánto ascendía el monto de las contribuciones. De modo que, desde su origen, las finanzas del partido oficial tuvieron como característica principal su discrecionalidad.

Si bien Cárdenas suspendió en 1937 las donaciones forzosas de la burocracia, cuando el PNR se transformó en PRM, ello no evitó que el gobierno federal y las administraciones estatales continuaran alimentando las arcas del partido con los recursos públicos.

De esta forma, las finanzas priistas adquirieron tres características básicas: discrecionales, corporativas y provenientes del desvío de fondos públicos. Estas tres vías se consolidaron cuando el partido adoptó las siglas del Partido Revolucionario Institucional.

En el sexenio de las privatizaciones, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ya había puesto entre sus objetivos para la reforma priísta incrementar los recursos privados que alimenten el partido.

El propósito respondía a una tendencia observada en la campaña electoral de 1988. Durante ese lapso, se supo que un grupo de poderosos empresarios donaron grandes cantidades para la campaña de Carlos Salinas de Gortari. Entre la lista de donantes figuraron Carlos Slim, Pablo Brener, Antonio Madero Bracho, Ernesto Rubio del Cueto, Carlos Peralta Quintero, Angel Borja Navarrete y Pablo Alvarez Treviño. En otras palabras, constituían el núcleo de los empresarios beneficiados posteriormente con la estrategia privatizadora.

La intención de establecer lazos con la iniciativa privada se personalizó con los responsables de Finanzas en el CEN colosista y borreguista. Tanto Alfredo Baranda, ex gobernador mexicano, como Miguel Alemán, accionista del consorcio Televisa, respondían a un perfil empresarial y ambos insistieron en las donaciones privadas.

Baranda declaró, por ejemplo, que en algunas elecciones estatales, como las de Sonora y Querétaro, los hombres de negocios contribuyeron con unos 17 mil millones de pesos al financiamiento del partido. Incluso, antes de cederle el puesto a Alemán, señaló que buscaría donaciones de empresarios por unos 6,500 millones de pesos para lograr desvincular la salud financiera del partido de los presupuestos del Estado.

"Con Alemán se desempolvó el proyecto de crear empresas del partido y se planteó profundizar el acercamiento con los representantes del empresariado, de modo que éstos tengan un nuevo papel dentro del partido. Otras estrategias incluyeron la venta de casas donadas por el sector privado".²³⁾

Incluso, en el sector popular se habló de la posibilidad de crear un banco de servicios para ofrecerlos a través de un portafolio de negocios a los micros y pequeños empresarios.

Cuando se ventilaron estos proyectos, surgieron tímidas voces de alerta. El ex secretario de Finanzas y senador campechano, Carlos Sales, advirtió del riesgo que se crearan compromisos políticos con los integrantes de los comités de financiamiento privado. Sugirió establecer un límite máximo a las aportaciones que los militantes pueden hacer directamente a los candidatos para evitar cualquier interpretación o intención de valorar en términos políticos una entrega económica, declaró Sales en marzo de 1992.

El propio Genaro Borrego pareció sumarse a esta demanda. En una reunión del Foro Nacional de Profesionales y Técnicos expresó que una de las cinco prioridades de la reforma priísta sería la transparencia plena del financiamiento.

23) REYES TAYABAS, Jorge. Bases para el Estudio del Estado. - 4a. ed., Edit. Impresiones Quali. México, D. F., 1989. - Pág. 80.

Sin embargo, más allá de estas declaraciones, la tendencia real indicaba que el Partido Revolucionario Institucional de la era de Carlos Salinas de Gortari buscaba convertirse en una nueva instancia para establecer alianzas con los empresarios reviviéndose el viejo debate sobre el famoso cuarto sector priísta.

El intento de consolidar el apoyo empresarial se reflejó en candidaturas estatales. Esa fue una de las razones de la designación de Eduardo Villaseñor, accionista de Banamex, y de Jesús Macías, ligado al grupo de Eloy Vallina, como candidatos priístas a las gubernaturas de Michoacán y Chihuahua, respectivamente.

La urgencia de buscar el respaldo empresarial constituyó también parte de una estrategia para recuperar el terreno perdido frente al avance del PAN, partido que desde la incorporación de Manuel J. Clouthier comenzó a atraer a un sector importante del empresariado del país.

La discrecionalidad de las donaciones privadas constituía el rasgo principal de este fenómeno. La nueva ley electoral aprobada en 1990 mantuvo la misma lógica de asignación de recursos públicos establecida en 1977, es decir, no estableció ningún principio de financiamiento transparente para los partidos políticos ni consagró disposiciones que impidiesen la violación de la regla democrática que establece que un partido no podría gastar más recursos que otros ni apoyarse en la estructura y dinero públicos para respaldar a sus candidatos.

En medio de este contexto, detonó un verdadero escándalo - que, a la postre, le costaría la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional a Borrego y polarizaría más la situación al interior del partido: la famosa cena secreta con 25 selectos hombres de negocios, a la cual asistió el presidente Carlos Salinas de Gortari.

La cena se convirtió en escándalo precisamente cuando dejó de ser secreta. Una información filtrada a la prensa reveló - que la noche del 23 de febrero de 1993 se realizó una exclusiva cena en la casa del padrino económico y tutor de Carlos Salinas de Gortari, el ex secretario de Hacienda, Antonio Ortíz Mena, - con la presencia de Borrego y del propio Carlos Salinas de Gortari.

A la cena asistió la cúpula de la iniciativa privada, con Emilio Azcárraga en la avanzada. Estos se comprometieron a do nar 25 millones de dólares cada uno para financiar las campañas electorales del partido oficial. Entre los donantes se encontraban grandes beneficiarios de la estrategia privatizadora y - no pocos repetidores de la lista que aportó recursos en 1-88: - Carlos Slim, dueño de Telmex; Roberto Hernández, principal accionista de Bancomer; Jerónimo Arango, cabeza del grupo comercial Cifra; Bernardo Garza Sada y Adrián Sada Treviño, represen tantes del mítico Grupo Monterrey; Eugenio Garza Laguerá, presi dente del Grupo Financiero Bancomer.

De estos empresarios ninguno se ostentó antes como militante

te o simpatizante del Partido Revolucionario Institucional. Ni siquiera Carlos Hank Rohn, el hijo del famoso ex gobernador mexicano. De lo que sí hicieron presunción fue de su estrecha relación con el presidente, como el comprador de la paraestatal Dina, Claudio X. González.

Al darse a conocer la noticia, fue tal el revuelo dentro y fuera del partido que el propio Borrego tuvo que recular. Los dirigentes visibles del aparato priísta dijeron hasta lo impensable para salvar del escándalo a Carlos Salinas de Gortari, como fue el caso del líder de la mayoría tricolor en el Congreso, Fernando Ortíz Arana, quien negó que Carlos Salinas de Gortari haya pasado la charola en esa cena.

El propio Ortíz Mena reconoció ante un grupo de reporteros el 3 de marzo que la cena celebrada en su casa tuvo como objetivo garantizarle a los empresarios que sus donaciones al Partido Revolucionario Institucional les reeditaría en seguridad para sus negocios.

No le faltó también candor al ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando afirmó que las aportaciones al Partido Revolucionario Institucional no les daría a los donantes un trato político especial, distinto al de cualquier militante.

La maniobra destapada por la prensa creó un serio malestar dentro y fuera de las filas priístas por varias razones:

1. La presencia de Carlos Salinas de Gortari en la cena - representaba una obvia presión del poder presidencial que nuevamente actuaba en su doble papel de titular del Ejecutivo y cabeza del Partido Revolucionario Institucional. Nunca hubo una explicación pública por parte del presidente que diera alguna razón válida para justificar su presencia en ese evento.

2. Por encima de cualquier reglamentación estatutaria, Ortiz Mena les propuso a los empresarios donar 25 millones de dólares para inyectar los recursos del partido oficial. Un solo donante que aportara tal cantidad iba a triplicar lo que el Instituto Federal Electoral destinó durante todo un semestre en recursos públicos a los siete partidos políticos nacionales.

En otras palabras, se trataba no de una donación graciosa sino de una virtual para-venta del partido a un núcleo muy selecto de inversionistas.

3. Genaro Borrego actuaba no como el líder formal priísta sino como un eslabón entre el presidente y la cúpula empresarial. El no aclaró qué iba a dar a cambio el Partido Revolucionario - Institucional para darles seguridad a los donantes. La impresión generalizada era que, así como se privatizaban paraestatales económicas, el Revolucionario Institucional, la gran paraestatal política, estaba en proceso de desincorporación y Borrego era su agente de ventas.

4. Reveló una profunda incongruencia en el gobierno salinista. Todavía en su IV Informe de gobierno Carlos Salinas de

Gortari propuso como uno de los tres puntos torales de la nueva reforma electoral hacer transparente el origen del financiamiento de los partidos; poner topes a los costos de las campañas electorales y trabajar en torno a los medios de comunicación y a los procedimientos que garanticen avances en la imparcialidad de los procesos electorales. La cena demostró que no sólo había discrecionalidad sino un profundo vacío legal en torno a los límites de financiamiento privado en los partidos.

5. La cena aceleró el ambiente de guturismo que estaba dominando en los entretelones políticos. En el ocaso de sus gobiernos, los presidentes mexicanos han consultado formal o informalmente a la cúpula privada sobre su última y gran decisión: el nombramiento de su sucesor. No obstante, en ningún caso anterior la consulta estuvo mediada por una colecta al estilo de los grandes clanes sicilianos y de una discusión pública enconada y de persistir en rechazo al activismo discrecional de los empresarios en la sucesión.

B. SU CONTENIDO

Tras el escándalo provocado por la cena con los multimillonarios, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional fue obligado a rectificar de cara a sus correligionarios y

el presidente de la República a ordenar la independencia del Partido Revolucionario Institucional y del gobierno en un acto que pareció más una reafirmación de la autoridad presidencial sobre el Partido Revolucionario que un deslinde.

El escándalo se empalmó con la celebración del 64 aniversario priísta. En un ambiente tenso, el 4 de marzo los dos únicos oradores fueron Carlos Salinas de Gortari y Genaro Borrego. El primero hizo un recuento de los últimos cambios en el Partido Revolucionario Institucional, destacando la adopción del nuevo slogan ideológico: el liberalismo social, y las nuevas estrategias de refundación estructural adoptadas sin que mediara consulta formal alguna. Nuevamente resaltó la pretensión salinista de presentar al Partido Revolucionario Institucional como un bloque unánime y monolítico frente a la cada vez más pública división.

Carlos Salinas de Gortari resaltó en aquella ocasión: con sus sectores fortalecidos, con su nueva alianza de obreros y campesinos, con su nuevo Frente de Organizaciones, con su nuevo Movimiento Territorial, el Partido Revolucionario Institucional está consolidando una formidable unión de fuerzas para el futuro, que hoy sume más voluntades y sea capaz de ofrecer más y mejores soluciones ahí, donde más se necesita.

Y en el punto más importante de su discurso, Carlos Salinas de Gortari ordenó la independencia del partido.

Con las reformas propuestas; con los hombres y mujeres -

con que cuenta: con su mejores cuadros, un Partido Revolucionario Institucional unido y actualizado seguirá siendo el gran partido de México, ya no partido del gobierno, pero sí la mejor opción para la nación.

Borrego no se quedó atrás. Indicó que el partido no dejará su carácter popular, en una obvia respuesta a las acusaciones de que se pretendía convertirlo en un aparato al servicio del empresariado. El dirigente también aclaró que el partido por ningún motivo adquiriría compromiso con quienes aporten recursos y señaló que sólo se aceptarían contribuciones de sus simpatizantes y sin ninguna condición.

Estamos decididos a fortalecer dicho patrimonio, para de mostrar ante la sociedad nuestra independencia financiera. En ningún caso se dará una vinculación directa entre los aportantes y quienes utilizan los recursos provenientes del fondo en los gastos de campaña.

Pese a la retórica, las fuerzas priístas estaban viviendo un intenso y encarnizado reacomodo en vísperas de la sucesión presidencial.

El escándalo de la cena fue un detonador poderoso que agitó más las aguas. A él se sumó el anuncio de la XVI Asamblea Nacional que buscaba coronar la estrategia de refundación estructural del partido anunciada un año antes.

Borrego a esas alturas era el dirigente priísta con menor

credibilidad y fuerza de todos sus tiempos. El escándalo había marado su suerte y era cuestión de tiempo su relevo. Para aminorar la situación, Borrego rectificó la estrategia para atraer fondos al partido. En una lista de diez puntos, se indicó que bajo ningún concepto se aceptarán aportaciones de empresas, corporaciones anónimas, asociaciones religiosas ni organismos o entidades externas, según el dirigente.

"Esta nueva estrategia ordenaba que sólo se aceptarían aportaciones que no excedieran los mil millones de viejos pesos se pronunció a favor de un cambio legislativo en la materia, prohibió que las aportaciones sean deducibles de impuestos, expresó que el Partido Revolucionario Institucional rendirá ante la autoridad la información referente al financiamiento público electoral y, por ultimo, afirmaba que nunca ha existido ni permitiremos que exista, influencia alguna en la práctica política del partido ni mucho menos derivación en nuestros principios por individuo u organización que aporte a nuestro patrimonio. Ni antes ni ahora el Partido Revolucionario Institucional ha adquirido ni adquirirá compromiso alguno con sus aportantes".²⁴⁾

Este era el clima del debate cuando el Comité Ejecutivo Nacional priísta definió la estrategia para la realización de

24) GONZALEZ URIBE, Héctor. Teoría Política. 39a. ed., Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1994. Pág. 69.

la XVI Asamblea Nacional, anunciada tres meses atrás con el objetivo de formalizar la redundación estructural.

En un documento de 30 cuartillas, el CEN estableció nuevas formas para la elección de dirigentes y candidatos, lineamientos para el financiamiento, reformas a los estatutos para incluir a los nuevos agentes corporativos y un nuevo programa de acción.

El 12 de marzo se hizo público el proyecto y en él se establecían de antemano las líneas principales de lo que algunos ya calificaban como la contrarreforma priísta, debido a la evidente marcha atrás que suponía en cuanto a métodos y contenidos de la XIV Asamblea.

Algunos de los puntos que sustentaban esta apreciación fueron:

1. El tema candente era la elección del candidato presidencial por el método de consulta directa a la base ventilado en 1990. El nuevo proyecto ordenaba que la selección de candidatos sería a través del Consejo Político Nacional en los casos de gobernadores y presidente de la República. Sólo se mantenía el mecanismo de consulta directa para los candidatos a legisladores locales y nacionales, a alcaldes y representantes del Distrito Federal, siempre y cuando así lo acuerde el Consejo Político correspondiente.

De esta forma, se le daba un carácter discrecional y acotado a lo que antes era una regla estatutaria única.

Asimismo, consideraba que es deseable que los estatutos - contengan diversos sistemas democráticos -a partir de la más amplia consulta a la base- que permitan, con flexibilidad y - eficacia política, atender a las variables circunstancias que se presentan en los niveles estatal, distrital y municipal. En otras palabras, daba luz verde a que el dedazo y la designación cupular se volvieran a refrendar. Claro, siempre en atención a la base.

2. Ordenaba que el cambio de dirigentes no coincidiera - con procesos internos para postular candidatos ni con elecciones constitucionales.

3. La Comisión de Estatutos daba a conocer la incorporación plena del Movimiento Territorial como nueva forma de organización, misma que precisará su relación con los consejos políticos y demás órganos de dirección. No obstante, recalca - que el Partido Revolucionario Institucional seguirá siendo un partido de sectores -agrario, obrero y popular- y de ciudadanos integrados a sus respectivas secciones.

4. Se incorpora el liberalismo social como nueva regla - ideológica del partido. En una clara imposición del lenguaje salinista, el documento subraya la eficacia del Pronasol y afirma que el Partido Revolucionario Institucional mantiene los valores de soberanía, libertad, justicia y democracia que condenan históricamente el ideario del liberalismo social, pero ha debido, para cumplirlos en las circunstancias, formular políticas innovadoras.

Junto con este documento se daban a conocer las fechas para la jornada de análisis que incluiría reuniones de trabajo - en Tabasco, Sinaloa, culminado el 21 de marzo.

La cargada en favor de la reforma pronto hizo acto de presencia a través de artículos periodísticos, entrevistas, desplegados, consignas.

Sin embargo, también las voces críticas que veían en esta estrategia una virtual contrarreforma tomaron la palabra.

Julio Hernández López, dirigente del Movimiento para el Cambio Democrático, escribió un artículo periodístico que constituyó un duro balance contra la asamblea convocada:

La décimo sexta Asamblea Nacional priísta se hará de espaldas a las bases del partido, casi a hurtadillas, con mecanismos pensados para anular cualquier discrepancia de fondo y resultados preestablecidos a los que apenas se les dará un barniz de consenso cupular. El camino elegido para desembocar en la nueva reforma priísta ha sido el mismo de las convocatorias internas para elegir candidatos y dirigentes: el miedo al debate genuino, la trampa legaloide, la simulación institucional, el veto de los dirigentes a la participación de las bases.

De esta manera, la reforma o refundación o como se vaya a llamar lo que resulte de la asamblea privatizada que se realizará en Aguascalientes los días 29 y 30, está destinada a dar marcha atrás en los logros -así hayan sido sólo de papel- de

la décimo cuarta Asamblea Nacional y a disolver los principios del priísmo histórico.

El columnista político Carlos Ramírez expresó que la próxima asamblea priísta aprobará el mecanismo ilegal y antiestatutaria con el que se va a reformar o refundar a fondo el Partido Revolucionario Institucional. Pero no hay garantías de que los priístas vayan a votar por el candidato presidencial - que escoja el presidente Carlos Salinas de Gortari para que com pita bajo el escudo del Partido Revolucionario Institucional, y es que no ha negociado antes con las diferentes corrientes - priístas. Por su parte, el politólogo Luis Javier Garrido, es tudioso de los periodos del Partido Revolucionario Institucional, coincidió en calificar de antiestatutarios los cambios - previstos para la XVI Asamblea Nacional y señaló que el mecanismo consagrado por el tricolor para elegir el candidato presidencial es antidemocrático y sorprende que el Instituto Federal Electoral haya aceptado este mecanismo.

En el seno del Partido Revolucionario Institucional, las camarillas políticas buscaban su reacomodo. En la víspera de la Asamblea, el dirigente de la CTM, Fidel Velázquez, advirtió que su central pugnaría por la incorporación de la secretaría de Acción Obrera a la estructura del Comité Ejecutivo Nacional, en una obvia defensa por las parcelas de poder corporativas.

Las corrientes internas del priísmo participarían en forma acotada. El grupo Democracia 2000, dirigido por Ramiro de

la Rosa, sólo contaría con dos delegados, cifra que contrastó con el elevado número de delegados con que contó esta corriente en la XIV Asamblea Nacional.

C. SUS METODOS DE ESTRUCTURACION

Bajo este contexto, el dilema para el gobierno salinista y la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional era muy claro: ¿cómo transitar de la XV Asamblea a la XVI sin tomar en cuenta los acuerdos alcanzados en la XIV Asamblea, aquella que anunció la cuarta reforma histórica del partido y contó con un tímido, pero significativo despertar de las amorfas bases partidistas.

La solución fue la dirección autoritaria de la asamblea. Varios mecanismos destacaban esto:

1. El método utilizado para controlar los debates y restringir cualquier intento de rebelión interna demostró que los pálidos fulgores de 1990 eran sólo sombras en Aguascalientes, sede de la nueva asamblea.

2. El intento de aplicar la estrategia de refundación estructural para convertir al Partido Revolucionario Institucional en una estructura horizontal, territorialmente organizada,

se enfrentó nuevamente al veto corporativo de la CTM, la única que pudo utilizar su poder sectorial para evitar que arrasaran con ella.

3. El proyecto de Estatutos borraba el método de consulta directa a la base como mecanismo rector para la selección de candidatos.

4. El proyecto ideológico incorporaba el liberalismo social, cuando tres años atrás se defendió la identidad del nacionalismo revolucionario como baluarte priísta.

5. Por si fuera poco, Borrego acudía a la asamblea con un nivel ínfimo de consenso. Los rumores sobre su relevo se acrecentaron desde el domingo 28 de marzo, fecha en que iniciaron los trabajos de la asamblea.

En la inauguración del evento, ante unos 2 mil delegados de todo el país, Borrego declaró a sus correligionarios que el partido estaba en pie de guerra para triunfar en agosto de 1994 y para mantenerse en el poder hasta el siglo venidero. Aún más, aseguró ante sus correligionarios que el Partido Revolucionario Institucional haría a un lado las concertaciones - (¿no que no existían?) y no volvería a dar marcha atrás en sus victorias electorales, en una clara alusión a las negociaciones poselectorales que el gobierno salinista puso en marcha con el PAN. Se olvidó subrayar que eso dependía más del propio presidente de la República que del partido.

Nunca más permitiremos desenlaces distintos a los determinados por el pueblo con su voto. Renunciar a nuestros triunfos nos ha debilitado. Lo diré con todas sus letras: el Partido Revolucionario Institucional no cambia para perder, entre nuestras reformas no se incluye la claudicación, nuestra flexibilidad no llega a la componenda, arengó Borrego.

Mientras él intentaba demostrar belicosidad y fortaleza, en los entretelones del poder político se preparaba su relevo. Apenas dos días después de anunciar que el Partido Revolucionario Institucional estaba en pie de guerra, el segundo dirigente nacional priísta en el sexenio fue sustituido por el líder de la fracción legislativa priísta, Fernando Ortíz Arana. Algunos señalaron que era el pago a su encendida defensa al presidente en la tribuna legislativa, días después que se diera a conocer la famosa cena en casa de Ortíz Mena.

El albazo a favor del político queretano constituyó una muestra más de retorno a los métodos más cerrados para elegir a la dirigencia priísta. El senador nayarita y líder de la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Senado Emilio M. González, reconoció sin más que la imposición de Ortíz Arana fue producto de una negociación. Con trabajo, Ramiro de la Rosa intentó arengar ante la asamblea que el relevo constituía un acto injustificado. Tan débil era ya la figura de Borrego que en la asamblea se llegó a rumorar que el relevo sería el exgobernador mexiquense y cabeza del Grupo Atlacomul-

co, Carlos Hank González, mejor conocido como el padrino.

Cuando apenas tres semanas atrás Carlos Salinas de Gortari había afirmado que se acababa la era del partido gubernamental, todos los signos indicaban que desde el gobierno se operó el relevo de Borrego que dió lugar a otros enroques en la administración pública: Borrego se fue a dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras Emilio Gamboa Patrón se incorporó al gabinete como Secretario de Comunicaciones y Transportes, alentando el clima de futurismo político, a su vez, el ex gobernador de Guerrero, Francisco Ruíz Massieu se incorporó al llamado gabinete ampliado como director del Infonavit, mientras María de los Angeles Moreno relevó a Ortiz Arana en la dirección parlamentaria priísta.

Todos estos enroques revelaban dos cosas muy claras:

a) Carlos Salinas de Gortari colocaba en el tablero de las decisiones partidistas a un operador político que le restara margen de conflicto con los llamados dinosaurios y que, a la vez, le garantizara lealtad en la coyuntura sucesoria.

b) Se ampliaba el abanico de precandidatos priístas a la sucesión presidencial y se operaba el control de las instituciones clientelares y gestoras con personalidades cercanas al círculo íntimo salinista.

Ortiz Arana pronto demostró cuál iba a ser su papel real. En su primer mensaje como presidente del CEN del Partido Revo-

lucionario Institucional, pidió calma a la inquietud preelectoral porque no hemos de permitir ansiedades políticas y anunció que el partido escogería al candidato a finales de 1993 o principios de 1994. El resto del discurso de Ortiz Arana abundó - en la docilidad y lealtad hacia el presidente de la República.

El presidente Carlos Salinas de Gortari también fue claro a la hora de dar línea a los priistas. Destacó que existía el riesgo de debilitar al partido a través de nuevos movimientos en la sociedad con los que el partido no tenga comunicación o afinidad y al alejarse de las bases. También se explayó a la hora de fijar metas y recomendar a los priistas, en tono doctrinal, a salir a las calles a hacer política, mucha política y más política.

Sin embargo, la operación de cirugía mayor, la auténtica contrarreforma se dió en el terreno de los distintos puntos de discusión de las cuatro mesas de debate.

Punto por punto, la XVI Asamblea prácticamente suplantó - lo acordado tres años atrás:

1. Estatutos. Los documentos de 1990 señalaban en el artículo 138 que la consulta directa a la base era la principal modalidad para seleccionar a los candidatos priistas en elecciones estatales, distritales y municipales, salvo las excepciones acordadas por el Consejo Político. A raíz de la asamblea de Aguascalientes, la regla se convierte en excepción: -

el Consejo decidirá a partir de entonces los métodos de selección y la consulta directa es tan sólo una más de las posibilidades. De antemano se cierra la posibilidad para que este mecanismo se extienda a nivel de elecciones presidenciales.

La nominación del candidato presidencial se realizará a través de convenciones de delegados electos democráticamente. En 1990, el mandato contemplaba también convenciones abiertas de consulta directa a la base militante (art. 140).

Incluso, meses después de realizada la Asamblea, en un documento comparativo elaborado por grupos priístas y filtrado a la prensa, se reconoce que el dedazo se impuso a la consulta a las bases en el Partido Revolucionario Institucional.

Otro punto importante: ni en los estatutos de 1990 y menos en los de 1993 se reglamentó la existencia de corrientes internas del Partido Revolucionario Institucional. Ramiro de la Rosa propuso que se incluyeran y que tuvieran representación en los consejos políticos. Antes de la asamblea, el dirigente cetermista José Ramírez Gamero, a nombre de la vieja guardia, afirmó que la Confederación vetaría esta demanda.

Por si fuera poco, en la XVI Asamblea Nacional la participación de corrientes democratizadoras o contrarias a la línea dirigente fue prácticamente neutralizada. Si en 1990 estas corrientes tuvieron un activismo importante, en 1993 sólo sobrevivieron dos delegados de Democracia 2000, a quienes no se les aceptó ninguna de sus propuestas en la mesa de Estatutos. El

otrora Movimiento para el Cambio Democrático no dejó ni sus huellas. Meses atrás el dirigente visible de la Corriente Crítica, Rodolfo González Guevara, ya había anunciado su renuncia al partido ante la imposibilidad de impulsar un cambio democrático.

En el terreno de la refundación los nuevos Estatutos incorporaron un nuevo apartado que regula la estructura territorial (artículos 24 y 25), según el cual ésta se integra por las secciones que el partido constituye en cada una de las de marcaciones de los distritos electorales. A la estructura sec torial se le agrega el Frente Nacional de Organizaciones Ciuda dans, sustituto de la CNOP-UNE (art. 32).

El nuevo capítulo VI ubica a la Alianza Obrero-Campesina como una estrategia del partido que se inscribe en los principios de justicia social (art. 33), mientras el capítulo VII re gula el polémico Movimiento Territorial Urbano Popular que, se gún el articulado, se organiza a partir de comités sociales de base, constituidos en cada unidad territorial y apoyará los li derazgos naturales para la gestión y solución de las necesidades colectivas de cada comunidad, barrio, colonia y demás asen tamientos vecinales (art. 34).

La similitud entre esta estructura y los propios comités de Pronasol es más que evidente, de aquí la idea de que este movimiento es un intento por pronasolizar al partido. No obstante, también la CTM impuso sus condiciones: reclamó que se

le pusiera el apellido urbano popular para demarcar el radio - de acción de las clientelas corporativas.

2. Programa de Acción. El primer dato comparativo que resalta entre el programa aprobado en 1999 y el de 1993 es la desaparición de un amplio apartado titulado Compromisos para la *modernización* partidista, que reconocía que el partido ha visto distorsionadas sus relaciones con el gobierno y, desde la confrontación propagandística, se ha pretendido asimilar el partido al Estado y el Estado al partido.

Para enfrentar esto el documento proponía, entre otras cosas, recobrar la iniciativa ideológica, crear un órgano partidista de fiscalización a los funcionarios públicos, fortalecer la independencia financiera del partido, garantizar el derecho de los militantes a expresarse en corrientes de opinión, etc.

En 1993, el Programa de Acción prácticamente da por sentado que estos compromisos fueron cumplidos y que ya no constituyen una prioridad.

Por otro lado, el nuevo programa, de acuerdo con la agenda sexenal, incorpora una serie de demandas como la consolidación del TLC, la incorporación de las tesis del liberalismo social, la orientación eficiente de la inserción de México en los procesos productivos internacionales y apoya una nueva etapa en la vida agraria a partir de la reforma legislativa al artículo 27 constitucional.

Un punto polémico de este nuevo programa es aquel donde se indica vagamente que el partido apoya las acciones encaminadas a la reconversión del sector energético que se apeguen a nuestras disposiciones constitucionales. Despertó sospechas que este párrafo no contuviera ninguna declaración explícita de apoyo a la propiedad nacional de los hidrocarburos.

Por el contrario, en el nuevo programa se afirma que el partido alentará, reconociendo el carácter no renovable de los hidrocarburos y las cambiantes condiciones del mercado internacional del crudo, las acciones que incrementen el flujo de recursos para el desarrollo. En un mensaje cifrado se reconoce que para mantener la competitividad del sector el Partido Revolucionario Institucional apoya la reorganización y la reestructuración de las entidades del sector.

En el capítulo 12, dedicado al Combate a la Pobreza, el Partido Revolucionario Institucional de 1993 simple y sencillamente incorpora las tesis del gobierno salinista:

El partido reconoce que la solidaridad del pueblo mexicano es un valor fundamental en las luchas por la justicia social, que habrá de seguir nutriendo y fortaleciendo la capacidad de organización de la sociedad, para sumarla a la capacidad de las instituciones públicas, en un ejercicio de corresponsabilidad.

Por el contrario, el programa de 1990 criticó varias líneas del programa salinista que apenas comenzaba a adquirir -

vuelo. En ningún párrafo se habla de solidarismo u otro enfoque. Es más, se pronuncia en contra de aquellas tendencias que reducen e identifican la productividad con la depresión de los salarios o del tipo de cambio monetario.

3. Declaración de Principios. De los tres documentos, - la nueva declaración que surgió de 1993 es el más contrastante con su antecesora de 1990. Parecería incluso que se trata de partidos distintos.

Mientras en 1990 se respetaron los postulados básicos del Partido Revolucionario Institucional y se rechazó cualquier - pretensión de solidarizar al partido, en Aguascalientes los de legados apoyaron que el partido tenga una nueva etiqueta ideológica, el liberalismo social, incorporando punto por punto el discurso presidencial del 4 de marzo de ese año.

Lo novedoso de la declaración surgida en la XVI Asamblea Nacional radica en la jerarquización de las prioridades ideológicas del partido. Si en 1990 los cinco grandes principios - eran: Doctrina de la Revolución Mexicana, Libertades que Defen demos, la Democracia, la Justicia Social y la Soberanía Nacional, en 1993 el orden de los factores se alteró de la siguiente manera: La Fortaleza de la Nación, Afirmación y Defensa de las Libertades Humanas, La Promoción de la Justicia Social, el Perfeccionamiento de la Democracia y El Estado Solidario.

Esta alteración sí afectó al producto porque, en el nuevo documento, se eluden términos como democracia social, una vie-

ja propuesta del ideario priísta; y no se hace ninguna defensa de la economía mixta; el perfil ideológico no sólo se remite a la gesta de 1910 sino que va más allá en la búsqueda de raíces: de la lucha de la independencia a las Leyes de Reforma del siglo pasado hasta la era de la posguerra fría.

En la nueva declaración de principios se establece que el valor fundamental en las luchas por la justicia social, que ha brá de seguir nutriendo y fortaleciendo la capacidad de organización de la sociedad, para sumarla a la capacidad de las instituciones públicas, en un ejercicio de responsabilidad.

D. LA PROBLEMÁTICA ESTATAL DEL ASPECTO POLÍTICO DE MÉXICO

El sábado 27 de noviembre una circular convocó a todos los gobernadores priístas, a los diputados federales y senadores - del partido, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y a casi todos los integrantes del gabinete presidencial para que estuvieran presentes en un evento que anunciaba la consumación del ritual del destape presidencial.

Al día siguiente, los rumores se confirmaron. A las 7:30 de la mañana, en el Campo Marte comenzaron a reunirse todos los convocados. Ante ellos, Carlos Salinas de Gortari les dijo, -

en síntesis, que el Partido Revolucionario Institucional ya tenía al hombre idóneo para ganar la presidencia de la República.

Se trata de un hombre con gran preparación académica, con amplia experiencia parlamentaria, con un profundo conocimiento del país y del partido, con un gran sentido social. Se trata de un gran mexicano, de un gran patriota, destacó el presidente.

A continuación, Carlos Salinas de Gortari abrió la puerta de un salón contiguo y apareció Luis Donald Colosio.

-Opine, don Fidel- ordenó el presidente al líder del Congreso del Trabajo.

-¡Nos adivinó el pensamiento!- respondió el viejo jerarca

En tanto, una multitud de priistas, convocada horas antes se congregó en el auditorio Plutarco Elías Calles para vitorear al nuevo ungido y darle muestras de adhesión.

Frente a esa multitud, Colosio resaltó que él era hombre de lealtades y reafirmó: pertenezco a la generación del cambio que encabeza Carlos Salinas de Gortari, quien inició el proyecto en el que creo y comparto; el de las grandes reformas, el de la reforma de la Revolución.

Culminaba así un destape más en la historia del Partido Revolucionario Institucional. La maquinaria, al parecer, ya estaba aceitada. Atrás quedaron las promesas de la XIV Asamblea Nacional, organizada por el propio Colosio, para democratizar las decisiones y acabar con la subcultura de la línea. -

Atrás quedaron los reclamos una y otra vez expresados, aunque cada vez con menos resonancia pública, de militantes de corrientes dentro del partido que pedían democratizar el método de selección del candidato presidencial.

"Todo, en apariencia, salió a pedir de boca. Carlos Salinas de Gortari operó un destape a la usanza más ortodoxa del sistema, con pistas falsas, consultas confidenciales y un abanico de precandidatos que fueron presentados en la pasarela de los grupos de poder puntualmente: Manuel Camacho Solís, Pedro Aspe Armella y Ernesto Zedillo, encabezaron junto con Colosio el póker de los más fuertes. Como comodines, Emilio Lozoya - Thalman, Emilio Gamboa Patrón y hasta Patrocinio González Garrido entraron en el juego de las quinielas. En el camino de esta carrera, Carlos Salinas de Gortari se deshizo de todo aquel que le hiciera sombra a sus cuatro herederos y le ganó la partida a las camarillas rivales con golpes bajos, alianzas y rupturas soterradas".²⁵⁾

La salida de Fernando Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación, en enero de 1993, fue el primer signo de que la nominación del candidato priísta no sólo sería un proceso cerrado y eminentemente presidencialista sino, sobre todo, un juego para el que sólo estaban invitados los miembros de la se

25) CORDOBA, Arnaldo. La Formación del Poder Político en México. 19a. ed., Edit. Populaera. México, D. F., 1992. - Pág. 92.

lecta élite salinista. El ex gobernador veracruzano representaba, por la cobertura y amplitud de su camarilla dentro y fuera del partido, una amenaza para la continuidad de la generación del cambio.

Al mismo tiempo, colocó como alfiles para la sucesión a hombres que, si bien no entraban dentro del perfil generacional y profesional de la élite salinista, sí formaban parte de los intereses creados en torno a este núcleo, como fue el caso de Patrocinio González Garrido, emparentado con el presidente y que llegó a Gobernación con la estela de hombre represor durante su paso por la gubernatura de Chiapas.

Al interior del partido, la contrarreforma estaba consumada. La presencia de un operador político como Fernando Ortiz Arana tenía como objetivo principal frenar los posibles madruguetes y rebeliones de multitud de viejos y nuevos militantes priistas que querían incidir en la decisión sexenal por excelencia.

Sin embargo, detrás del aparente éxito del nuevo destape se registraron otros signos importantes que presagiaban lo que en un vértigo acelerado se convertiría en menos de un año en la debacle de la solidez priista: la ruptura de lealtades.

Si bien desde la consumación de la XVI Asamblea Nacional las piezas estaban dispuestas para que Salinas impusiera a su candidato, la realidad sugería que el aparato priista estaba contaminado ya por los golpes de mando acumulados durante el

sexenio, por la irrefrenable pérdida de legitimidad interna y externa y por la desarticulación de las filas corporativas.

El virus de la intriga palaciega, tan común dentro de la cultura priísta, alcanzó su clímax, en los cinco meses previos al destape presidencial.

Frente a la aparente solidez de la estructura partidista, las divisiones se daban entre los bandos de presidenciables que formaban parte del denominado grupo compacto salinista. De hecho, el destape se tuvo que adelantar porque en el escenario político se presentaban signos ominosos de desajustes.

Estos provenían de una realidad contundente: el Partido Revolucionario Institucional se convirtió en el territorio de lucha de los tres grandes ejes que partían de la matriz salinista y que buscaban la nominación presidencial. A saber:

1. El eje cordobista. El poder alcanzado por el jefe del gabinete salinista, José Córdoba Montoya, se hacía patente en tretelones y a la luz pública. El asesor convertido en vicepresidente en funciones apadrinó directamente tres candidaturas que se convirtieron en diques para los dos prohombres del salinismo más poderosos: Pedro Aspe, secretario de Hacienda, y Manuel Camacho Solís, regente capitalino, Ernesto Zedillo, un tecnócrata formado en las lides del Banco de México y que fungió como secretario de Programación y Presupuesto y titular de Educación Pública, junto con Colosio, formaban las dos piezas principales del engranaje cordobista. Como una opción de des-

piste político estaba el secretario de Gobernación, González - Garrido.

Córdoba y su grupo lograron desplazar a Gutiérrez Barrios, cabeza de una camarilla poderosa que se mantuvo en la administración pública, en puestos claves dentro del Partido Revolucionario Institucional y en la Cámara de Diputados.

"En la toma de decisiones, el eje cordobista mantenía su influencia en prácticamente todas las áreas: controlaba en términos reales la política interna y las líneas principales de la política de seguridad nacional; mantenía piezas claves en las áreas de dominio de Pedro Aspe, a través del subsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, quien se convirtió en el interlocutor frente a los poderosos y emergentes grupos financieros; la política exterior no se decidía en la cancillería dirigida por Fernando Solana, sino en los corredores de Los Pinos desde donde Córdoba controlaba la negociación del Tratado de Libre Comercio con su amigo Jaime Serra Puche y la relación con Estados Unidos, a través de José Angel Gurría, el embajador en Washington; en materia de política social, el eje cordobista determinaba las líneas a seguir en la Sedesol de Colosio y en la SEP, de Ernesto Zedillo. Contaba además con una interrelación directa con el clan de Francisco y Carlos Rojas, que controlaban la paraestatal estratégica por excelencia (Pemex) y la política de asignación de recursos para combatir la pobreza (Pronasol)²⁶⁾

26) MORILLAS CUEVA, Lornzo. El Aspecto Electoral en México. 5a. ed., Edit' F.C.E. México, D. F., 1990. Pág. 25.

Por si fuera poco, Córdoba contaba con el mando del gabinete de seguridad nacional que colocaba orgánicamente bajo su control al ejército, las procuradurías y a las otras instancias involucradas en esta área.

Córdoba fue el artífice principal del nuevo entendimiento entre el salinismo y un sector de la jerarquía católica, encabezado por el nuncio apostólico, Jerónimo Prigione, representante del ala vaticana en el Episcopado mexicano.

Obviamente, en el Partido Revolucionario Institucional tenía un amplio radio de acción. El eje cordobista, a través del secretario general priísta José Luis Lamadrid, mantuvo los hilos de las alianzas. Lamadrid es considerado como el artífice de la llegada y salida de Genaro Borrego y el interlocutor frente al grupo encabezado por Ortiz Arana.

2. El eje camachista. Manuel Camacho Solís formó junto con Emilio Lozoya Thalman, Francisco Ruíz Massieu y otros políticos, el núcleo inicial de la camarilla salinista. Teórico del sistema político mexicano, Camacho se convirtió en uno de los ideólogos de Carlos Salinas de Gortari en la lucha por la toma del poder.

Hasta antes de 1988, nadie más cercano a Carlos Salinas de Gortari que el propio Camacho, hombre de mayor carrera política que su amigo. Después de 1988, la influencia de Camacho fue disminuyendo paulatinamente. No obstante, a lo largo del sexenio, su figura de negociador, concertador y apaga-fuegos -

fue funcional para el propio presidente. Camacho se involucró en múltiples conflictos que amenazaron la gobernabilidad del sexenio salinista. Era la mejor carta salinista frente a la oposición cardenista y, sin duda, uno de los pocos políticos de la camarilla.

No obstante, las fricciones del camachismo fueron por partida doble: por un lado, se alejó de los llamados dinosaurios priísta, representados por la vieja guardia corporativa a la cual en un ensayo calificó como feudos políticos; del otro lado, se distanció cada vez más del poderoso eje dordobisa. De hecho, la labor principal de esta camarilla fue obstaculizar la llegada de Camacho Solís.

El radio de acción del camachismo era amplio en términos de interlocución, pero mínimo en términos de control real. Gobernar el Distrito Federal le dió a Camacho un abanico de redes tanto dentro de los grupos de poder económico, como las llamadas fuerzas vivas del priísmo (colonos, sindicatos, organismos de las juventudes priístas). Al interior del Partido Revolucionario Institucional, el camachismo intentó consolidar las dirigencias corporativas alternas, como la de Elba Esther Gordillo, en el SNTE, y mantener su control en el priísmo capitalino, a través de Manuel Aguilera, un camachista tardío.

3. El Eje Aspista. Como tercero en discordia, se encontraba el grupo de la eminencia gris de la reforma económica salinista, el titular de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe

Armella. El hombre de las finanzas nacionales contaba con el apoyo de los grupos económicos más fuertes del país y del extranjero que veían en él al garante de la continuidad y estabilidad del modelo.

Las áreas de influencia y el poder ejercido por Aspe lo fueron colocando como un punto de equilibrio entre el cordobismo y el camachismo, lo cual acrecentó más su capacidad de presión e interlocución.

Eficiente en su encargo, Aspe trasladó a nivel de alianzas políticas lo que había hecho en el plano económico: alianzas cupulares con las cabezas de las camarillas tradicionales más fuertes que no pertenecían al entorno natural del salinismo.

De esta forma, Aspe articuló una alianza con la dirigencia cetemista que mantuvo su animadversión frente a Camacho y su distanciamiento táctico con Colosio y lo que él representaba; se fortaleció en último momento con alianzas frente a grupos de poder tan amplios como el legendario Grupo Atlacomulco, comandado por Carlos Hank González.

Pese a ello, Aspe estuvo encerrado en una especie de jaula de oro. Controlar las finanzas nacionales y el proyecto privatizador le dió un amplio margen de acción, pero también le restó capacidad de maniobra frente a las fuerzas operativas del sistema político. A nivel de imagen social, Aspe cargó con el estigma de los famosos mitos geniales (inflación y desempleo)

que lo ubicaron como una de las figuras menos carismáticas entre los sectores de la oposición de centro-izquierda.

Este panorama revelaba que la sucesión salinista tenía, a pesar de su apariencia de solidez, serias grietas que presagaban lo que posteriormente sucedería con la candidatura de Colosio. De hecho, la primera muestra clara de descontento se generó al interior del propio grupo salinista con Manuel Camacho como protagonista.

Días antes del destape colosista, Camacho vivió otro de sus momentos estelares. El 24 de noviembre recibió la ovación de diputados priístas y opositores después de rendir su informe de labores en la regencia del Distrito Federal. Este hecho hizo que sus bonos políticos subieran a los ojos de los gabineteólogos.

No obstante, tres días después Camacho fue informado de manera informal que la decisión presidencial no recayó en él. Al saberse el nombre de Colosio, Camacho encabezó una especie de berrinche que se convirtió en una verdadera bomba política.

El regente fue el único de los precandidatos que no asistió al besamanos priísta en el auditorio Plutarco Elías Calles. Al día siguiente, convocó a una conferencia de prensa en donde detonó la explosión. Frente a los reporteros, Camacho reconoció que aspiró a la candidatura presidencial, desmintió que preparara su salida del partido y refrendó su apoyo a Colosio. Sin embargo, sus palabras sonaron más a una rendición condicio

nal que a un respaldo explícito:

Los tiempos están cambiando en México -afirmó Camacho-. Aspiré a ser candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. He meditado lo que debo hacer y decir. He calculado cuáles son mis opciones y, entre ellas, cuál es la que, a mi juicio, es la mejor para la unidad y el fortalecimiento de nuestra vida democrática.

Agregó:

La opción es clara: no creo que la manera de hacer avanzar la democracia en México sea polarizando la vida política - por rupturas o desprendimientos.

Si bien Camacho no rompió explícitamente con el priismo, implícitamente reprochó a su tutor y amigo el resultado del destape. El gesto camachista revelaba más de lo que decía: el otrora hombre de todas las confianzas de Carlos Salinas de Gortari expresaba su disenso frente a un juego político que le resultó adverso. Rompió las reglas de ese juego y ventiló públi- camente su posición.

Aún más, Camacho le puso un mote a sus adversarios, clara- mente identificados con el eje cordobista: les llamó el grupo de interés que, evidentemente, contrastaba con aquel grupo compacto que él teorizó y que, según sus proyecciones, debía man- tenerse en el poder a través de un proyecto sólido de reforma económica y política. El grupo de interés representaba, por -

el contrario, un núcleo articulado en función de intereses personales.

El daño estaba hecho. La polarización Camacho-Colosio no sólo no disminuyó sino que fue acrecentándose conforme el panorama político del país fue enturbiándose. La pugna iba más - allá de dos personalidades.

En el fondo, era una lucha por determinar el rumbo del proyecto salinista original y el alcance del poder de quien sería después ex presidente. Hasta dónde Carlos Salinas de Gortari mantendría su influencia más allá de 1994 privilegiando los intereses económicos y políticos sólidamente armados a lo largo del sexenio. Hasta dónde Colosio no era el germen de un nuevo maximato político.

Mientras estas preguntas circulaban en todos los corrillos políticos, el aparato priista fue movilizado para cerrar filas en torno a su nuevo candidato. El 8 de diciembre el Partido - Revolucionario Institucional convocó a la VIII Convención Nacional. Sin el menor debate, sector tras sector, delegado tras delegado expresaron su apoyo al precandidato único.

El escenario se preparó para conjurar cualquier signo de ruptura o desaveniencia. Su antecesora, la VII Convención Nacional, con su ambiente denso por el desplante de Alfredo del Mazo y por la ruptura previa de Cuauhtémoc Cárdenas, parecía - estar lejos de un tinglado armado para simular unidad. Otras sombras que nublaban el escenario priista, como la del fraude

electoral, también pretendieron ser conjuradas. Frente a los 10 mil priistas asistentes, Colosio afirmó:

El Partido Revolucionario Institucional no necesita ni yo quiero un voto al margen de la ley. Trabajaremos para que estas elecciones sean ejemplo de práctica democrática.

De cara al gobierno salinista, Colosio se comprometió a mantener la continuidad y dejar claro que no habría rupturas.

No derrocharemos el gran esfuerzo que ha realizado la sociedad para erradicar la inflación, mantener la disciplina en las finanzas públicas y transformar la estructura económica del país.

Y, prácticamente trasladando a su boca el discurso salinista, recalcó que su gobierno habrá de actuar sin paternalismos, pero lejos de la indiferencia: será un verdadero promotor de la eficiencia económica y del empleo productivo.

El tumultario acto priista culminó como inició: con porras prefabricadas, adhesiones acriticas, la cargada nacional de todas las huestes. Colosio era designado, en medio de este derroche de viejas prácticas, como el candidato de la esperanza.

El llamo grupo de interés también cerraba filas. Colosio designó como jefe de su campaña a Ernesto Zedillo, la figura del gabinete más vinculada a Córdoba. Con este nombramiento se aseguraba una cuña importante en el equipo de campaña colosista.

En la madrugada del primer día de 1994, el año triunfal - de la estrategia salinista, el país se despertó con la emergencia más dramática de todo el sexenio: en el estado sureño de Chiapas, el hasta entonces desconocido Ejército Zapatista de - Liberación Nacional se levantaba en armas. Este grupo le declaraba la guerra al Estado mexicano, reclamaba la renuncia de Carlos Salinas de Gortari y la formación de un gobierno de transición que garantizara elecciones limpias para el 21 de agosto.

El sistema pasó por todas sus fase climáticas de respues- ta política en menos de un mes: de la incredulidad a la conde- na, de ésta a la represión, para luego, en quince días, propo- ner una tregua y buscar un entendimiento pacífico.

La estrategia sorpresiva del EZLN surtió efecto. En seis décadas de régimen priísta, ningún grupo armado había tenido - tal capacidad de desestabilización. En los seis años del régi- men salinista, ninguna emergencia tan grave como ésta se había presentado en el panorama. Chiapas sepultó la algarabía pre- vista por el inicio formal del Tratado de Libre Comercio, el - pase formal al primer mundo, según Carlos Salinas de Gortari.

El presidente se vió obligado a actuar en forma rápida, - nerviosa y forzada: ordenó la renuncia de Patrocinio González Garrido como secretario de Gobernación; trasladó a Manuel Cama- cho, el hermano rebelde, de su refugio en la cancillería a en cabezar las negociaciones de paz con la guerrilla; se ordenó - la renuncia del gobernador interino priísta Elmar Setzer para

sustituirlo por otro interino, Javier López Moreno; por si fue ra poco, se vió obligado a exiliar a su brazo derecho y responsable directo de la política de seguridad nacional, José Córdoba, quien se fue al Banco Interamericano de Desarrollo.

Todos estos cambios en carambola afectaron al gobierno salinista. No obstante, ningún golpe más severo que el golpe de imagen que vivió el régimen: el día que iniciaba el Tratado de Libre Comercio, en el estado más pobre de la República se rebelaba en armas un grupo de indígenas miserables, liderados por un enigmático subcomandante Marcos y por un núcleo de guerrilleros encapuchados cuya identidad, hasta la fecha, no se conoce con exactitud.

Para el Partido Revolucionario Institucional y su candidato presidencial, el levantamiento guerrillero tenía signos claros de debacle por razones muy claras:

1. El levantamiento rompía con uno de los ejes fundadores del pacto político priísta: la paz social. Sesenta años de hegemonía del partido oficial estaban amparados en la garantía de la estabilidad y la ausencia de conflictos bélicos. Su razón de ser, incluso, se fincaba en su eficacia para eludir, neutralizar o corromper cualquier movimiento que amenazara con la estabilidad del régimen. La rebelión del EZLN, a pesar de estar localizada territorialmente en 8 municipios, tuvo un impacto multiplicador que convertía en slogan vacío lo que antes era uno de los pilares más preciados del discurso oficial.

2. Chiapas constituía, en los hechos, uno de los graneros electorales del Partido Revolucionario Institucional. Las cifras oficiales revelaban que en este estado más del 90 por ciento de sus votantes respaldaban al partido oficial. En algunos municipios, el fervor priísta era tan alto que, según la magia de las cifras gubernamentales, el tricolor tenía adeptos que iban más allá del 100 por ciento del padrón. El levantamiento guerrillero desnudó con todo su dramatismo las falacias de esta situación. Chiapas dejaba de ser el estado de la reserva electoral para convertirse en el asunto más delicado de la contienda presidencial. Chiapas dejaba de ser el emblema de los triunfos priístas para convertirse en la avanzada de la oposición contra el régimen.

3. La campaña del candidato presidencial inició una pendiente que fue definitiva. Ningún candidato como Luis Donaldo Colosio inició su campaña tan a la zaga: con una rebelión en el estado que más recursos tuvo del programa que él encabezó desde la Sedesol; con un reacomodo de fuerzas políticas que obligaron al renacimiento de su principal rival, Manuel Camacho, y la desacreditación del equipo colosista-salinista. En realidad, con Chiapas también se iniciaba otra guerra de dimensiones más fuertes; la encarnizada lucha en los entretelones del gabinete por la sucesión.

4. Internamente, el Partido Revolucionario Institucional entró en un proceso de fuerte desarticulación. Los priístas -

se confrontaron a tres líneas de mando: la de Fernando Ortíz - Arana, sin capacidad de decisión real y al margen por completo de las negociaciones en Chiapas; la de Ernesto Zedillo, jefe de campaña colocado como cuota del grupo de interés que denunciara Acamacho; y la de Guillermo Hopkins, miembro del primer círculo colosista que, ante los dramáticos sucesos, comenzó a preparar su alejamiento paulatino del entorno cordobista y de la égida salinista.

Desde el 1 de enero hasta antes de su asesinato, la campaña de Colosio nunca pudo despuntar y mantuvo como nudo central el conflicto chiapaneco.

La primera toma de posición oficial de Colosio frente al conflicto se dió a través de un comunicado que buscaba la adhesión de sus otros dos adversarios principales: Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, y Diego Fernández de Cevallos, del PAN.

"En este documento, Colosio repudiaba los hechos de violencia y exhortaba a quienes hoy se han alejado del marco de la ley a respetar el estado de derecho que los mexicanos nos hemos dado. Líneas abajo expresaba que la violencia sólo engendra encono, división y pérdida de vidas humanas. Con la violencia todos perdemos. Los rezagos sociales a todos nos indignan, superarlos es la tarea nacional prioritaria, pero sólo lo podemos hacer con estabilidad y armonía en la vida de las comunidades".²⁷⁾

27) COSIO VILLEGA, Daniel. Op. Cit., Pág. 62.

El pronunciamiento colosista no hacía ninguna propuesta - específica para cesar las hostilidades. Constituía un simple pronunciamiento en momentos que se requería aportar y reclamar soluciones inmediatas, de mediano plazo y profundas.

Cárdenas, por su parte, emitió otro comunicado. Fernández de Cevallos terció con otro. La posibilidad de una firma conjunta se deshizo. Las tres principales fuerzas políticas - no pudieron dar una opinión conjunta respecto al conflicto chia paneco.

Cuatro días después de emitir el comunicado, Colosio arran có su campaña en Huejetla, Hidalgo, el 10 de enero, en un even to que quedó relegado a un tercer plano frente a los reacomodados en el gabinete, los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla y la alarma en otras partes del país.

Al día siguiente, el 11 de enero, Manuel Camacho Solís re sucitaba políticamente al ser nombrado comisionado especial pa ra la paz por el presidente. Su discurso resultó ser una vir tual segunda campaña electoral para rehacer las piezas desarti culadas del oficialismo. A través de él expresó que convocaba a toda la sociedad civil a sumarse a la oferta pacificadora y presumía tener toda la confianza del presidente de la República.

El 18 de enero los zapatistas reconocieron a Camacho como comisionado. Casi un mes después, el 16 de febrero, se anun ció el inicio de las negociaciones formales de paz y el 24 de febrero, en una ceremonia cargada de simbolismos, con la bande

ra nacional como testigo, Camacho, el subcomandante Marcos y - el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruíz, dan a conocer el desarrollo de las negociaciones formales.

Durante este periodo inicia formalmente la otra guerra. - Aquella que confrontó nuevamente a Colosio con Camacho en una batalla que, de antemano, tenía todas las de perder el abanderado priísta.

En esta guerra, el propio Carlos Salinas de Gortari tuvo que intervenir para realizar, en un acto inusitado, un virtual segundo destape. El 27 de enero convocó a secretarios de Estado, senadores, dirigentes del Partido Revolucionario Institucional y de los sectores, ante quienes dió línea sin recato: - No se hagan bolas, el único candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República es Luis Do naldo Colosio, afirmó Carlos Salinas de Gortari.

Lejos de ayudar a Colosio, este segundo espaldarazo presidencial agitó más las aguas. Presentó al candidato como un personaje político carente de fuerza propia y dependiente del respaldo salinista. Ventilaba públicamente, lo que era un rumor generalizado: Salinas previó en algún momento la sustitución - del candidato.

Por su parte, Camacho atrajo más y más los reflectores de la prensa nacional y extranjera que ya no sólo lo cuestionaba sobre el avance de las negociaciones en Chiapas sino, especialmente, sobre sus aspiraciones políticas. El comisionado atizó

el fuego. En declaraciones hechas al *Wall Street Journal*, publicadas el 18 de febrero, Camacho no negó que siguiera compitiendo por la presidencia y sugirió que la percepción pública de su posible candidatura le ayudaba en su posición negociadora frente al EZLN. La pugna fue terciada hasta por los partidos opositores.

Frente a esto, los priístas volvieron a estigmatizar a Camacho como desleal, protagónico e indisciplinado. Carlos Salinas de Gortari salió en su defensa el 24 de febrero destacando que el comisionado está trabajando con plena dedicación, plena lealtad y compromiso, y también con un gran patriotismo. Bastaron estas palabras para que la ola de rumores volviera a crecer y los golpes bajos al interior del aparato partidista renaciera con mayor virulencia.

El 4 de marzo, aniversario del Partido Revolucionario Institucional, Colosio decidió tomar la iniciativa en su primer discurso público de toma de posición y deslinde. En el deslucido 65 aniversario del Revolucionario Institucional, la dirigencia priísta y el propio Colosio intentaron conjurar los fantasmas de la división.

El dirigente del partido Fernando Ortíz Arana presentó a Colosio como el único que cuenta con el apoyo firme y convencido de sectores, organizaciones y dirigencia de todo el país, - mientras Colosio, registrado oficialmente como candidato, negó que existiera divisionismo en el partido y expresó profundo respeto por Camacho.

No obstante, también envió un mensaje claro: Yo no he hecho de Chiapas un botín político. En ese tenor de mensajes cifrados, Colosio hizo un llamado a construir un presidencialismo sujeto a límites constitucionales y planteó la necesidad de independeizar al Partido Revolucionario Institucional del gobierno.

Por enésima ocasión, Colosio hizo un llamado que no tenía sustento en la realidad: en esa coyuntura la dependencia del prisismo hacia la línea presidencial alcanzó su grado más alto; nunca como en esas circunstancias el Partido Revolucionario había estado tan carente de iniciativa política propia.

Por si fuera poco, la tregua entre Camacho y Colosio nació muerta. El viernes 13 de marzo, el comisionado convocó a una conferencia de prensa en la que denunció que se ejercen presiones contra este comisionado para que se retire de la vida política del país. Y advirtió: yo no puedo, por razón de cálculo o de atención a presiones, cancelar mi vida política y lo que en política represento. El futuro político del país no se construirá con una sola fuerza; lo construirá la alianza de las fuerzas nacionales para que el gobierno tenga los sustentos necesarios y se esté a la altura que reclaman los tiempos por venir. Implicitamente, Camacho también denegaba del papel del Partido Revolucionario Institucional como eje aglutinador de las fuerzas políticas.

La confrontación entre Colosio y Camacho también demostraba un elemento esencial de la crisis priísta: el partido que na

ció para dirimir en forma institucional las querellas de la clase política estaba agotado como tal. Las reglas del juego dentro del Partido Revolucionario Institucional no sólo estaban alteradas sino pervertidas.

Si en 1988 la ruptura vino por el lado de una corriente opositora a la nueva y pujante élite salinista, en 1994 la ruptura se presentaba por partida doble: en forma violenta a través del del estallido guerrillero y en forma soterrada y más dañina en los entretelones de la camarilla salinista.

Los sucesos posteriores revelaron que el Partido Revolucionario Institucional virtualmente retornaba a su prehistoria: el crimen como fórmula de presión política.

La mañana del miércoles 23 de marzo Colosio se presentó en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana para hablar de las demandas de los barrios y colonias populares. No había culminado el mitin cuando un hombre vestido de negro se acercó entre la multitud y le disparó a boca de jarro. El candidato priísta recibió heridas mortales en la cabeza y el abdomen. Tres horas después se anunciaba en cadena nacional por televisión el fallecimiento de Colosio. Iniciaba apenas la segunda fase de una crisis terminal en el partido gobernante.

Ante el estupor, el sistema pretendió reaccionar con la mayor celeridad para enfrentar la emergencia más importante del régimen desde que Alvaro Obregón, el caudillo triunfante, sonorense como Colosio, fuera ultimado cuando se preparaba a ocu-

par la silla presidencial por segunda ocasión en 1928.

No sólo era el asesinato de Colosio lo que constituían un golpe mortal. Era el conjunto de elementos que hacían de éste un crimen de Estado que descomponía el ya de por sí turbulento escenario político:

1. Por segunda ocasión en menos de cuatro meses, se cimbraban los cimientos del régimen político. No eran las balas de una guerrilla opositora, enclavada en la lejanía de la sierra lacandona. No eran las balas de un grupo al margen de las reglas del juego político legal. Eran las balas de un sicario que surgía de las entrañas mismas del sistema para asesinar a quien estaba destinado a ser su próximo pilar. Por esta razón, el homicidio de Colosio tenía las características de un crimen de Estado que, desde el principio, apuntó el gatillo hacia la propia clase política.

2. Colosio fue asesinado cuando apenas comenzaba a despuntar su campaña. Dos semanas atrás, el candidato priísta había marcado un deslinde claro frente a su tutor político e intentaba recuperar terreno frente a sus tres batallas: la guerrilla chiapaneca, la sombra de Camacho y la intromisión salinista. De tajo, este intento fue cortado y Colosio se convirtió en una candidatura frustrada.

3. Las características del crimen hablaban de un asesinato perfectamente calculado: Colosio muere en la primera entidad gobernada por un partido opositor, el PAN, ante el cual Colosio

tuvo que reconocer la derrota como dirigente priísta en 1989; - muere en una ciudad fronteriza caracterizada por ser una de las sedes más importantes del narcopoder mexicano; muere en uno de los mítines más vigilados de su campaña, frente a los ojos de - más de dos decenas de agentes encubiertos pertenecientes a tres corporaciones distintas; muere cuando justamente habían culminado los tiempos legales para hacer una remoción a su candidatura; muere después de ser dos veces destapado.

4. El crimen alertó nuevamente sobre el grave riesgo de - que poderes clandestinos, al margen o insertos dentro del aparato estatal, tuvieran la capacidad para llegar hasta uno de los hombres más vigilados y protegidos. El asesinato se engarzaba con el homicidio en mayo de 1993 del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, uno de los hombres claves de la jerarquía católica, quien fue ultimado en el aeropuerto de Guadalajara, la otra sede importante del narcopoder mexicano. Era, en síntesis, un crimen contra la seguridad nacional con claros tintes narcopolíticos o narcojudiciales hasta ahora no esclarecidos.

5. El crimen, finalmente, atrapó al Partido Revolucionario Institucional en su etapa de mayor debilidad como arena de decisión y acuerdos políticos. Los eventos posteriores reafirmaron esta apreciación.

¿Quién ocuparía el lugar de Colosio?, fue la duda inmediata que comenzó a corroer el sistema desde el momento mismo de los balazos a quemarropa contra el candidato. ¿Qué decían los

estatutos priísta? ¿Qué reglas estaban prescritas para un partido que se había preciado de no tener este tipo de eventualidades?

Mientras estas dudas de ventilaban, tres días de vacío de poder dentro de la campaña priísta desataron nuevamente la guerra interna.

El líder del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Ortíz Arana, atrapó rápido y hábilmente el mensaje. Se puso al frente de la indignación priísta y, de paso, hizo campaña para favorecerse. Otro grupo, alentado por el propio presidente, presionó para medir la posibilidad de un cambio constitucional que beneficiara a Pedro Aspe. En caso de que esta maniobra no pudiera concretarse, ungió al único que tenía posibilidades legales de sustituir a Colosio: su jefe de campaña Ernesto Zedillo. Las voces más críticas y débiles dentro del priísmo reclamaban una auténtica consulta a las bases, en honor también a Colosio, su reformador frustrado. Todas las baterías apuntaban ahora contra quien hacia unas semanas disfrutaba de las mieles de la discordia: Manuel Camacho.

Todavía no sepultaban a Colosio en Magdalena de Kino y Ortíz Arana había ordenado a su brazo derecho, Amador Rodríguez Lozano, secretario de Acción Electoral del CEN priísta, para que convocara a la cargada a favor suyo llamando a todos los comités estatales, distritales y municipales a que se manifestaran.

Un telefonema de Carlos Salinas de Gortari ordenó que se frenaran de tajo los pronunciamientos.

De acuerdo a la versión del periodista Elías Chávez, esta fue la mecánica:

Desde el lunes al medio día, Ernesto Zedillo desapareció. Durante horas nadie supo dónde estuvo, hasta que en la noche -llegó a su casa custodiado por miembros del Estado Mayor Presidencial.

Esa misma noche del lunes Carlos Salinas de Gortari habló nuevamente con Ortíz Arana:

-¿Cuál es la respuesta?

-De oposición señor presidente. No sacaríamos adelante la reforma... (al artículo 82 constitucional para beneficiar a Aspe Armella).

El presidente le reclamó a Ortíz Arana que se hubiera convertido en parte interesada y que no hubiera detenido totalmente los pronunciamientos de quienes apoyaban su precandidatura y le preguntó: ¿Por qué no tú, Fer?

Ortíz Arana contestó que él había actuado institucionalmente y que no había promovido las manifestaciones de apoyo a su precandidatura.

Carlos Salinas de Gortari le dijo que mentía. Que a fuerza quería ser candidato. Que le interesaba más su futuro personal que el del país; Ortíz Arana contestó:

-No busco ni quiero la candidatura.

-Si es así, dilo públicamente.

-Mañana lo haré a primera hora, señor presidente.

-¡Hazlo!- ordenó Carlos Salinas de Gortari y colgó el teléfono.

Este diálogo ilustrativo da una idea de tensión entre los dos ejes tradicionales del sistema: el partido y la presidencia y el grado de pugna que se vivió en esos días claves.

Sin embargo, no era la única tensión desatada tras el crimen. Un grupo de políticos presuntamente encabezados por Emilio Gamboa Patrón, titular de Comunicaciones y Transportes, por los gobernadores de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, de Oaxaca, Diódoro Carrasco, y del Estado de México, Emilio Chuayfett, así como un grupo de legisladores buscaron revivir al ex secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.

Otro grupo, encabezado por los gobernadores Manuel Cavazos Lerma, de Tamaulipas, Patricio Chirinos, de Veracruz, y por el poderoso ex asesor presidencial José Córdoba buscaban reformar el artículo 82 constitucional para permitir el arribo de Pedro Aspe. En caso de que no hubiera reforma constitucional, Ernesto Zedillo sería el candidato aceptable para ese grupo. Presuntamente, la CTM se sumó a esta opción.

Finalmente, era claro que Carlos Salinas de Gortari apoyaba esta maniobra. La intención era muy clara: impedir que ante

la indignación generada por el crimen contra Colosio, las otras camarillas tomaran la delantera y se desagraviaran frente al - excesivo poder salinista. La muerte de Colosio ponfa en riesgo la vida del propio proyecto transexenal salinista y el futuro - político del mismo presidente, para entonces cubierto también - por la sombra de la duda y la complicidad en el crimen.

La maniobra de reforma al artículo 82 constitucional tuvo que ser desmentida por el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional en un desplegado publicado el mismo lunes 28 de marzo.

Lo significativo era que por primera vez en muchos años, - la lucha por la sucesión se debatía en forma incontrolada, aunque fuera por un breve lapso, suficiente para demostrar que Carlos Salinas de Gortari se enfrentó de nuevo a una virtual revuelta interna.

La corriente priísta Democracia 2000, en ese maremágnum de toma de posiciones y golpes bajos, fue de los pocos grupos priístas que reclamó que la designación del sucesor de Colosio fuera resultado de un proceso de amplio consenso democrático y expresó su oposición a que el nuevo candidato presidencial fuera de signado por la voluntad de un solo hombre.

El coordinador general capitalino del grupo declaró que la muerte de Colosio lo ha convertido en el mártir de la transición democrática, debido a la total desorganización que prevalece en las filas del priísmo, que no ha sabido tomar decisiones preci-

sas, de acuerdo con el programa de acción, estatutos y la declaración de principios.

Por su parte, el entonces director general de Infonavit, - Francisco Ruíz Massieu, candidateado por algunos sectores del entorno camachista-colosista fue el único de los precandidatos que se deslindó públicamente en una carta enviada al periódico progubernamental El Nacional. Curiosamente, uno de sus argumentos centrales para rechazar tal posibilidad fue su condición en todo momento equívoca, de ex cuñado del actual mandatario - Lic. Carlos Salinas de Gortari que en un sistema como el nuestro hacen imposible imaginar tal cosa.

Mientras tanto, la guerrilla zapatista de Chiapas consideraba que el asesinato de Colosio era un ajuste de cuentas interno, una provocación para el endurecimiento.

Así, en medio de este clima y de las claras presiones económicas que amenazaban con desbordar el frágil esquema de estabilidad macroeconómica del salinismo, el presidente optó por - operar un segundo destape formal, el tercero real, sobre el cadáver aún no enterrado de Colosio y de todo lo que su muerte - representaba.

El 29 de marzo, cuatro horas después de que Ortíz Arana - declinara como candidato emergente, en Los Pinos se operó la designación de Zedillo, avalada, al parecer, por un mecanismo estatutario establecido en el artículo 159 de los estatutos pris - tas. La interpretación dada por el propio gobernador mexiquen

se Emilio Chauyfelt, reveló en una selecta reunión del CEN que no había tiempo para convocar a una convención extraordinaria.- Nadie se opuso a esta dudosa interpretación.

Acto seguido, el gobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones sacó un videocassette y anunció que tenía una propuesta: los presentes vieron y oyeron la filmación del evento en que Colosio designaba coordinador de su campaña a Zedillo. Carlos Salinas de Gortari preguntó si alguien tenía otra propuesta. Fidel Velázquez nuevamente, como cuatro meses atrás, exclamó con su voz senil, tan antigua como el régimen priísta: No, señor presidente. Esa también es nuestra propuesta.

De esta forma, en Los Pinos culminó un virtual videodedazo. Unaburda maniobra que intentaba legitimar la imposición de Zedillo con las palabras de Colosio y, de paso, pretendía cubrir así las formas estatutarias priístas.

Momentos después, el boletón 90-94 del partido anunciaba que los sectores del Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron en favor del licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León. El kafkiano boletín afirmaba: Luego de la reunión del Consejo Político, celebrada en el salón Presidentes de la sede priísta sus integrantes, encabezados por el presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Ortíz Araña, externaron su decisión en favor de quien fuera coordinador general de la campaña de Colosio Murrieta.

En realidad, ni hubo convocatoria que mediara tal reunión ni ésta se realizó en el lugar señalado. Todo se hizo en la -residencia presidencial.

El asesinato de Colosio derivó así en otra muerte para la pretensión democratizadora priísta. Democracia 2000 denunció que se violó el artículo 159, pero al mismo tiempo una fracción de ese grupo publicaba un desplegado anunciando su más amplio respaldo a Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien le demandaban que encabece un frente común que cierre el paso de líneas duras y autoritarias que han aflorado en los últimos días. En una carta dirigida al nuevo ungido, Manuel Camacho Solís le ofrece su apoyo para evitar que la situación del país se agrave. - Mientras tanto, la nueva cargada olvidaba los días de luto y - se sumaba a la nueva campaña: funcionarios, gobernadores, dirigentes medios y altos del partido calificaban a Zedillo como - garante de unidad.

Zedillo cerraba el ciclo declarando que su primer compromiso, de llegar a la presidencia de la República, sería resolver el crimen contra Colosio.

E. EL CAMBIO POLÍTICO ENTRE EL PARTIDO OFICIAL Y EL PODER EJECUTIVO EN LA ACTUALIDAD

En la noche del 21 de agosto el sistema había pasado la prueba de fuego: los resultados preliminares de las elecciones presidenciales arrojaban un saldo positivo para el candidato priísta Ernesto Zedillo, mientras sus opositores Diego Fernández de Cevallos, del PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, afirmaban que los comicios constituyeron un proceso irregular e inequitativo.

Un dato resaltaba ante la mirada sorprendida de los observadores políticos: a pesar de los pronósticos pesimistas que calculaban un elevado abstencionismo, la ciudadanía había salido a votar en forma significativa y los índices de participación rebasaron el 70 por ciento del padrón en algunos distritos electorales. La guerra de encuestas previa a los comicios que le daban al candidato oficial un margen que iba del 35 al 40 por ciento de los votos fue rebasada, ya que, pese a todo, consiguió un ligero porcentaje por arriba del 50 por ciento.

¿Qué sucedió? ¿Por qué los augurios de una debacle electoral mayor que la de 1983 no se cumplieron? ¿En realidad el electorado estaba avalando con su sufragio sesenta años más de un régimen que daba muestras de agotamiento por varios flancos?

Difícilmente se puede dar una respuesta precisa a todas -

estas interrogantes. Sin embargo, hay ciertos factores que explican lo que podríamos llamar la recuperación circunstancial del Partido Revolucionario Institucional:

1. En primer lugar, el sistema aprendió la lección electoral de 1988. El régimen mexicano demostró que si algo le queda es su extraordinaria pericia en el manejo de la alquimia y la inducción electoral para resarcir los errores estratégicos cometidos con anterioridad.

El operativo electoral de 1994 si bien no constituyó un fraude masivo y visible, si tuvo características claras de una maniobra fina que conjuntó varias estrategias para evitar una debacle en las urnas similar a la de hace seis años. Algunos factores explican esta situación:

- a) El control del padrón electoral.
- b) Una conjunción de operativos para inducir o alterar el voto: los mecanismos de Pronasol, el caso de las llamadas casillas especiales, etc.
- c) El control de la organización y preparación de las elecciones. A pesar de que se estrenaran los seis consejeros ciudadanos como miembros de la dirección del Instituto Federal Electoral y que se reformó el Tribunal Electoral para darle mayor certidumbre jurídica a las denuncias de irregularidades, el sesgo a favor del oficialismo prevaleció en el IFE y sus instancias similares en los estados de la República.

d) El control de los medios masivos de comunicaci3n. Por primera vez en la historia electoral mexicana se produjo un debate televisivo entre candidatos presidenciales, pero la fuerza del aparato propagandístico del régimen se volcó en los días previos a la elecci3n para favorecer a Zedillo.

2. En segundo lugar, el factor del miedo que, al parecer caló más hondo en la conciencia ciudadana de lo que muchos analistas previeron. El clima de inestabilidad que se generó desde el estallido guerrillero en Chiapas, seguido por la ola de secuestros a prominentes hombres de negocios y el asesinato de Colosio renovó el discurso a favor de la estabilidad conservadora que fue reforzada, hasta cierto punto, por los prohombres del sistema.

Una vez más se comprobó la hipótesis de que, en momentos de ruptura institucional, existe una fuerte tendencia hacia el conservadurismo en el orden político. El famoso adagio de más vale malo conocido operó en este sentido, aunque fuertemente inducido desde el gobierno y la iniciativa privada. Tal fue el caso del dirigente de los banqueros, Roberto Hernández, quien declaró que si triunfaba un candidato opositor se produciría una fuga masiva de capitales.

3. Como un tercer factor, la divisi3n en el seno de los dos partidos de oposici3n más importantes favoreció finalmente al Partido Revolucionario Institucional. La oposici3n se en-

trampó en el propio juego de la descalificación y careció de una estrategia conjunta para presionar por la limpieza de los comicios. El papel desempeñado por el segundo candidato en las preferencias electorales, Diego Fernández de Cevallos, comprobó que la estrategia seguida por el PAN durante el sexenio salinista proseguiría por más tiempo: capitalizar las divisiones dentro del gobierno y del neocardenismo sin plantear una ruptura y concertando posiciones políticas. Además, cosechaba el trabajo de más de cincuenta años de expansión territorial, sumamente eficaz en términos de votación.

Por su parte, el PRD pretendió revivir las mismas condiciones que en 1988, cuando el escenario estaba ya profundamente alterado: Carlos Salinas de Gortari gobernó finalmente y fue, hasta cierto punto exitosa, su estrategia de aislamiento y arrinconamiento del neocardenismo. Además, el PRD ya no contaba con el privilegio de la oposición radical. Una opción que se escudaba en las armas y con un amplio apoyo social se erigió en Chiapas y descalificaba al propio PRD, tal como sucedió en el anticlimático encuentro entre el candidato presidencial perredista Cuauhtémoc Cárdenas y el subcomandante Marcos. Por si fuera poco, el perredismo no cuajó como la opción democrática alternativa que se vislumbraba seis años antes, víctima de sus propias divisiones internas y del profundo sectarismo que alimenta a sus corrientes hegemónicas.

4. Por último, el aparato priísta, a pesar de sus divisiones, cerró filas a la hora de las urnas. La campaña zedi-

llista finalmente operó una alianza táctica con los grupos de poder hegemónicos dentro del priismo, destacando sobremanera la que se afianzó con el llamado Grupo Atlacomulco, comandado por Carlos Hank González, que prácticamente copó los espacios de decisión dentro y fuera del Partido Revolucionario Institucional.

Algunas muestras del poder del hankismo dentro del Partido Revolucionario Institucional fueron el nombramiento de Ignacio Pichardo Pagaza como nuevo dirigente del partido el 13 de mayo de 1994, durante una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional que aceptó la renuncia de Fernando Ortíz Arana.

El relevo significaba un virtual cobro de factura contra el político queretano que encabezó una minirrevuelta de la clase política priísta poco después del crimen contra Colosio. No obstante, Ortíz Arana justificó su abandono de la dirigencia - señalando que su candidatura al Senado le reclamaba mucho trabajo, mucho tiempo y todo mi esfuerzo.

Junto con Pichardo Pagaza, político cuya carrera siempre estuvo vinculada al padrinazgo hankista, fue electo el ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruíz Massieu como secretario general del partido. Considerado como uno de los teóricos salinistas del Partido Revolucionario Institucional, Ruíz Massieu destacó por su estrecha amistad con Carlos Salinas de Gortari, con Manuel Camacho Solís y con Colosio. Formó parte del núcleo original del llamado grupo compacto y estaba destinado

a ser el verdadero articular de la nueva reforma priísta.

De esta forma, en los mandos del Partido Revolucionario - Institucional quedaron dos eminentes representantes de los grupos de poder salinista: por un lado, un miembro de la camari-lla hankista, la única que garantizaba una articulación de alianzas económicas y políticas que aceptara la vieja maquinaria - priísta para ganar en los comicios; del otro lado, un político concertador que enlazara a la vieja y a la nueva clase política y, sobre todo, representara lealtad para los intereses del salinismo.

No obstante, el triunfo de Zedillo también tenía una factura. Todo el proceso previo a los comicios federales del 21 de agosto estuvo teñido por una cerrada pugna por las posiciones políticas. En todo este proceso, el fracaso de los métodos de selección de candidatos a senadores y a diputados se comprobó una vez más. La vieja aspiración democratizadora de la XIV Asamblea quedó para mejores épocas. La contrarreforma estaturaria de la XVI Asamblea no pudo evitar las escisiones. Los usos y costumbres de la cultura priísta se mantuvieron, aunque muchos de ellos tuvieran el signo de la imposición disfrazada de concertación.

Quizá una de las salidas más representativas fue la del viejo militante priísta Juan José Rodríguez Pratts, quien aspirô a ser candidato a senador por su entidad natal Tabasco. Pratts un destacado legislador antiperredista, fue relegado del proce

so de selección que dejó en el camino a otro tanto de políticos locales. A diferencia de otros correligionarios, Pratts - optó por renunciar a 26 años de militancia en el tricolor creando una minicrisis política en su entidad natal que se preparaba para la elección a gobernador, con un candidato opositor - fuerte, como Manuel López Obrador, otro expriista que militaba en el PRD, y un abanderado priista cuya fuerza estaba mermada por las luchas internas, como Roberto Madrazo.

En su renuncia pública ante la tribuna de la Cámara de Diputados, Rodríguez Pratts expresó su incredulidad hacia lo que antes, al parecer, no había notado:

Dudo seriamente que el partido pretenda hacer realmente - procesos electorales transparentes y que busquen fortalecer la vida parlamentaria de México, y por lo tanto, vigorizar la división de poderes.

Otro caso de rebelión dentro del partido fue la del ex gobernador de Chihuahua, Fernando Baeza, cuyo registro como precandidato al Senado fue rechazado. En un desplante público, - Baeza exigió la descentralización real del partido.

Los casos de Rodríguez Pratts y Baeza Meléndez fueron los más significativos del descontento y la inconformidad con los resultados de las selecciones priistas, pero no los únicos. Como ellos, en por lo menos 6 entidades se registraron otros signos de división por candidatos desplazados: San Luis Potosí, - Baja California, Chihuahua, Campeche, Jalisco y Michoacán, es-

tuvieron entre los más destacados. En todos, la fuerte presencia opositora agudizó el panorama de la correlación interna de fuerzas priístas.

En estas batallas estatales se pueden resaltar dos fenómenos conjuntos: a) el desplazamiento de la lógica de cuotas sectoriales y corporativas que permitió un equilibrio funcional - entre los organismos de la estructura indirecta priísta; y b) el fracaso de los métodos de selección, tanto en su vieja versión de alianza cupular como en su selectiva y amañada edición de elecciones internas.

Frente a un reconvertido sector popular que amenazaba con copar la mayoría de las posiciones en la Cámara de Diputados y - en la de Senadores, el viejo corporativismo presionó lo más que pudo para hacer valer su fuerza.

El 10 de mayo, frente a un proceso que se vislumbraba negativo para la CTM, el dirigente de los electricistas y miembro de la dirigencia cetemista. Leonardo Rodríguez Alcaine, - declaró que la Confederación tenía calculado ocupar el 25 por ciento de los escaños al Senado y un porcentaje similar para - la Cámara de Diputados, ya que aportaría al Partido Revolucionario Institucional unos 18 millones de votos de sus agremiados y familiares. Frente a estas cuentas alegres, la CTM perdió posiciones claves. A la Confederación le correspondieron sólo 11 candidaturas al Senado que tuvo que aceptar a cambio - de perder otras posiciones estratégicas que mantuvo siempre ba

jo su control: las del Distrito Federal, Jalisco y San Luis - Potosí, entre otros.

En la capital, el excanciller Fernando Solana y la dirigente priísta de la Cámara baja, María de los Angeles Moreno, se impusieron como candidatos al Senado, por encima de cetemistas como Juan José Osorio Palacios. En Jalisco, el cetemista Francisco Ruíz Guerrero perdió ante Eugenio Ruíz Orozco, en un proceso dominado por la turbiedad. En San Luis Potosí, el sector obrero vetó la convención estatal, al quedar excluido de las precandidaturas el dirigente de la FTE-CTM, Guadalupe Vega Macías. En Monterrey, la Federación Democrática de Obreros y Campesinos amenazó con una desbandada de sus 20 mil integrantes en oposición a la selección de los candidatos a la Cámara de Diputados, en especial a la del ex banquero Alberto Santos de Hoyos y al funcionario de Migración, Eloy Cantú.

El caso de la CNC fue más dramático. A la vieja central agraria sólo le correspondieron dos candidaturas al Senado que, en realidad, constituían más cuotas al salinismo que espacios de poder para la central campesina: Hugo Andrés Araujo fue nominado como candidato a senador por Tamaulipas y Melquiades Morales Flores, por Puebla. Fueron los dos únicos cenecistas que se salvaron de la limpia corporativa.

En contraposición, políticos con perfiles empresariales o de clase media, agrupados bajo los mimbretes del Movimiento Territorial ganaron más posiciones. Sin embargo, también varios

de sus representantes vivieron los efectos de la desarticulación priísta.

En Durango, por ejemplo, 12 mil militantes del MT abandonaron el Partido Revolucionario Institucional y formaron lo que ellos llamaron Movimiento Territorial Liberal. En Campeche, - el gobernador eminentemente colosista Jorge Salomón Azar, no - pudo imponer a su candidato Tirso Rodríguez de la Gala frente a sus rivales políticos José Trinidad Lanz Cárdenas y Layla Sansores Sanromán.

Como éstas, otras batallas locales demostraban el fracaso de los métodos de selección priísta, tanto en sus intentos democratizadores como en sus persistentes métodos de la concertación cupular.

La amenaza de la deserción, en muchos casos cumplida, constituyó el único mecanismo de protesta y presión política para hacer valer los intereses de grupos confrontados entre sí. El centralismo y el dedazo ya no se asumieron acriticamente. En este proceso el gigante dormido de la XIV Asamblea Nacional despertó en varios estados, aunque en muchos casos no eran precisamente las bases las que hablaran sino fracciones de las camarillas en pugna que buscaban reacomodo en medio de las rupturas en la familia revolucionaria.

La imposición de candidatos sorprendió en muchos casos - hasta a los propios postulados, como fue el caso del líder de

Los pequeños propietarios, Jesús González Gortázar, quien se enteró de su postulación horas antes de que se presentara la convocatoria el sábado 7 de mayo.

En varios estados, los gobernadores mantuvieron aún el privilegio del palomeo, pero en otros fueron marginados. Así sucedió con los gobernadores de Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Jalisco y Yucatán, sorprendidos por la nominación de los candidatos priistas. Hubo casos graves como el de Baja California Sur, donde el general José A. Valdivia, nominado para candidato a senador mantenía una relación tirante con el gobernador Guillermo Mercado Romero. O el de Yucatán, donde el gobernador por 18 meses Federico Granja Ricalde tuvo que asumir la postulación de la ex gobernadora interina Dulce María Sauri, representante de una camarilla opositora a la de Grnaja. O Hidalgo, en donde José Guadarrama Márquez fue postulado a pesar de sus desaveniencias con el gobernador Jesús Murillo Karam.

En fin, lejos de suscitar el consenso, la batalla por las nominaciones demostró hasta qué punto las reglas del juego estaban alteradas en el partido oficial y la dispersión de fuerzas se daba por varios flancos.

El Partido Revolucionario Institucional retornaba así a su prehistoria: cuando la lucha política en su interior no pasaba por ningún canal institucional sino por la confrontación directa entre grupos de poder locales.

El clima de división dentro del partido persistió a pesar de la recuperación electoral del 21 de agosto. El futuro equipo gobernante necesitaba de hábiles concertadores políticos y de operadores que negociaran con los grupos priistas las futuras posiciones de poder: el gabinete, las presidencias en las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados y el Senado, las carteras dentro del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, las candidaturas en los comicios municipales de Veracruz y Guanajuato y en las estatales de Tlaxcala, entre otras muchas posiciones.

Por si fuera poco, la tarea de la transición entre un sexenio tan conflictivo como el salinista y el que inciaría Zedillo reclamaba la participación de figuras que pudieran entrelazar al todavía desarticulado equipo de gobierno con los representantes de otros grupos y camarillas dentro del núcleo salinista, al tiempo que negociara con los partidos opositores un nuevo esquema de diálogo y negociación.

Para todas esas tareas, el ex gobernador Francisco Ruíz - Massieu se perfilaba como el político de enlace entre Zedillo, los legisladores priistas, los grupos de poder dentro del partido, los partidos opositores, el ex presidente salinista. Ruíz Massieu era la llave maestra del grupo compacto dentro del partido.

Justo cuando acudía a una reunión con los legisladores recién electos del sector popular, Ruíz Massieu fue arteramente

asesinado el mié^{er}coles 28 de septiembre, en pleno centro de la ciudad de Mé^xico, a la luz del día y ante los ojos expectantes de decenas de testigos que presenciaban el segundo crimen político en menos de un año.

Carlos Salinas de Gortari calificó el atentado como un crimen aberrante, mientras voceros de la oposición y del propio partido gobernante reclamaron una investigación creíble.

El crimen era, una vez más, un atentado contra la estabilidad del sistema. Varios factores le daban una dimensión de crisis política:

1. El ex gobernador guerrerense era el segundo miembro del núcleo salinista que moría asesinado en menos de un año. Primero fue el heredero al cargo presidencial, ahora era uno de los seguros herederos de la dirigencia priísta y, según pronosticaban algunos futuristas, el auténtico tapado para el año 2000. En otras palabras, los dos personajes políticos perfilados para tener el mando en las dos instituciones claves del sistema (presidencia de la República y partido oficial) habían sido ultimados, reeditando escenas que recordaban más al México posrevolucionario de los veintes que al México moderno que buscaba ingresar al primer mundo.

2. El crimen enturbiaba el difícil periodo de transición sexenal, entre un presidente engolosinado por el poder y un candidato electo que, con todo y la fuerza de los votos, no tenía fuerza política genuina para articular un equipo propio. Ese

interregno se ensangrentaba con un asesinato que disparaba nuevamente acusaciones hacia todos los flancos del sistema: el - narcopoder, el salinismo en su pretensión de maximato, la línea dura del Partido Revolucionario Institucional, los damnificados políticos del sexenio, etc. La dificultad de entablar una agenda democrática para resanar las sospechas del fraude y las heridas abiertas por Chiapas y el caso Colosio se acrecentaban en medio de los barruntos de violencia.

3. El Partido Revolucionario Institucional se convertía una vez más en el principal organismo afectado ante el crimen. El partido en el poder demostraba su incapacidad orgánica para dirimir en forma pacífica y negociada las pugnas por los espacios de poder. Desde el principio, la responsabilidad del crimen apuntó a un núcleo de políticos tamaulipecos presuntamente descontentos por su desplazamiento en posiciones de poder locales. El diputado Manuel Muñoz Rocha, presidente de la comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, fue señalado casi de inmediato como el autor intelectual del crimen.

4. El homicidio de Ruíz Massieu constituía también un crimen contra la seguridad nacional, ya que se hilvanaba por su forma y su impacto con los otros dos grandes asesinatos del sexenio: el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el del candidato presidencial Luis Donald Colosio. Los tres confirmaban un modelo de desestabilización y descomposición política - similar al de los países como Colombia. Junto con el crimen -

politico destacaban los secuestros a prominentes hombres de negocios -el del banquero Alfredo Harp Helú en forma destacada-, las amenazas de atentados terroristas en diversos puntos de la capital, los fraudes detectados en contra de instituciones financieras -la arrendadora Havre y Banco União-, involucradas presuntamente en el lavado de dinero proveniente del comercio de la droga.

En fin, el crimen contra Ruíz Massieu formaba parte de un menú con ingredientes explosivos que obligaban a reflexionar -sobre la creciente colombianización mexicana, término utilizado para destacar las semejanzas entre los sucesos desestabilizadores en el país andino y los que se registraban en nuestro país.

Para el régimen, el problema nuevamente era el de la credibilidad. Resolver pronto y en términos creíbles el crimen -del secretario general priísta era una nueva emergencia sexenal.

El presidente Carlos Salinas de Gortari decidió nombrar -como subprocurador especial del caso al hermano del político -ultimado, Mario Ruíz Massieu, un abogado con fama de investigador eficiente y de mano dura que ocupó la nada prestigiada subprocuraduría de lucha contra el narcotráfico.

En forma casi instantánea, Mario Ruíz Massieu entró en -confrontación con el sistema y, específicamente, con la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. A diferencia

del crimen contra Colosio, asesinato que hasta ese momento se mantenía en el terreno nebuloso de la narcopolítica y oficialmente se manejaba como producto de un asesino solitario, el de Ruíz Massieu pronto destapó una verdadera cloaca que agudizó la división al interior del partido y su relación con el gobierno.

Para el hermano del político asesinado, los principales responsables del asesinato de su hermano provenían de la clase política priísta. Acusó a la secretaria general sustituto del partido, María de los Angeles Moreno, y al presidente del mismo, Ignacio Pichardo Pagaza, de encubrir a los asesinos intelectuales de su hermano y, de paso, también arremetió contra su jefe, el procurador general Humberto Benitez Treviño.

Durante mes y medio, el subprocurador y la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional protagonizaron una batalla en los medios impresos que, si bien no concluyó en la consignación penal de ninguno de los políticos mencionados, si generó una crisis tanto o más grave que la del asesinato de Colosio.

En el fondo, esta crisis reflejaba no sólo las desaveniencias entre un subprocurador y la dirigencia priísta sino las rupturas profundas en el seno de una élite que llegó al poder con intenciones de perpetuarse más allá del milenio y que, apenas cumplido un sexenio, revelaba las grietas homicidas en su interior.

Ruiz Massieu ordenó que se investigara a los responsables de la fuga de Muñoz Rocha, a quien desde entonces se le dió por muerto, y abrió un expediente que involucraba a prominentes hombres del salinismo y de la estructura priísta. Entre el 14 y el 23 de noviembre, el sistema vivió otra semana intensa: Ruíz Massieu acusó a Pichardo Pagaza y a Moreno de proteger a los -autores criminales, ambos respondieron que las acusaciones eran graves y se realizaban sin contar con ningún sustento, el presidente Carlos Salinas de Gortari terció en la pugna indicando que las diferencias entre la PGR y el Partido Revolucionario -Institucional eran sólo de forma y no de fondo.

El 18 de noviembre muere la viuda de Colosio, Diana Laura Riojas, víctima de una desnutrición avanzada y de insuficiencia hepática. Con su muerte, se cerraba también simbólicamente a una de las figuras aglutinadoras del colosismo.

El 23 de noviembre, en medio de las tensiones desatadas -por sus acusaciones, Mario Ruíz Massieu se retira de la batalla asestando otro golpe político: presenta un polémico informe en donde acusa a la clase política priísta de encubrir criminales y al presidente de la República de estar maniatado por los compromisos con esa clase política; renuncia a la subprocuraduría y al Partido Revolucionario Institucional.

En el informe, Ruíz Massieu da su propia interpretación -de los hechos delictivos suscitados ese año: 1994 es un año que marcará políticamente la historia de México, un año en el que

se registran los homicidios del candidato priísta a la presidencia de la República, Luis Donald Colosio, y del secretario general del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Ruiz Massieu, asesinatos que cuando menos debieran servir para acelerar el paso a la democracia y para que ésta permee a todo el país.

Tuve que infrentar al Partido Revolucionario Institucional y lo hice, sin embargo, pudo más la clase política priísta que la voluntad de un presidente, pudo más la calse política priísta que la justicia y la verdad que buscaban un presidente.

Para rematar, Ruiz Massieu concluía:

El pasado 28 de septiembre una bala mató a dos Ruiz Massieu a uno le quitó la vida y a otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priísta se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado.

Y mientras Ruiz Massieu alertaba que los demonios andaban sueltos, el presidente encabezaba un acto de desagravio a favor de Moreno Uriegas, premiada como la Mujer del Año y en las oficinas del CEN priísta, Pichardo Pagaza contraatacaba anunciando que dmandaría al ex subprocurador y el propio procurador Benitez Treviño aseguraba que su ex subordinado nunca aportó pruebas de sus imputaciones.

Las descalificaciones contra Ruiz Massieu vinieron en cascada por parte de miembros del partido oficial. El mismo ofre

ció entrevistas periodísticas que desnudaban todavía más el con tubernio entre políticos de la vieja guardia y secretarios de Estado, a los cuales nunca menciona por su nombre.

Sin embargo, para esos mismos días, ya se ventilaban las primeras pistas que orientaban la investigación del caso Ruíz Massieu a otros actores. El 21 de noviembre, dos días antes - de la renuncia del subprocurador, el semanario Proceso publicó un amplio reportaje sobre Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, en donde destaca los nexos de éste con Muñoz Rocha, sus desavenencias con Francisco Ruíz Massieu, su excuñado y sus vínculos con el narcotráfico, entre otros puntos delicados.

El escritor Carlos Fuentes declaraba ante la prensa lo que se podría tomar como la síntesis de lo que sucedía en la capital del poder político:

Cuando un subprocurador acusa al presidente de un partido de entorpecer una investigación, quiere decir que algo anda muy mal. Uno se pregunta: ¿Quieren acabar con el Partido Revolucionario Institucional? Y resulta que es el Partido Revolucionario Institucional el que está acabando con el PRI. Parece - que el PRI ha salido a asesinarse a sí mismo, a suicidarse. Hay priistas matando a priistas.

La realidad pronto superó a la ficción. Lo que tres meses atrás habían sugerido las revistas y los columnistas críticos del salinismo se convirtió el 28 de febrero de 1995 en el mayor escándalo político en la era del régimen priista: el pre

sidente Ernesto Zedillo anunciaba la detención de Raúl Salinas de Gortari como presunto autor intelectual de su excuñado, José Francisco Ruíz Massieu. En respuesta, su hermano, el expresidente, realizaba un insólito ayuno de 48 horas para limpiar su nombre y el de su herencia política y financiera, en medio de la peor crisis económica que un gobierno priísta hubiera tenido en décadas.

De un solo golpe, la herencia trágica del salinismo se lanzaba contra el propio expresidente, mientras su sucesor Ernesto Zedillo abría la caja de Pandora que hasta ahora no cierra: detrás de los crímenes en la clase política priísta se descubría el ocaso de una élite que se autopromovió como un grupo compacto y transexenal, el declive de un partido gubernamental que en su pendiente demuestra una incapacidad estructural para reformarse y la falta de pericia de un gobierno que ascendió en condiciones de emergencia política.

La ruptura entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo fue el inicio de una batalla sorda al interior del otrora grupo de interés salinista, pero no resolvió ninguno de los puntos conflictivos que detonaron con el gobierno de Ernesto Zedillo. Por el contrario, se vino a sumar a las tres vertientes críticas que han acompañado a la crisis del régimen priísta:

1. En el ámbito económico, el 19 de diciembre de 1994 inició la pesadilla para el gobierno y la sociedad mexicana. Rompiendo con el mito de la estabilidad cambiaria, el gobierno de

Zedillo decidió devaluar en 15 por ciento el peso -ampliación de la banda de paridad cambiaria, le llamaron eufemísticamente- provocando el desquiciamiento de los mercados financieros. A los dos días, la paridad de la moneda se disparó, el retiro del mercado por parte del gobierno y la falta de comunicación generaron un clima de incertidumbre que llevó a inversionistas extranjeros y nacionales a retirarse del circuito financiero.

El 29 de diciembre, el fugaz secretario de Hacienda y otro héroe del Tratado de Libre Comercio, Jaime Serra Puche, renunciaba al cargo, convirtiéndose en el primer caído de un gobierno que apenas iniciaba. En su carta de renuncia, Serra reconoció que fue errónea la estrategia gubernamental de enfrentar gradualmente el desequilibrio de la cuenta corriente y que se subestimó el problema en los análisis elaborados para planear el programa económico de 1995.

Frente a las acusaciones de haber cometido graves errores en la instrumentación de la devaluación del peso, Zedillo contraatacó echándole la responsabilidad a la herencia de su antecesor.

El tamaño del déficit de la cuenta corriente y la volatilidad de los flujos de capital con que se financió, hicieron muy vulnerable a nuestra economía.

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a ser tan grande durante los últimos años que, dadas las

circunstancias internas y externas, era insostenible. Es preciso reconocer que hubo subestimación del problema, y esta subestimación fue sumamente grave, recalcó Zedillo.

Sin embargo, ni los discursos tronantes contra el salinismo que comenzaron a circular en las filas de los que antes alabarón el modelo, ni la firma de un improvisado pacto económico, ni el reconocimiento presidencial de que México ya no era un país rico ni tenía una economía sólida evitaron la sangría de capitales y la inestabilidad financiera.

El país entró en la más cruda recesión de su historia. - Junto con ella, se agudizó la dependencia al capital financiero estadounidense que vino en rescate del modelo: que hacía agua por todos lados e impactaba a otros mercados emergentes de Latinoamérica (el famoso Efecto Tequila). De un plumazo, el gobierno de Ernesto Zedillo se endeudó con 23 mil millones de dólares frente al FMI y el gobierno de Estados Unidos elevando a 164 mil millones de dólares la deuda externa del país, cifra sin precedente en la historia del país.

Con la devaluación del peso y de las expectativas, la figura de Carlos Salinas de Gortari, promovido entonces como futuro dirigente de la Organización Mundial de Comercio, se vino abajo también.

El propio modelo neoliberal se alteraba. Ya no se trataba de consolidar lo logrado con 12 años de severos ajustes mo-

netaristas sino de agudizar las recetas aplicadas durante ese periodo a costa de miles de empresas y millones de trabajadores. En otras palabras, Zedillo estrenaba su gobierno entrando a la crisis de la crisis.

2. En el terreno político, lo ganado en las urnas el 21 de agosto pronto comenzó a perderse para el régimen priista y el gobierno zedillista. El homicidio de Ruíz Massieu fue una bala certera sobre el aparato priista, pero más fuerte fue el impacto de la crisis económica que le cobró muy cara la factura al Partido Revolucionario Institucional con la derrota de Jalisco, la tercera entidad en importancia del país, a manos del PAN. Además de la pérdida de Jalisco los tres primeros meses del gobierno de Zedillo estuvieron marcados por la renuncia obligada de Eduardo Robledo después de un fallido operativo represor en Chiapas y el conflicto poselectoral en Tabasco en donde el Revolucionario Institucional hizo despliegue de sus viejas y acendradas mañas de cooptación y compra del voto.

Zedillo desde el principio de un mandato no acertó a establecer una relación clara con el partido oficial, el cual aún se debate frente a la línea zigzagueante del presidente que a ratos decide que ya no se involucrará más en la vida interna del priismo y en otros momentos impone su voluntad en forma errática y sin autoridad. Por ejemplo, a contrapelo de muchos priistas, Zedillo decidió mantener a María de los Angeles Moreno en la estructura dirigente del partido, pero ya no como secretaria general sino como presidenta del Comité Ejecutivo Na-

cional, en lugar de Ignacio Pichardo Pagaza, quien se sumó al gabinete presidencial. Ambos nombramientos generaron un descontento por partida doble: entre los llamados dinosaurios que veían en Moreno a una dirigente débil, con el sello salinista como un estigma y entre los sectores reformistas del partido - que reconocían en la exdirigente legislativa a una simple correa de transmisión del grupo salinista, sin autoridad ni representatividad ante los otros grupos internos del partido.

Esa estrategia zigzagueante prácticamente inició con el caso tabasqueño y le siguió el conflicto en Chiapas, la reacción de los sectores más reacios al cambio ante la derrota de Jalisco y el reagrupamiento de los cacicazgos locales como en el caso de Yucatán.

En Tabasco, el perredismo se movilizó desde diciembre para impedir el arribo del priísta Roberto Madrazo, quien oficialmente venció a Manuel López Obrador en una contienda plagada de irregularidades. El PRD llegó a bloquear las instalaciones de Pemex en demanda de que se limpiara el proceso. El gobierno de Zedillo, a través de Esteban Moctezuma, buscó repetir el método salinista de nombrar a un interino para convocar a nuevos comicios y frenar la polarización.

Lo que no previó el gobierno zedillista fue la reacción - airada no sólo de las huestes priístas en Tabasco que echaron abajo la concerta-cesión sino el efecto dominó de la rebelión tabasqueña que hizo renacer todas las cuentas pendientes entre

los grupos de poder priísta locales y el gobierno y permitió - que otros copiaran el método de Madrazo, como fue el caso de - Eduardo Robledo en Chiapas, o que se retornara al viejo método de las candidaturas de unidad para disfrazar las imposiciones de grupos de poder locales como en el caso de Víctor Cervera - Pacheco en Yucatán.

Con la idea de frenar la tensión, el 6 de febrero, Zedillo reunió a toda la república priísta (dirigentes nacionales y estatales, diputados, senadores y coordinadores regionales) para afirmarles que su gobierno mantendría con el Partido Revolucionario Institucional una sana distancia y aclararles que - su misión no era liquidar al Partido Revolucionario Institucional.

Seis días después, el candidato priísta a la gubernatura de Jalisco, Eugenio Rufz Orozco, tuvo que reconocer su aplastante derrota frente al panista Alberto Cárdenas, quien lo venció con el 57 por ciento de los votos frente al 38 por ciento del tricolor, es decir, casi 20 puntos porcentuales de diferencia en una de las entidades que se preciaba de ser bastión priísta hasta antes de 1988.

En otras palabras, frente al vacío de autoridad y ante el evidente desgaste de la estructura partidista tras el ocaso del salinismo, el partido oficial entró a su fase de mayor desarticulación interna, debatiéndose entre la reforma hacia adelante o el retorno a su prehistoria.

En este dilema, los espacios políticos vacíos los ha ido llenando la oposición, en especial el PAN. Del otro lado, la debilidad presidencial y del gobierno federal en su conjunto - se ha enfrentado al reagrupamiento de los grupos de poder regionales. De acuerdo con el expriísta y excandidato a gobernador tabasqueño por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, lo que se vive es una especie de feudalización del poder. Es decir, el predominio de los cacicazgos regionales y eso no puede ser federalismo.

3. El clima de tensión provocado por la crisis económica y las tensiones entre el gobierno y el partido oficial, se sumó la crisis del aparato de seguridad nacional, con un especial énfasis en el viraje que tomó el conflicto chiapaneco del 9 al 15 de febrero, lapso en el que el ejército desplegó nuevamente sus tropas en la zona controlada por el EZLN, la Procuraduría General de la República se lanzó a la búsqueda de Rafael Sebastián Guillén Vicente, el nombre del presunto subcomandante Marcos, el gobernador Eduardo Robledo Rincón pidió licencia para separarse del cargo, y finalmente el gobierno zedellista volvió a recular ante la inestabilidad generada en el entorno financiero y las críticas internas por su inoperante estrategia de mano dura en Chiapas.

Acorde con su estilo de falta de operatividad y carente de precisión, el gobierno de Ernesto Zedillo generó una nueva turbulencia que afectó la cohesión de su propio gabinete y su

relación con los partidos políticos, la prensa nacional e internacional y grupos internos priistas que criticaron casi al unísono el viraje dado al conflicto chiapaneco.

El secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma llegó a confesar ante legisladores y dirigentes del PRD que él mismo - había sido marginado de este operativo y figuras como Manuel - Camacho reaparecieron declarando que la única vía para solucionar el conflicto chiapaneco es mediante el diálogo.

La sombra de la mano dura fue confirmada por Zedillo el 19 de febrero, cuando frente a los militares expresó que ningún mexicano ni el gobierno y menos el presidente de la República, puede abdicar a la preservación de la soberanía en todo el territorio nacional. Este discurso parecía retornar la posición oficial a los primeros días de enero de 1994 cuando el conflicto chiapaneco estremeció a la sociedad y rompió con las expectativas del gobierno salinista.

En medio de ese clima, la PGR desechó la hipótesis del asesino solitario en el homicidio de Luis Donald Colosio, hipótesis que se mantuvo durante el sexenio salinista, y anunció el 24 de febrero la detención del segundo presunto asesino material. De esta forma se volvía a ventilar el tema del complot en el crimen contra Colosio y el presunto encubrimiento del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

En una nota publicada en el diario norteamericano The New York Times el 26 de febrero se citaba a un alto funcionario del

gobierno mexicano que manifestaba que en el caso Colosio las cosas fueron encubiertas durante el gobierno anterior. Hubo cosas que fueron oscurecidas y cosas que fueron escondidas.

Cuatro días después, el presidente Ernesto Zedillo anunciaba la detención de Raúl Salinas de Gortari, acusado de ser el autor intelectual del crimen contra José Francisco Ruíz Massieu. Fue entonces cuando el país pasó de la guerra chiapaneca a la guerra entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

El expresidente armó su propio escándalo. Cabildeó internamente, hizo declaraciones a los dos principales noticiarios de televisión, 24 horas y Hechos, para defender el honor y la dignidad de su gobierno y para reafirmar que tenía plena confianza en la inocencia de mi hermano. En contraataque, el fiscal especial del caso, Pablo Chapa Bezanilla, destacó que el crimen contra Ruíz Massieu respondía a móviles políticos y personales, ya que el exgobernador de Guerrero podría haber estado oado el proyecto salinista. El presidente Ernesto Zedillo, con la intención de mediar en lo que parecía sólo una pugna entre la PGR panista y el salinismo declaró a un grupo de reporteros que la detención de Raúl Salinas de Gortari no respondía a un asunto personal contra el expresidente sino como un asunto de leyes. De paso, calificó a Carlos Salinas de Gortari como un mandatario que pasará a la historia por ser un buen presidente, un presidente renovador.

A pesar de este gesto reconciliador, Carlos Salinas de -

Gortari en un hecho insólito inició una huelga de hambre en Monterrey con el propósito de que Zedillo reconociera que la crisis financiera desatada en el país se debía a los errores de diciembre y no a la herencia que dejó su sexenio y que no hubo encubrimiento de su gobierno en las investigaciones de los crímenes de Colosio y Ruíz Massieu. Ni una palabra más en defensa de su hermano.

Para zanjar las diferencias, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo convinieron el exilio del primero, a cambio de que se le eximiera de los cargos de encubrimiento en los crímenes políticos de Colosio y Ruíz Massieu.

De esta forma, se pretendía renovar un pacto de continuidad sexenal, al menos en el ámbito del proyecto económico, frenar la inestabilidad en los mercados financieros, y resanar las heridas en el seno del grupo salinista-cordobista, al cual perteneció el propio Zedillo.

El martes 3 de octubre, el periódico Reforma publicaba bajo el siguiente encabezado Propuso Zedillo a Colosio Pactar con Carlos Salinas de Gortari, una amplia nota basada en una carta que el actual mandatario le envió al entonces candidato priísta el 19 de marzo de 1994, cinco días antes de su asesinato, en su calidad de jefe de campaña colosista.

En síntesis, la misiva era un análisis de los acontecimientos surgidos en esos meses, cuando la campaña estaba opacada por la crisis chiapaneca, el protagonismo de Camacho e insis-

tentes rumores sobre el posible relevo de Colosio. Zedillo le recomendaba pactar con Carlos Salinas de Gortari y le alertaba sobre la influencia creciente de personas mal intencionadas en el ánimo del presidente, en referencia clara a Manuel Camacho Solís, su principal rival político en el seno del otrora grupo compacto.

La publicación de la carta detonó un escándalo político, al cual contribuyó el propio presidente de la República Ernesto Zedillo, con una respuesta fuera de tono al periódico Reforma y una campaña para reorientar el trasfondo de la carta.

La misiva confirmaba tres hechos importantes:

1. Existía un distanciamiento serio entre Carlos Salinas de Gortari y Colosio originado por la estrategia del segundo - de evitar la pretensión del maxímatu salinista. La carta corroboraba el nivel de gravedad de ese distanciamiento.

2. En la percepción del llamado grupo de interés comandado por José Córdova, el principal enemigo a vencer era Manuel Camacho, quien mantuvo en la ambigüedad su intención de postularse a la presidencia de la República y sirvió como una pieza de recambio salinista. Zedillo, como jefe de campaña y pieza clave de Córdova en el equipo colosista, alertaba a Colosio de la influencia que tenía Camacho sobre Carlos Salinas de Gortari.

3. El caso Colosio no estaba cerrado. La hipótesis de que el candidato priista fue víctima de un complot político en

cabezado por Carlos Salinas de Gortari, por Córdoba o por ambos no se desechaba y la carta confirmaba las sospechas.

Por lo pronto, tanto las dirigencias del PRD como del PAN y sus respectivas fracciones parlamentarias aprovecharon la coyuntura para reclamar la comparecencia de Carlos Salinas de Gortari y José Córdoba. Porfirio Muñoz Ledo, líder del PRD, indicó que si no se realizaba tal juicio se comprobaba el maxinato estructural del salinismo y Ernesto Zedillo seguiría siendo el secretario de Programación y Presupuesto de un señor que está prófugo.

En el Partido Revolucionario Institucional la dirigencia reaccionó con cautela, pero voceros del colosismo como Alfonso Durazo declararon sin ambages que la carta prueba la ruptura - entre el presidente y el candidato, base de la hipótesis de la autoría intelectual de Carlos Salinas de Gortari y José Córdoba.

Frente a esta presión política, el gobierno de Zedillo y buena parte de los personeros del régimen decidieron reorientar el escándalo primero, descalificando la publicación de la carta y segundo, emprendiendo una campaña de desprestigio contra Manuel Camacho, al cual convirtieron nuevamente en víctima heroica a los ojos de muchos observadores y ciudadanos que presenciaban el grado de descomposición que existía ya en el seno del otrora grupo compacto.

Rompiendo las tradicionales reglas del sistema, Zedillo - envió una carta al periódico Reforma el 4 de octubre en la cual

fustigaba la publicación de la misiva a Colosio con los siguientes argumentos: No encuentro ninguna razón moralmente válida para revelar una comunicación estrictamente privada hecha desde la perspectiva de una relación de trabajo, amistad y comunión de ideales, que sólo concernió al licenciado Colosio y su servidor y, de paso, señalaba que ese documento debió haber sido sustraído dolosamente de los archivos del propio licenciado Colosio.

Un día después de que Zedillo declarara ante periodistas que el pueblo estaba harto de la presidencia autoritaria y que él no influiría en las investigaciones del crimen contra Colosio. En Cancún, el secretario de Gobernación Emilio Chuayfett decidió emprender todo el peso de su cargo contra Camacho, a quien sin llamarlo por su propio nombre le dedicó más de 30 minutos de su discurso para fustigarlo con calificativos como mártir artificial, protagónico, ambiguo, etc. En la parte central de su embestida, Chuayfett tronó contra Camacho indicando: Que no se vayan a llamar mártires quienes generaban artificialmente problemas para emerger concertadores, quienes emplearon sus cargos para reclutar propágandistas; quienes incurrieron en el desvío del poder, en su afección jurídica, para causar daño a México y alcanzar más poder.

Camacho respondió a su vez con una carta en la cual retaba a Chuayfett a sostener un debate público para demostrar que no hay una línea de exclusión contra él y acusaba al gobierno de Zedillo de convertirlo en su principal enemigo político y -

de colocarlo en riesgo personal. Textualmente, Camacho resaltó en su misiva.

El país no había visto antes, ni siquiera en los momentos de mayor tensión, que el responsable de la política interior - se lance públicamente contra opositores o contra un ciudadano del modo que usted lo hizo en Cancún.

Ni siquiera la costosísima y torpe decisión de expulsar - del Partido Revolucionario Institucional al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, con aquel discurso-celada con el que se les ofendió duramente durante la XVIII Asamblea. Eso se hizo en el Partido Revolucionario Institucional y no por el secretario de Gobernación.

Ahora, la opinión pública observa al responsable de la concordia nacional, a quien legalmente le corresponde proteger los espacios del diálogo político, utilizar los recursos del Estado en una ofensiva contra un ciudadano o un opositor. En un Estado de derecho eso no lo hace el ministro de la política.

Dice un talentoso abogado laboral, que el puesto no hace al hombre, sino que el hombre hace al puesto. Tiene razón: hay quienes convierten una comisaria en un ministerio y quienes convierten un ministerio en una comisaria. ¿Quiere usted ser el ministro de la política, de la transición pactada, o quiere usted ser el ministro de la policía? Escoja.

Al mismo tiempo, mandó una misiva al padre de Luis Donal-

do Colosio, en la cual expresaba que sólo en los regímenes totalitarios se disocian las responsabilidades para facilitar la supresión de derechos humanos y perseguir a quienes disienten políticamente.

Chuayfett le respondió en su propio tono: rechazaba sostener un debate público, negaba que existiera una línea de exclusión en su contra, justificaba su discurso en Cancún como la manifestación de un ejercicio de libertad de expresión y en tono socarrón e irónico le recordaba su falta de lealtad y su obsesión por alcanzar la presidencia de la República.

El desenlace lógico de esta embestida contra el exregente capitalino fue la reuncia de Manuel Camacho al Partido Revolucionario Institucional. El 13 de octubre, Camacho anunció su retiro del partido oficial en el cual militó por casi treinta años. En ese documento, consideró que no hay voluntad de hacer el cambio de régimen ni la reforma verdadera del Partido Revolucionario Institucional y que su opción estaba a favor de un centro democrático amplio.

Aunque su renuncia simplemente confirmaba la situación de distanciamiento político vivida desde el crimen contra Colosio, la salida de Camacho constituía el colofón de una larga batalla en el seno del otrora grupo compacto que, lejos de culminar, - se acrecienta e impacta sobre el futuro del gobierno de Ernesto Zedillo y del partido oficial.

Por lo pronto, este episodio adquirió una dimensión mayor por los siguientes hechos:

1. La publicación de la carta y la renuncia de Camacho - se produjeron en los momentos de mayor debilidad política del presidente Ernesto Zedillo frente al reagrupamiento de las viejas camarillas políticas y de la propia élite salinista.

Unas semanas atrás, el expresidente Luis Echeverría reapareció en compañía del gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, - demandando la comparecencia de Carlos Salinas de Gortari para que aclare la crisis económica y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. A su vez, el ex secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios reapareció el 30 de agosto dando a conocer - sus memorias políticas, Diálogos con el hombre, el poder y la política y, como lo hiciera Manuel Camacho el 16 de septiembre en Monterrey, marcó su distancia frente al gobierno salinista del cual formó parte. Camacho fue más allá de Gutiérrez Barrios y declaró incluso en la Universidad Iberoamericana que - no estaba dispuesto a apoyar a Zedillo a la vieja usanza. La ausencia de liderazgo se traduce en desorden y anarquía; renunciaré al Partido Revolucionario Institucional si no hay cambios de fondo; la estabilidad del país está sujeta a la democratización del Partido Revolucionario Institucional, declaró en aquella ocasión.

2. La rearticulación de los grupos priistas se explicaba también como resultado de la crisis de cohesión que se agudiza

ba en el seno del partido oficial. A la derrota de Jalisco, - le siguió la derrota electoral en Guanajuato frente al panista Vicente Fox, la continuidad del gobierno panista en Baja California con el triunfo de Héctor Terán y la apretada e impugnada victoria de Víctor Cervera Pacheco en Yucatán, lo cual provocó el distanciamiento más serio entre la dirección nacional panista y el gobierno de Zedillo.

Tras estos acontecimientos que resaltaban la dificultad - cada vez mayor del Partido Revolucionario Institucional por sotener sus triunfos electorales, se realizó el relevo de la dirigencia nacional priísta. La Mujer del Año María de los Angeles Moreno fue sustituida por el político neoleonés, Santiago Oñate, otra figura vinculada de tiempo atrás con Carlos Salinas de Gortari y José Córdoba.

Moreno apareció, momentáneamente, como la víctima propietaria de las derrotas electorales del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, Guanajuato y Baja California. En su discurso destacó que ella renunciaba porque estaba convenida de que el partido requiere una renovación de actitudes, por que tengo la certeza de que esta etapa de la vida nacional exige (someter) el interés personal al superior de la nación, por que la ambición de poder debe estar sujeta siempre por valores políticos superiores.

En su lugar, Oñate asumió la dirigencia en un acto frío y con un discurso que no se comprometía en ninguna línea con la

continuidad de las reformas aprobadas el sexenio pasado ni con ningún proyecto democratizador novedoso.

Para Oñate, más importante que la relación entre el gobierno y el partido es la relación entre el Partido Revolucionario Institucional y la sociedad. Aquí no hay distancia que quepa. Aquí sólo la cercanía habrá de dar vitalidad y habrá de dar congruencia a una acción política que no podrá agotarse ni quedarse en la sola emisión del voto ni en la organización de una -
elección.

Junto con Oñate, el Teórico de la CTM, Juan S. Millán Lizárraga ocupaba la secretaría general del partido en lugar de Pedro Joaquín Coldwell. El ascenso de Millán se interpretó como una clara concesión a favor de la CTM distanciada en ese momento el gobierno de Zedillo.

3. Por último, el vodevil encabezado por Chuayfett y Camacho buscaba distraer la atención del problema de fondo que se traslucía en la publicación de la carta de Zedillo a Colosio: -
la inegable tensión entre los intereses de Carlos Salinas de -
Gortari y los del entonces candidato presidencial priísta que colocaba al expresidente como uno de los principales sospechosos de la autoría intelectual del crimen contra Colosio.

Apenas un días después de que se publicara la carta, el -
procudador general Antonio Lozano Gracia aseguró ante diputados federales que el atentado contra Colosio era producto de una -
acción concertada. Ante la insistente pregunta de los perrediso

tas en torno a si se debe llamar o no a Carlos Salinas de Gortari y José Córdoba, Lozano dijo que la PGR citaría a declarar a todos aquellos que puedan aportar nuevos elementos o resulten indiciados.

El dirigente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, destacó que cada día que pasara sin que se citara a Carlos Salinas de Gortari el gobierno de Ernesto Zedillo perdía capacidad de maniobra y credibilidad.

4. Por último, el esquema económico zedillista recibía un nuevo embate especulativo que culminó con una devaluación que colocaba al peso en 8.50 nuevos pesos frente al dólar, es decir, una depreciación del 30 por ciento frente al dólar y rompía con las expectativas para 1996, basada en una inflación no mayor del 20 por ciento, un crecimiento del PIB del 3 por ciento y una paridad cambiaria que se asentara en 6.50 nuevos pesos.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La transformación política del Estado Mexicano en la actualidad, es toda una realidad. A partir del año de 1988 el pluripartidismo político con las elecciones federales de ese año determinaron la realidad política que guiaría al Estado Mexicano hasta nuestros días.

SEGUNDA.- Los grupos políticos en México dejaron de pertenecer al partido oficial en el poder (PRI) y la gran mayoría de partidos políticos empezaron a surgir en México.

TERCERA.- El desequilibrio político del Estado Mexicano se da, por los problemas internos que se gestan entre el PRI partido oficial, y el poder ejecutivo.

CUARTA.- El desequilibrio político del Estado Mexicano se da por los siguientes problemas que ocurre en México: La muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el levantamiento del Ejército Zapatista en Chiapas, la muerte del Cardenal Adolfo Posadas Ocampo, la muerte de Mario Ruíz Massieu y la llegada al poder de Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

QUINTA.- La caída del sistema político en el Estado Mexicano se debió a la caída de las tendencias del llamado liberalismo social que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari aplica con todas las reformas que a nuestra Constitución Política se le realizaron.

SEXTA.- Las últimas dos políticas sexenales del partido oficial en el poder PRI, han determinado el cambio político que en la actualidad está sufriendo nuestro Estado Mexicano que es la cristalización del Partido Acción Nacional y la llegada al poder del Partido de la Revolución Democrática.

SEPTIMA.- El actual ejercicio del poder político de Ernesto Zedillo Ponce de León, han chocado con la política de su partido PRI, lo cual determina todo un cambio político en la democracia de nuestro país.

OCTAVA.- La propuesta que hago, en este tema de tesis es que haya una cultura política dentro de la Constitución Política que nos rige para todo aquel ciudadano que quiera participar en ella y, que en la división de poderes del Estado Mexicano se resalte la autonomía de ellos, para que se fortalezca la democracia de las estructuras políticas de nuestro país. El cambio político en nuestro Estado es toda una realidad y el partido oficial en el poder se esta transformando PRI.

BIBLIOGRAFIA

- ANDRADE SANCHEZ, Eduardo. Teoría General del Estado. Edit. - Harla, México, D. F., 1987.
- ARNAIZ AMIGO, Aurora. Ciencia Política. Edit. Antigua Librería Roblero.
- ARNAIZ AMIGO, Aurora. Ética y Estado. Textos Universitarios, UNAM, México, D. F., 1975.
- ARNOLD, Robert F. Cultura e Ideales del Renacimiento. Edit. Monó. México, D. F., 1975.
- BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, Agustín. Teoría del Estado. Edit. Jus, México, D. F., 1995.
- BASAÑEZ, Miguel. La Lucha por la Hegemonía en México. 6a. ed. Edit. Siglo XXI, México, D. F., 1992, Pág. 34.
- BEIJING, China. Ediciones en Lenguas Extranjeras. Madrid, España, 1985.
- BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano - Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1983.
- CARPIZO, Jorge. El Presidencialismo Mexicano. 15a. ed., Edit. Siglo XXI, México, D. F., 1978. Pág. 53.
- CARRILLO FLORES, Antonio. La Constitución y los Derechos Humanos. 4a. ed., Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1995. Pág. 94.

- CARRILLO PRIETO, Ignacio. Reformas Electorales y Reformas Políticas. 9a. ed., Edit.
- CASSIER, Ernesto. El Mito del Estado. 16a. ed., Edit. F.C.E. México, D. F., 1991. Pág. 132
- CORDERA, Rolando. La Disputa por la Nación. Edit. Siglo XXI. México, D. F., 1996. Pág. 45.
- CORDOVA, Arnaldo. Sociedad y Estado en el Mundo Moderno. 3a. - ed., Edit. UNAM, México, D. F., 1997. Pág. 110
- CORDOVA, Arnaldo. La Formación del Poder Político en México. 19a. ed., Edit. Populaera. México, D. F., 1992.
- COSSIO VILLEGAS, Daniel. El Estilo Personal de Gobernar. 34a. ed., Edit. Colegio de México, México, D. F., 1994.
- CUEVA, Mario de la. La Idea del Estado. 16a. ed., Edit. UNAM. México, D. F., 1980.
- CUEVA, Mario de la. Apuntes de Cátedra. Edit. Facultad de Derecho UNAM, México, D. F., 1961.
- CURIEL, Enrique. A la Búsqueda del Poder 15a. ed., Edit. F. C. E., México, D. F., 1990.
- FERNANDEZ DOBLADO, Luis. La Tutela del Sufragio. 5a. ed., - Edit. UNAM, México, D. F., 1994.
- FLORIS MARGADANT, Guillermo. Derecho Romano. 9a. ed., Edit. - Esfinge, México, D. F., 1992.
- GALINDO CAMACHO, Miguel. Teoría del Estado. 5a. ed., Editores Mexicanos Unidos, México, D. F., 1994.

- GETTEL, Raymond. Historia de las Ideas Políticas. Edit. Nacional, México, D. F., 1991.
- GONZALEZ ARZAD, Luis. Los Delitos Electorales. Edit. Facultad de Derecho, UNAM. México, D. F., 1997.
- GONZALEZ URIBE, Héctor. Teoría Política. 39a. ed., Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1994.
- H. SABINE, Jorge. Historia de la Teoría Política. Edit. Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1955.
- HERMAN, Heller. Teoría del Estado. 13a. ed., Edit. Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1995.
- HERRERIAS, Armando. Historia del Pensamiento Económico. Edit. Limusa, México, D. F., 1977.
- JELLINEK, Jorge. Teoría del Estado. Edit. Albatros, Argentina, 1990.
- KELSEN, Hans. Teoría General del Derecho y el Estado. Edit. Nacional, México.
- KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. 13a. ed., Abril Buenos Aires, Argentina, 1965.
- LOPEZ PORTILLO Y PACHECO, José. Génesis y Teoría General del Estado. Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1991.
- MAQUIAVELO, Nicolás. El Príncipe. Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1993.
- MAYER, J. P. Trayectoria del Pensamiento Político. Edit. Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1991.

- MORENO, Daniel. Los Partidos Políticos del México Contemporáneo. 39a. ed., Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1997
- MORENO, Daniel. Derecho Constitucional Mexicano. Edit. Pax.
- MORILLAS CUEVA, Lorenzo. El Aspecto Electoral en México. 5a. ed., Edit. F. C. E., México, D. F., 1990.
- ORTEGA LOMELI, Roberto. El Nuevo Federalismo. 10a. ed., Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1996.
- PAOLI BOLIO, Francisco. Legislación Electoral y Proceso Político en México. 10a. edit. Anuario de la UAM. México, D. F., 1995.
- PORRUA PEREZ, Francisco. Teoría del estado. Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1979.
- REYES HERÓLES, Jesús. El Liberalismo Mexicano. 29a. ed., Edit. f.c.e., México, D. F., 1979.
- REYES TABAYAS, Jorge. Bases para el Estudio del Estado. 4a. - ed., Edit. Impresiones Qualiti, México, D. F., 1990.
- ROLL, Erick. Historia de las Doctrinas Económica. Fondo de - Cultura Económica, México, D. F., 1981.
- ROUSSEAU, J. J. El Contrato Social. Edit. Tor. Buenos Aires, Argentina, s/f.
- RUIZ MASSIEU, José. Nuevo Derecho Constitucional Mexicano. - 16a. ed., Edit. Porrúa, México, D. F., 1994.
- SALDIVAR, Américo. Ideología y Política del Estado Mexicano. Edit. Siglo XXI, México, D. F., 1996.

- SERRA ROJAS, Andrés. Ciencia Política. Edit. Porrúa, S. A., - México, D. F., 1992.
- TENA RAMIREZ, Felipe. Leyes Fundamentales de México. Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., s/f.
- VALADEZ, Diego. La transformación del Estado Mexicano. 14a. ed., Edit. Diana, México, D. F., 1995.
- VECCHIO, Giorgio del. Teoría del Estado. Edit. Boach. Barcelona, España.
- VILLARROEL, Hipólito. Enfermedades Políticas de México. 4a. ed., Edit. Porrúa, S. A., México, D. F., 1994.